

**La Asociación General de
Agricultores**

CENTINELA

**de los intereses de
Guatemala**



SEPTIEMBRE DE 1953.

Imprenta Marroquín Hermanos



Digitized by the Internet Archive
in 2022 with funding from
Universidad Francisco Marroquin

<https://archive.org/details/asociacionagriguat>

**La Asociación General de
Agricultores**

CENTINELA

**de los intereses de
Guatemala**



**Publicaciones de la AGA después de la promulgación de
la Ley de Reforma Agraria.**

SEPTIEMBRE DE 1953.

I N D I C E

	Página
Mensaje al pueblo de Guatemala. — 18 Junio 1952.....	1
La AGA Protesta por las Ocupaciones Violentas de Tierras.—23 enero 1953..	7
Planes Comunistas en Acción.—28 enero.....	8
El Recurso de Amparo procede en Materia Agraria.—30 enero	10
Dar Coces contra el Aguijón.—6 febrero.....	20
Mensaje que la Asociación General de Agricultores dirige a la Ciudadanía y en especial a los Agricultores de toda la Nación.—9 febrero.....	12
Ante los Sucesos Sangrientos.—17 febrero.....	22
La Ley de Arrendamiento forzoso ya no es Ley de la República.—21 febrero	25
Las Garantías Tutelares de los Administrados.—4 marzo.....	30
Un Mitin Revolucionario y unas Palabras del Gobernante.—6 marzo.....	32
No debe Subestimarse el Sentimiento Nacional.—14 marzo.....	35
Deben Liquidarse los Atropellos de los Agraristas.—16 marzo.....	38
Los Agraristas Responsables del Desastre Actual.—21 marzo.....	40
Continúan las Arbitrariedades.—28 marzo.....	43
Uniones Cívicas de Defensa de la Tierra.—10 abril.....	46
El Irrespeto a la Ley y a las Autoridades.—18 abril.....	48
La AGA protesta por los Procedimientos Empleados contra su Director, licen- ciado don Juan Córdova Cerna.—22 abril.....	50
La Indemnización con Bonos Agrarios.—23 abril.....	52
La AGA Pide al IGSS Reconsidere el Aumento de Cuotas.—28 abril.....	54
¿Reformas a la Ley de Reforma Agraria?—30 abril.....	57
El "Affaire" del licenciado Córdova Cerna, no está Cancelado.—2 mayo.....	59
La Acción contra la Delincuencia no debe quedar en Recomendaciones.—9 mayo	64
La Inconstitucionalidad a la Orden del Día.—16 mayo.....	67
Siguen las Usurpaciones en Materia Agraria.—23 mayo.....	69
Paladino Reconocimiento de que ha habido Tierras Usurpadas.—30 mayo..	71
Nuevos Procedimientos de Usurpación.—6 junio.....	73
El Funesto Acridio Revolucionario.—12 junio.....	75
A más Hechos Sangrientos, más Lenidad en las Autoridades.—20 junio....	78
A un Año del 900.—2 julio.....	80
Obstáculos a la Defensa Profesional en Materia Agraria.—14 julio.....	83
La Asociación General de Agricultores Centinela de los Intereses Agrícolas.— julio de 1953	85

MENSAJE AL PUEBLO DE GUATEMALA

Desde el día de ayer, por Decreto 900 del Congreso, la Reforma Agraria es ley de la República. Ha concluido pues, no solamente la fase en que un grueso sector del pueblo guatemalteco adversó un proyecto de ley, sino una etapa en nuestras instituciones democráticas y republicanas. La Asociación General de Agricultores, al reafirmar sus principios de defensa de la agricultura y de sus asociados dentro del régimen legal más estricto y alejada de toda inclinación ajena a su constitución y fines, estima conveniente llevar a la conciencia nacional una declaración categórica sobre su actitud al adversar el Proyecto del Gobierno y sobre las circunstancias que mediaron en su transformación a ley de la República.

Cambio Radical en las Instituciones

Al entrar en vigor la Ley de Reforma Agraria se ha operado un cambio radical en nuestras instituciones democráticas y republicanas. Avizorando los peligros que entraña semejante cambio, tratando de preservar la Constitución de 1945 tanto en su esencia como en sus efectos, la A.G.A. se opuso a las disposiciones anticonstitucionales que contenía el proyecto. Hizo ver por medio de sus delegados ante la Comisión del Congreso que tenía en estudio el problema, que se estaba tratando de poner en vigor en Guatemala un régimen distinto del contemplado por la Constitución; publicó en la prensa alegatos jurídicos y argumentos orales en lo económico y social; planteó problemas y expuso irrefutables objeciones ante el Jefe del Ejecutivo; y no obstante todo ello, dentro de una sincronía que es mofa de nuestra democracia, ninguno de los puntos de vista sustentados por la A.G.A., ni por ninguno de los gruesos sectores de la producción que también adversaron el Proyecto, fué considerado o aceptado. La intervención de la A.G.A. y de otras instituciones no identificadas con el plan de Gobierno, se redujo

a servir de disfraz democrático en la farsa que se había planeado.

Por eso, hoy que el Proyecto es ya Ley, la Asociación General de Agricultores quiere dejar constancia que se ha operado un cambio radical en nuestro régimen institucional. Ya hoy no existe delegación de la soberanía del pueblo en tres organismos, pues uno de ellos posee en materia agraria las funciones de dos, la ejecutiva y la jurisdiccional. Según la ley, Decreto 900, el Presidente de la República es la autoridad suprema en materia agraria, con exclusión del organismo judicial. Cuando en un régimen constitucional se destruyen las bases de su funcionamiento, y uno de sus poderes limitados rompe las barreras de la ley fundamental, el propio régimen constitucional desaparece y surge la dictadura, y eso es lo que hace el Artículo 59 de la Ley de Reforma Agraria, ya que erige al Presidente de la República en suprema autoridad agraria.

Y esto no es sino el principio de una serie de leyes tendientes a la socialización absoluta del país, como premisa del establecimiento del régimen comunista. Tales son los fines de esta reforma, y así lo han declarado los economistas del Gobierno en el seno de la Comisión Extraordinaria de Estudios Agrarios. Ha sido precisamente porque la A.G.A. adversa la socialización como premisa de la comunización, que se opuso a la definición misma de la reforma como estaba en el Proyecto y está ahora en la ley. La A.G.A. vió en los conceptos y en las tendencias del Proyecto una amenaza a la integridad de nuestra democracia en formación, una desviación hacia tendencias de tipo totalitario, una inclinación decidida al marxismo, y fueron esa desviación, esas tendencias, las que combatió con firmeza y convencimiento. Desde un principio manifestó su deseo y aquiescencia a una reforma agraria justa y democrática, y recordó a los Poderes del Estado, que desde la iniciación del régimen que preside el Coronel Jacobo Arbenz, había manifestado su decisión de apoyar al Gobierno en tan ingente problema. Pero la Asociación General de Agricultores no fué llamada sino cuando ya se había levantado el telón en el primer acto de la comedia democrática que se llevaría a cabo con estudiada precisión, y sus puntos de vista quedaron en el vacío de los organismos oficiales: eso sí, llegaron al pueblo entero que la respaldó moralmente.

Y ahora se presentan las graves perspectivas de una radical alteración en el concepto democrático de Guatemala y en el funcionamiento de sus organismos constitucionales,

ya que una vez puesta a prueba la constitucionalidad de la ley, lo cual vendrá a ser ilusorio por las mismas cortapisas, presiones y sanciones que crea el nuevo régimen agrario, los ciudadanos deberán ajustarse a una situación que ya no responde a la democracia instituída por la Constitución, sino que responde a un credo económico y político que sigue los lineamientos del marxismo-stalinismo. Y tal circunstancia nos singulariza no solamente en la comunidad centroamericana de naciones, sino en el Continente, puesto que la vigencia de la ley da una interpretación a los términos de nuestra Carta Política que no corresponde al concepto universal de la democracia de Occidente, sino antes bien al concepto que se ha impuesto en la Europa Oriental por la fuerza de las armas y de la penetración política comunista.

La A.G.A. dentro de la Ley

Como institución perfectamente apolítica, en la que están reunidos los sectores más variados de la sociedad guatemalteca, la Asociación General de Agricultores cumplió un deber patriótico e institucional al exponer sus puntos de vista sobre la Reforma Agraria. Siendo la entidad que reunía el mayor número de las personas que serían afectadas o perjudicadas en su patrimonio por una Ley Agraria, tenía necesariamente que salir a la palestra pública aun cuando su buena fe había sido sorprendida por el secreto en que se había formulado el Proyecto del Ejecutivo. Fué por ello, que consultando las opiniones más autorizadas de agricultores, juristas y expertos en materia económica y social, así como las de aquellos hombres que por su experiencia en las cuestiones más vitales de la nación podían orientar con acierto, así inició la A.G.A. sus gestiones ante la opinión pública y ante el Gobierno. Equipada como ninguna otra entidad, con el tesoro inapreciable de la experiencia, y animada de franco espíritu democrático, concurrió a las Juntas a que fuera invitada por el Jefe del Gobierno. Sus delegados guardaron en todo tiempo y lugar la compostura necesaria, e hicieron oír sus objeciones con respeto pero con energía: denunciaron los vicios y defectos que encontraban al proyecto y condenaron sus tendencias antidemocráticas.

Sin embargo, la Asociación General de Agricultores ha sido objeto de calumnias y acusaciones que se ha visto obligada a desmentir públicamente. En una campaña de desprestigio que no puede ser sino parte del mismo plan de acción para transformar nuestro régimen institucional y mo-

dificar las raíces más hondas de nuestra democracia, la A.G.A. se ha visto asaltada a calumnias, denuestos e insultos por los más exaltados partidarios de la Reforma Agraria Socialista. Y en el futuro, si se ha de juzgar por precedentes, no se cree libre de la saña de sus enemigos, cuando dentro del régimen de la ley que siempre ha observado, continúe defendiendo a sus asociados y los intereses de la agricultura en general. Pero a pesar de todo, la Asociación General de Agricultores continuará en su posición absolutamente apolítica, posición que la faculta para que siempre dentro de las garantías que dan las leyes, ejerza su función pública en materia agrícola, la cual ha sido y continuará siendo beneficiosa para el país. En el curso de las últimas semanas, y aun en forma no sistemática en los anteriores tiempos, la A.G.A. se ha visto acusada por los periódicos oficiales de haber actuado políticamente. Fuera de no ser cierto y de tratarse de campaña interesada y sectaria, la A.G.A. reitera sus terminantes declaraciones sobre su posición exclusiva de defensa de sus asociados y de los intereses agrícolas, y hace un recordatorio sobre la parcialidad con que se ha tratado el problema de la intervención, esa sí absolutamente política, partidista y sectaria, de los sindicatos, quienes en épocas electorales y otras de manifestación de opinión se han transformado en clubes políticos y aun en centros de reclutación de milicias populares.

Si la Asociación General de Agricultores obró de entero acuerdo con la ley; si de buena fe colaboró con el Gobierno; si con el mejor consejo y el ánimo más honrado informó a la opinión pública, bueno es dejar sentado en qué forma actuó el Gobierno de la República por medio de sus más altos organismos. Ya se ha dicho de la forma sorpresiva en que fué presentado a la opinión pública el Proyecto de Ley Agraria; ya es del conocimiento de la ciudadanía cómo fué presentado al público, en forma casi acabada, con sus alegatos preparados, puesto que la ley no contiene mayores cambios al proyecto. Fué elaborado en el secreto más absoluto, sin dejar a los sectores más caracterizados de la producción que hicieran ver sus puntos de vista ni que influyeran en el ánimo de todos los ciudadanos. Los empleados públicos y quienes de una u otra manera dependen de la máquina gubernativa no tuvieron tiempo ni ocasión de forjarse un criterio independiente, sino tuvieron que aceptar el proyecto como la opinión ya formada del Gobierno: quien se opusiera a ella se manifestaría enemigo del régimen y sería destituido: todas las consecuencias de una imposición. En lo privado,

muchas personas al servicio del Estado o sus diversas instituciones y organismos, manifestaron su abierta repulsa a las tendencias del proyecto; públicamente hicieron forzadas manifestaciones de adhesión o callaron, al igual que en los tiempos de las viejas dictaduras liberales. En tanto la A.G.A. discutía con el Presidente de la República, la Comisión de Estudios Agrarios del Congreso aprobaba a toda marcha la ley. Cuando los delegados de la A.G.A. concurren a dicha Comisión, en tanto se discutían sus enmiendas, los verdaderos artículos de la ley eran aprobados a toda marcha en las tardes; y en las intervenciones de los delegados a la A.G.A. sus réplicas eran cada vez más dispersas, puesto que una interminable lista de oradores oficiales intervenía en las discusiones. Y como no se podía alterar ni retrasar el plan previsto por los adalides revolucionarios, el dictamen de la Comisión de Estudios Agrarios fué aprobado y publicado cuando aún se discutían enmiendas presentadas por la Asociación General de Agricultores. Todavía entonces pretendían algunos diputados que la A.G.A. continuara prestándose a la farsa democrática, ya que en el seno del Congreso se daría el acto final. Fué así como mediante una maniobra, coartando a los representantes de la oposición en el ejercicio de sus derechos parlamentarios, y mediante un clima de amenazas y coacción adicionado por la presencia de campesinos armados de machetes, se consumó la aprobación del Proyecto y se emitió la Ley de Reforma Agraria. Y para hacer más risible la farsa, para que la burla a la Constitución fuese mayor, se introdujo el Artículo 91 al Decreto 900, que es la disposición confiscatoria más monstruosa que poder alguno haya emitido en nuestra historia, por las proporciones y alcances que tiene. Y ayer, diez y siete de junio, tal y como lo anunciara con anticipación de más de doce días el Presidente del Organismo Legislativo, el Proyecto se transformó en ley. Cuarenta días exactamente se necesitaron para fraguar y consumir el atentado contra nuestra democracia; cuarenta días bastaron para considerar y medir todos los problemas de la Reforma Agraria; en cuarenta días se dió a luz lo que significa tal vez la desaparición total del régimen institucional y la quiebra de nuestra economía. Leyes de menor trascendencia; problemas nimios aun, tomaron la atención del Gobierno por mucho más tiempo: ésta en cambio, tenía programa. Esto no es sino una demostración triste de nuestra realidad política; es una prueba de que todo cuanto pudo haber hecho la A.G.A. por hacer valer sus puntos de vista, era inútil. La batalla

estaba ganada de antemano por las fuerzas al servicio de la consigna política, y así lo manifestaron sin recato alguno voceros de esas fuerzas.

Que Juzgue el Pueblo

El pueblo, a cuya conciencia siempre llega la verdad; el que tarde o temprano mide y juzga las actuaciones de sus dirigentes y de los ciudadanos y entidades en la vida pública, tendrá en todos los hechos expuestos los elementos de juicio necesarios para valorar la actitud de la Asociación General de Agricultores y la de los hombres del poder. Al juicio inexorable del pueblo, al juicio desapasionado y certero de la historia dejamos el balance y fallo de estas actuaciones. Desgraciadamente, la Asociación General de Agricultores cree que cuando la experiencia demuestre los errores y vicios de un experimento que se quiere llevar a cabo a costa de los sacrificios de un pueblo entero, mucho se habrá perdido irremediablemente. Pero contra el empecinamiento que han mostrado quienes tienen en sus manos los destinos de Guatemala no caben razones ni ruegos, y lo único que podrá hacer la A.G.A. será, dentro del limitado campo legal en que la propia ley la coloca, defender hasta donde sea posible, a sus asociados y los intereses agrícolas, para que los alcances del Decreto 900 y sus posibles posteriores reformas y enmiendas, sean lo menos dañinos a la economía nacional y a los intereses de los agricultores.

En esta ocasión es preciso agradecer también a los guatemaltecos, la favorable acogida que tuvo la gestión de la Asociación ante el Gobierno y sus diferentes organismos, y en particular el respaldo unánime que mereció la campaña de prensa iniciada para combatir el Proyecto del Ejecutivo. Hay reconocimiento también para todas las personas que en forma desinteresada y espontánea pusieron sus empeños y servicios en pro de la causa que defendió la A.G.A., y para los agricultores que colaboraron con ella.

Si el carácter de un pueblo y su supervivencia se juzgan por las instituciones que representan a sus diversos sectores, creemos que la A.G.A. ha sabido interpretar el sentir de la gran mayoría de los guatemaltecos, quienes adversan un cambio radical o una substitución de sus instituciones democráticas, y quienes ansían una reforma agraria justa, acorde con la realidad nacional y dentro de los preceptos constitu-

cionales. Por ese fin ha luchado la Asociación General de Agricultores, y por ese fin continuará luchando siempre en forma pública y al amparo de las leyes de Guatemala.

Guatemala, 18 de junio de 1952.

La A.G.A. protesta por las ocupaciones violentas de Tierras

La Asociación General de Agricultores denuncia ante el pueblo de Guatemala los graves acontecimientos que se han venido desarrollando en algunos departamentos de la República desde el día 19 del mes en curso, especialmente en Escuintla y Jutiapa, y de los cuales la prensa ya ha informado ampliamente. Gruesos contingentes de hombres armados han invadido varias fincas de propiedad particular, procediendo a delimitar parcelas que distribuyen entre ellos, sin más ley que el antojo y capricho de quien capitanea la columna invasora. Los propietarios o sus representantes que piden a los usurpadores la constancia que respalde su actuación son amenazados gravemente.

Hechos como los que denunciarnos han creado en el campo un ambiente de inseguridad y de descontento, porque las autoridades ante quienes han recurrido los afectados en demanda de protección se han abstenido de cumplir con su deber, que en estos casos no es otro que garantizar a los habitantes de la República el goce de sus derechos constitucionales a la seguridad de sus personas y bienes y el de restablecer el orden conculcado por quienes audazmente proceden al margen de la legalidad conduciendo al país a la anarquía más funesta.

Ignoramos hasta ahora las manos que conducen estos grupos a cometer tales depredaciones contra la propiedad privada, contra las leyes y contra la Constitución de la República. Por eso exigimos que las autoridades dicten las medidas pertinentes, interviniendo con la energía y drasticidad que amerita la situación.

Una situación como la que comentamos ya no es un problema que afecte exclusivamente a un grupo de propietarios de tierras despojadas, hiere en lo más profundo la tranquilidad y el orden de toda la Nación. Guatemala no podrá sobrevivir como Estado organizado jurídicamente, si el Derecho, si las leyes y la Constitución, se transforman en simple letra muerta, acatada en apariencia, pero en la realidad materia de burlas, de irrespeto y de desprecio.

Una serie de hechos que derrumban la arquitectura legal de la Nación, que despojan a guatemaltecos de la tranquilidad y seguridad que deben gozar, hechos que aparecen simultáneamente en regiones diversas de la República, sería infantil no juzgarlos como parte de un vasto plan preconcebido y cuidadosamente ejecutado.

El artículo 23 de la Constitución de la República consagra una de las bases fundamentales a toda sociedad, como es el principio de autoridad. Dicho precepto declara: "EL ESTADO PROTEGE DE MANERA PREFERENTE LA EXISTENCIA HUMANA. LAS AUTORIDADES DE LA REPUBLICA ESTAN INSTITUIDAS PARA MANTENER A LOS HABITANTES EN EL GOCE DE SUS DERECHOS QUE SON PRIMORDIALMENTE LA VIDA, LA LIBERTAD, LA IGUALDAD Y LA SEGURIDAD DE LA PERSONA, DE LA HONRA Y DE LOS BIENES".

La Asociación General de Agricultores protesta enérgicamente:

- 10.—Por la ejecución de hechos delictuosos que se están cometiendo en forma organizada y con pretensiones de sistematización, y
- 20.—Por la tolerancia y pasividad observada por las autoridades y funcionarios frente a la violación de los derechos y garantías que la Constitución y las leyes vigentes establecen.

La AGA exige a las autoridades de la república que garanticen eficazmente a los habitantes en el goce de sus derechos fundamentales; que consignen a los tribunales correspondientes a los que han cometido los hechos delictuosos y que dentro de las facultades que les asignan específicamente las leyes, tomen las medidas necesarias para el mantenimiento del orden público.

Guatemala, enero 23 de 1953.

Planes Comunistas en Acción

Dos hechos de significación se han producido en los últimos días, los que indudablemente obedecen a diversas fases del plan que se está poniendo en marcha en Guatemala para consolidar las posiciones de los personajes que se empeñan en llevar a nuestra patria al caos, al desbarajuste, al despeñadero, a la anarquía.

Primero, la consigna de ocupación violenta de las fincas de propiedad particular en diferentes zonas de la República. Con sistematización reveladora de lo que el líder del campesinado ha calificado como "nueva táctica". La ocupación de hecho, con violencia y premeditadamente preparada para provocar el choque que tanto desean los portavoces de la orden exterior, en negación de toda juridicidad. Y las autoridades obligadas a mantener a los habitantes en el goce de sus derechos se han cruzado de brazos ante la comisión de estos delitos, que conmueven profundamente a toda la ciudadanía, perfilándose la complicidad con los perturbadores del orden.

Después, la coacción al Organismo Judicial, en afán de intimidar a los funcionarios de la Justicia para que se conviertan en funcionarios de la injusticia. Para que desacaten los claros preceptos constitucionales que están sobre toda otra ley. Para que todo el Organismo Judicial se pliegue obediente y sumiso a los designios inapelables de quienes se han erigido en árbitros de Guatemala. Para que el más alto tribunal de la República niegue validez a la Ley Fundamental.

Esta coacción se inició por los líderes a través de las organizaciones que capitanean, por medio de mensajes a la Corte Suprema pidiéndole que se abstenga de conocer de los recursos de amparo que con fundamento en la Constitución han interpuesto los afectados por las primeras resoluciones que el Presidente de la República ha dictado en uso de la "supuesta facultad de órgano supremo de la Reforma agraria". Nada extraña este método de lucha, pues es perfectamente conocida la filiación de los líderes máximos de la CGTG y de la C.N.C. Nada extraña en ellos esta postura, pues poca importancia les merece la opinión de sus propios asesores jurídicos, que desde hace tiempo se manifestaron categóricos en cuanto a la procedencia del recurso de amparo.

Pero sí llama la atención el contenido de las declaraciones de un bloque de diputados, que aparecieron en la prensa, que también menosprecian la constitucionalidad del amparo y amenazan con torpeza a los Magistrados de la Corte. Esta postura, inadmisible en un régimen democrático, pretende nada menos que anular a uno de los organismos del Estado, supeditándolo a otro organismo que está bajo su control.

Estos hechos confirman que la infiltración del comunismo es cada día más fuerte en Guatemala; que la "nueva táctica" ha sido puesta en acción por los dirigentes del co-

munismo porque gozan del respaldo de autoridades, ya que los delitos cometidos contra la propiedad, la seguridad y el orden público, han sido ejecutados en su presencia, sin tomar las medidas represivas inmediatas. Y que esa infiltración, que es ya una realidad en la Administración y en el Congreso, pretende avasallar también al Organismo Judicial, que hasta hoy no ha aceptado ese tutelaje.

La Asociación General de Agricultores confía en que los magistrados y jueces que integran el Organismo Judicial velarán por la plena vigencia de la Constitución de la República y rechazarán virilmente las coacciones y amenazas con la firmeza que les brinda un recto proceder.

Guatemala, 28 de enero de 1953.

El Recurso de Amparo procede en Materia Agraria

La Ley de Reforma Agraria, Decreto 900 del Congreso, contiene en su artículo 98, un precepto que literalmente dice: "Los actos y resoluciones de los órganos de la Reforma Agraria no son puramente administrativos, sino son actos de autoridad, eminentemente ejecutivos y, de consiguiente, contra ellos no cabrán más recursos que los establecidos en esta ley.

Tal precepto ha querido interpretarse por los exégetas de la Reforma Agraria, como una exclusión de los recursos constitucionales establecidos por el artículo 51 de nuestra Carta Magna, los cuales se regulan por la Ley de Amparo. Tal interpretación está totalmente alejada de los principios constitucionales, ya que su aplicación equivaldría a nulificar las garantías que la Constitución establece.

El artículo 51 de la Constitución reza así: "Toda persona tiene el derecho de pedir amparo en los casos y para los efectos siguientes: a) PARA QUE SE LE MANTENGA O RESTITUYA EN EL GOCE DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS QUE LA CONSTITUCION ESTABLECE; b) PARA QUE EN CASOS CONCRETOS, SE DECLARE QUE UNA LEY, UN REGLAMENTO O CUALQUIER DISPOSICION DE LA AUTORIDAD' *no le es aplicable*". El texto constitucional, no hace pues excepciones, SINO DA UNA REGLA GENERAL, DE OBSERVANCIA IMPERATIVA EN TODOS LOS CASOS DE VIOLACIONES CONSTITUCIONALES. El régimen agrario NO ESTA

por encima de la Constitución, sino que **ESTA SUJETO** a la regla de que toda disposición legal, gubernativa o de cualquier otro orden, será nula *ipso jure*, si disminuye, restringe o tergiversa el ejercicio de los derechos constitucionales. Y como uno de los derechos constitucionales es el de **PEDIR AMPARO** en los casos y circunstancias establecidos por la propia Constitución, de ahí la conclusión jurídica que en materia agraria **SI CABE EL RECURSO DE AMPARO**, como también cabe el de exhibición personal o de *habeas corpus*, doctrina ya admitida por los Tribunales.

Consecuencia de lo anterior resulta, que si el artículo 98 del Decreto 900, disminuye, restringe o tergiversa una garantía constitucional, como lo es el derecho de pedir amparo, tal disposición legal **ES NULA IPSO JURE**, por ministerio de la misma Carta Fundamental.

Tal situación se deriva de la circunstancia de ser el recurso de amparo un derecho constitucional, ajeno a las cuestiones civiles, penales, administrativas, agrarias o de cualquier otro orden. Para la resolución de las diversas cuestiones que surgen constantemente entre los particulares y los órganos del Estado, existen leyes y procedimientos, que las autoridades están en el deber de cumplir. Esas leyes y esos procedimientos, deben aplicarse siempre y cuando no lesionen derechos constitucionales. Al ser lesionados o violados éstos, la Constitución da el remedio, por medio de los recursos constitucionales como los ya enunciados. Trátase de materia civil o agraria, al lesionarse la garantía constitucional de la defensa en juicio se tiene el derecho a recurrir en amparo ante los Tribunales.

El Congreso, al regular materias atinentes a las garantías individuales, **NO PUEDE PASAR POR ENCIMA DE LA CONSTITUCION; NI PUEDE DICTAR LEYES QUE VAYAN CONTRA EL TENOR EXPRESO DE LA MISMA.** La autoridad del Congreso para dictar las leyes, **ESTA SUJETA A LAS NORMAS CONSTITUCIONALES.** Ni el Congreso ni ninguno de los organismos del Estado puede dictar disposiciones que contraríen normas de la Constitución.

En materia agraria, los organismos creados por la Ley de Reforma Agraria, tienen la obligación de aplicar la ley en todo aquello que no contraríe a la Constitución. No pueden abrogarse facultades judiciales, porque éstas han sido confiadas, con exclusividad **ABSOLUTA**, a los Tribunales

de la República. Y es a los Tribunales a quienes compete conocer los amparos que se presenten por violaciones a la Constitución.

El Tribunal de Amparo, es de jurisdicción privativa, organizado para conocer de los casos de violación de las garantías constitucionales. Unicamente Tribunales del Organismo Judicial son competentes para conocer de tal materia, y dondequiera que ocurran violaciones constitucionales, ahí ESTARA EL AMPARO PARA SALVAGUARDAR EL ESTADO DE DERECHO que implica el mantenimiento de un mínimo de garantías. Asimismo, la Constitución en su artículo 172, establece que se procederá conforme a la Ley de Amparo, cuando se reclame por abuso de poder contra quienes ejerzan funciones ejecutivas. En consecuencia, aun en la hipótesis no admisible, que los actos agrarios dejaran de ser administrativos, PROCEDERIA CONTRA ELLOS EL RECURSO DE AMPARO.

ESTAMOS SEGUROS que los Tribunales de Justicia sabrán hacer respetar las garantías establecidas en la Constitución; que en su actuación los Jueces tendrán presentes las disposiciones terminantes de la Carta Magna, a efecto de no dejarse intimidar por quienes propugnan porque la Ley de Reforma Agraria quede fuera del orden jurídico del Estado. CUENTAN con el respaldo de todos los guatemaltecos, toda vez que la validez de los recursos constitucionales va en beneficio no solamente de quienes pierden derechos de propiedad, sino también de aquellos que legítimamente han adquirido derechos en virtud de la ley.

Guatemala, 30 de enero de 1953.

Mensaje que la Asociación General de Agricultores dirige a la Ciudadanía y en Especial a los Agricultores de toda la Nación

LA ASOCIACION GENERAL DE AGRICULTORES siempre vigilante de los intereses legítimos de sus agremiados y de todos los agricultores de la Nación, ha seguido paso a paso el proceso de la Ley de Reforma Agraria, desde su gestación y orígenes, hasta su actual realización a través de los órganos encargados de ello. Como no podía menos nuestra Entidad en las distintas etapas por que pasara hasta ser emitido el Decreto 900 del Congreso de la República, estuvo pronta a señalar los vicios de inconstitucionalidad que este entraña; pero desafortunadamente ya el ca-

mino estaba trazado y de esa cuenta, la crítica constructiva y las observaciones hechas, fueron caprichosas y sistemáticamente desatendidas. Ya en marcha la realización de la Ley de Reforma Agraria, no han sido pocos los atropellos cometidos contra la propiedad privada por los órganos encargados de la aplicación de la misma, y de ello ha dado oportuna cuenta la prensa desvinculada del oficialismo, marginando en forma responsable y condenatoria más de una extralimitación cometida por los órganos de la Ley de Reforma Agraria, y reprobando más de una conculcación de los preceptos legales que ésta contiene. El mismo poder público ha pedido intervención a los jueces para que inicien los necesarios procesos contra los que, obedientes a consignas y prédicas demagógicas, se han posesionado en forma violenta, y desde luego al margen de la ley, de algunas propiedades de pertenencia del Estado.

Más lo anterior, con ser de suma gravedad palidece ante los últimos acontecimientos que se han originado por la aplicación atentatoria y de-tentatoria de la Ley de Reforma Agraria. En efecto: las transgresiones a nuestra vida institucional realizadas por el Jefe máximo de los órganos agrarios, que lo es también del Organismo Ejecutivo con notorio desacato de resolución proferida por el Tribunal de Amparo, es algo que va más allá de los límites de lo calificable: Desobedeciendo el mandato de aquel alto Tribunal de la República, a través de una pretendida consulta, consigna a los honorables magistrados que integran aquel tribunal y que le señala término dentro del que debe informar sobre las violaciones constitucionales denunciadas, consigna repetimos, al Congreso Nacional a quienes dentro del límite de su competencia y jurisdicción procedieron con sujeción a las normas legales, para que el Organismo Legislativo con las instrucciones correspondientes llegara sin formación de expediente alguno a destituirlos.

Es más que posible que en la vida democrática continental no se haya presentado un caso que cause tanta desazón y desconcierto. Otra cosa sería si Guatemala no se rigiera por normas dentro de las cuales tienen que actuar todos los Organismos del Estado, para el mantenimiento y regulación de su vida política en orden al derecho; pero desafortunadamente parece ser que el golpe dado al Organismo Judicial, ya es funesto augurio de que se inicia descubiertamente un régimen al margen de la constitución de la República y de las Leyes que nos rigen, porque si el Presidente de la República — Jefe máximo de los órganos

Agrarios — en vez de cumplir y hacer que se cumpla la Constitución y las Leyes de la República tal y como lo ordena el inciso 1º del Arto. 137 de la Carta Fundamental, resulta como aparece de los últimos penosos sucesos, oponiéndose a los propios mandatos constitucionales y judiciales, no puede esperarse otra cosa que el advenimiento pavoroso de los TRIBUNALES POPULARES, sin más normas que el capricho, la arbitrariedad y el desenfreno.

Ante un estado de cosas así, la Asociación General de Agricultores, siempre respetuosa de la Constitución y leyes de la República, no debe dejar pasar en silencio la actitud usurpadora del Congreso de la República, organismo que arrogándose funciones que pertenecen con exclusividad absoluta al Organismo Judicial, ha entrado a interpretar normas constitucionales con notoria violación del Arto. 170 de nuestra Carta Magna que atribuye a este último Organismo lo relacionado con la Constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes adjetivas. La Asociación General de Agricultores no puede ni debe dejar de aunar su voz de protesta y repudio a la de los círculos profesionales, universitarios y demás entidades, quienes justamente indignados ya la han hecho pública, pues que silenciar ante la postura del Organismo Ejecutivo y la del Congreso de la República, que lo secunda con el propósito evidente de anular al Organismo Judicial, sería algo que pondría a la Asociación General de Agricultores dentro de un marco de indignidad patriótica. El Congreso de la República al conocer una consulta que le hiciera el Jefe máximo de los órganos agrarios, resolvió que la Honorable Corte Suprema de Justicia no puede ni debe aceptar recursos de amparo en relación con la Ley de Reforma Agraria y de acuerdo con el espíritu y la letra del Arto. 98 del Decreto 900 del Congreso. La aludida resolución del Congreso viola, entre otros los Artos. 24 y 51 constitucionales, preceptos que por su orden norman que NINGUN ORGANISMO DEL ESTADO ni funcionario público tiene más facultades o autoridad que las que EXPRESAMENTE les confiere la ley; y las facultades atribuidas al Congreso en tal orden de cosas (Arto. 119, Inc. 1º) son únicamente las de decretar, interpretar y derogar las leyes, pero jamás tal interpretación o derogatoria puede ser referida a la constitución de la República. El Arto. 51 constitucional fija con imperativa claridad que toda persona tiene el derecho de pedir amparo con objeto de que se le mantenga o en su caso se le restituya en el goce de los derechos y garantías que

la Constitución establece, y para que en casos concretos se declare que una ley, un reglamento o CUALQUIER DISPOSICION DE LA AUTORIDAD no le es aplicable. Siendo esto así, el Congreso, extralimitándose en las funciones que constitucionalmente le están atribuidas, impide, pues que así lo resuelve, que la Honorable Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, conozca sobre denuncias transgresiones realizadas contra la Ley constitutiva. Para el caso, es necesario señalarlo, nada importa que se trate del alto Organismo Agrario, importa sí, que la transgresión se haya consumado, y que si así fuere, el orden constitucional sea restablecido. Pero donde las violaciones constitucionales son más notorias es cuando el Congreso de la República no sólo fija normas sobre la aplicación de las leyes — sin facultad para ello — sino que por virtud de no haber acatado tales normas hasta ese momento fijadas destituye al Presidente del Organismo Judicial y tres magistrados más que integraban el Tribunal de amparo. (Con este acto es indudable que el Congreso se ha puesto al margen de la constitución con irritante menosprecio de los Artos. 2º y 168 constitucionales. En efecto, la actitud de superioridad y supeditación sobre el Organismo Judicial que con la elocuencia de sus resoluciones ha impreso el Organismo Legislativo, no puede ser más notoria y evidente, y al respecto el Arto. 2º citado fija que la soberanía radica en el pueblo quien delega su ejercicio en los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, entre los cuales no hay SUBORDINACION: siendo así fácil inferir que por tal circunstancia el Organismo Legislativo no puede, le está vedado dar al Organismo Judicial normas para la aplicación de las leyes, lo que a este compete con absoluta exclusividad; y en cuanto al Arto. 168, la resolución del Congreso destituyendo a los magistrados de la Honorable Corte Suprema, no es sólo un flagrante atropello al aludido precepto sino que viola las garantías contenidas en los Artos. 42 y 52. (En efecto, el Congreso pasando sobre elementales principios de equidad incorporados en la legislación universal y terminantemente consignados en la constitución de la República, ha depuesto a los magistrados de la Corte Suprema sin ser oídos.

Cuando hemos hablado de que el irrespeto a los mandatos constitucionales y judiciales fatalmente habrá de conducir al advenimiento pavoroso de los TRIBUNALES POPULARES, sin más normas que el capricho, la arbitrariedad y el desenfreno, ha sido porque ya en el clima revo-

funcionario han sonado voces destempladas como la del profesor Víctor Manuel Gutiérrez, líder máximo del comunismo criollo y principal dirigente de la CGTG. El profesor y líder rojo Gutiérrez, en ocasión que le fuera ofrecida al presidente Arbenz una manifestación obrero campesina de solidaridad y adhesión, sin empacho alguno y entre vivas al Presidente de la República, dijo que tenía conocimientos de que se pretendía llevar a cabo una huelga en los Tribunales, pero que esto era cosa que debía tener sin cuidado a los partidos revolucionarios, pues que se podía vivir sin Tribunales pero no se podía vivir sin tierras; agregando que llegado el caso — el de la huelga de tribunales — con los abogados que militaban en los partidos políticos podía impartirse justicia, y que en último caso, no se necesitaba poseer título de abogado para actuar conforme a la ley, pues que pueden habilitarse a ciudadanos para ejercer las funciones de jueces y magistrados. No puede ser más claro el anuncio de los Tribunales Populares codiciados por el elemento comunista. La verdad es que conturba el solo pensar que haya quien se autocalifique de demócrata y hable de la negación total de nuestras instituciones, y más conturba todavía el que esa negación sirva de bandera demagógica en un mitin ante el Jefe del Ejecutivo. La Asociación General de Agricultores hace suyas las palabras que al ser destituido de la presidencia del Organismo Judicial, pronunciara el Lic. Arturo Herbruger Asturias. Ellas constituyen una honda advertencia para nuestros destinos venideros: con voz tranquila y reposada el Lic. Herbruger Asturias dijo que si su destitución tan solo implicaba una destitución de funcionarios por razón de resentimientos personales y que si no existía ningún propósito de supeditar la justicia a otros organismos del Estado, en ese caso nada se había perdido pero que si por el contrario el movimiento implicaba que se iba a sustituir la justicia legal por la justicia administrativa, retornándose así al antiguo régimen judicial de los hombres de paja y negándose la libertad a los jueces y magistrados para resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, entonces dijo: “este día es un día de luto para la patria y para la revolución. Significará en ese triste caso que se ha puesto fin al régimen de derecho de la democracia y principia el policíaco de la dictadura o el demagógico de la masa”.

Ante un estado de cosas así, la Asociación General de Agricultores firme en el propósito de mantener sus posturados de defensa Gremial, no ha vacilado en hacer público

su repudio por los hechos relacionados y seguirá al servicio y defensa de los imperativos deberes contenidos en sus estatutos, siempre dentro del más absoluto respeto a las instituciones y leyes del país y excita al ciudadano presidente de la República, para que no subestime la gravedad y trascendencia del momento que vive el país y excita igualmente al Organismo Legislativo para que en gracia del sostenimiento de la vida democrática a que Guatemala aspira, se reconsideren los graves hechos que han dado origen a una repulsa ciudadana, podemos decir, que total; hechos que tan poco dicen del respeto debido a las normas jurídicas en que está inspirada la Constitución Revolucionaria de 1945.

La Corte Suprema de Justicia ampara al agricultor Ernesto Leal Pérez contra el Presidente de la República por abuso de Poder.

RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE AMPARO: "Se admite el presente recurso de amparo que por abuso de poder y con base en el artículo 172 de la Constitución de la República interpone el ciudadano Ernesto Leal Pérez contra actos y procedimientos del ciudadano Presidente de la República, de quien se mandan pedir los antecedentes o, en su defecto, informe circunstanciado dentro del perentorio término de veinticuatro horas; y por aparecer que de la consumación del acto reclamado resultaría un daño irreparable, se acuerda la suspensión provisional del procedimiento que motiva el recurso. Transcribase al Registro de la Propiedad Inmueble y al funcionario recurrido por medio de la Presidencia del Organismo Judicial. Artículo 51 de la Constitución; 1º, 3º y 8º; 9: 11 y 12, inciso a) de la Ley de Amparo; y 4º del Decreto Gubernativo 1862".

El Presidente de la República no obedece el mandato de la Corte Suprema.

RESPUESTA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA: "Honorable Corte Suprema de Justicia: Jacobo Arbenz Guzmán, Presidente Constitucional de la República, atentamente comparece en cumplimiento de la ley, y en uso de la audiencia que se le ha conferido por ese honorable tribunal en el recurso de amparo que contra él se

ha interpuesto por el señor Ernesto Leal Pérez y, al hacerlo EXPONE:

Que de conformidad con el artículo 170 de la Constitución de la República corresponde a los tribunales de justicia, juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado y, aplicar las leyes en todos AQUELLOS QUE LAS HAGAN DE SU CONOCIMIENTO.

Que el artículo 98 del Decerto 900 del Congreso excluye del conocimiento de los tribunales ordinarios o extraordinarios de justicia los actos de autoridad no puramente administrativos y eminentemente ejecutivos que se promulgan a través de las resoluciones de los órganos, de la Reforma Agraria; y, que con apoyo en el artículo 39 constitucional que dispone que la obediencia en lo civil o en lo militar respecto a órdenes que afecten a civiles tiene como límite la manifiesta legalidad del mandato, ha decidido turnar el asunto al honorable Congreso de la República en consulta, para que en ejercicio de sus facultades, resuelva lo procedente en este caso.

En tal virtud, el Presidente Constitucional de la República y órgano supremo de la Reforma Agraria, no entra a evacuar el fondo de la audiencia, porque considera que el honorable tribunal que lo confiera, no puede tener bajo su conocimiento por mandato de la ley, los actos o resoluciones que llevan a cabo o dicten las autoridades de la Reforma Agraria. — Guatemala, 5 de febrero de 1953".
GOLPE DE ESTADO. — El Congreso, sin oírlos, decreta arbitrariamente la destitución de los cuatro magistrados que en cumplimiento de la ley constitutiva conceden el amparo. — Se rompe el régimen institucional de la República.

"Decreto número 945.

El Congreso de la República de Guatemala, DECRETA: Artículo único. — De conformidad con lo establecido en el inciso 9º del artículo 115 de la Constitución de la República, se destituye de sus cargos, al licenciado Arturo Herbruger Asturias, Presidente del Organismo Judicial; a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, abogados Francisco Carrillo Magaña, Justo Rufino Morales y José Vicente Rodríguez. Pase al Organismo Ejecutivo para su publicación. — Dado en el Palacio del Organismo Legislativo: en Guatemala, el seis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres, año noveno de la Revolución.—

Julio Estrada de la Hoz, Presidente; Jaime Barrios Archila, secretario; Guillermo Obando A., secretario.

Palacio Nacional: Guatemala, seis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres. — Publíquese. Arbenz. — El Ministro de Gobernación, A. Charnaud M."

**LA DICTADURA AGRARIA. — CONTRA LOS IMPEL-
RATIVOS DE LA CONSTITUCION, EL CONGRESO
CONCEDE PODERES OMNIMODOS AL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA**

Guatemala, 6 de febrero de 1953.

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a usted, con el objeto de transcribir a usted, la resolución tomada por el Congreso de la República, que literalmente dice: El Congreso de la República de Guatemala, respondiendo a la consulta que el ciudadano Presidente de la República en su carácter de órgano supremo de la Reforma Agraria. RESUELVE: QUE la honorable Corte Suprema de Justicia, no puede ni debe aceptar recursos de amparo en relación con la Reforma Agraria, de acuerdo con el espíritu y la letra del artículo 98 del Decto. 900 de este alto Organismo, y por consiguiente, al salirse de la terminante disposición del mencionado artículo, incurre en un desconocimiento de la ley que apareja ineptitud y como consecuencia, demuestra una manifiesta incapacidad para administrar justicia. Por otro lado, el Congreso considera que la Corte Suprema de Justicia carece de jurisdicción y de poder legal para haber dictado el mandato de evacuar la audiencia al órgano supremo de la Reforma Agraria. — Guatemala, febrero de 1953.

Con toda consideración aprovecho la oportunidad para patentizar a usted las muestras de mi distinguida consideración. — Alfonso Fortuny, secretario.

Señor Ministro de Gobernación. Palacio Nacional. — Presente".

**LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEPUESTA POR
EL CONGRESO, HACE ENTREGA A LOS NUEVOS
MAGISTRADOS ELECTOS**

**PALABRAS DEL MAGISTRADO PRESIDENTE.
LICENCIADO ARTURO HERBRUGER ASTURIAS:**

"Hago entrega del alto cargo para el que fui nombrado por designación del Congreso, sin ningún sentimiento de rencor. Acato la resolución del Organismo Legislativo y declaro expresamente que no interpondré contra ella

ningún recurso o dilatoria. En el aspecto personal, poca o ninguna importancia puede tener la destitución de que se me hace objeto en unión de tres colegas del Supremo Tribunal; pero en el orden de los intereses generales del país, es de grandísima trascendencia y debe hacer meditar seriamente a todos los ciudadanos responsables, que se preocupan del porvenir de la patria.

Si la destitución implica tan sólo una destitución de funcionarios, por razón de resentimientos personales, si no existe ningún propósito de supeditar la justicia a otros organismos del Estado, si los nuevos Magistrados pronuncian el juramento ritual de respetar la Constitución y administrar justicia conforme a la ley, no como fórmula burocrática, sino como solemne voto y profesión de fe, en ese caso, nada se habrá perdido y este suceso quedará en los anales como simple cambio de personas no de sistemas.

Pero si por el contrario, el movimiento implica que se va a sustituir la justicia legal por la justicia administrativa, que se va a retornar al antiguo régimen inicial de los hombres de paja, y que ya no habrá libertad en los jueces y magistrados para resolver los asuntos sometidos a su conocimiento conforme a la constitución y la ley, sino que tendrán que hacerlo siguiendo las consignas administrativas o políticas, entonces este es un día de luto para la patria y para la revolución. Significará en este triste caso que se ha puesto fin al régimen de derecho, de la democracia, y principia el policiaco de la dictadura o el demagógico de la masa”.

Guatemala, 9 de Febrero de 1953.

Dar Coces contra el Aguijón

RESPUESTA A UN EDITORIAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA

El editorial del día lunes 2 de febrero pasado de Diario de Centro América, comenta una publicación de la Asociación General de Agricultores relativa a la procedencia del recurso de amparo en materia agraria.

Como dicho editorial es festinado, tendencioso, y contiene además conceptos falsos en lo que toca a la publicación de la AGA, esta juzga necesario publicar una respuesta. El uso de parte del Diario de Centro América de tergiversacio-

nes al comentar publicaciones de la AGA se considera como una norma de conducta alejada de la seriedad periodística, que amerita aclaraciones en el propio periódico en que fueran publicadas dichas tergiversaciones.

Dice el editorial de marras: "Entonces ¿dónde está lo no cierto de la Asociación General de Agricultura? Lo no cierto de la Asociación General de Agricultura está en afirmar que caen dentro de la jurisdicción del artículo 51 de la Constitución de la República todos los casos que han sido afectados por la Ley de Reforma Agraria. Lo no cierto de la AGA consiste en hacer materia del recurso de amparo en sus dos aspectos, unos derechos y unas garantías constitucionales que no son tales, desde luego que para declarar la afectabilidad de un latifundio por la Reforma agraria se sigue un procedimiento justo, técnicamente equitativo, con citación de partes, presentación de pruebas de cargo y descargo, etcétera. Lo no cierto de la AGA se descubre en que, según su criterio abogadil, todos los casos de parcelación declarada son objeto de recurso de amparo porque todos son casos de violación de derechos y garantías constitucionales".

La Asociación General de Agricultores no ha hecho el tipo de generalizaciones que afirma el Diario de Centro América. La AGA ha dado definiciones genéricas de tipo CONSTITUCIONAL. No ha dicho que todos los casos agrarios sean objeto de amparo, sino ha afirmado que **TODOS LOS CASOS DE VIOLACION DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PUEDEN SER MATERIA DE AMPARO, O SEA QUE ESTE ES PROCEDENTE SIEMPRE Y CUANDO SE VIOLE LA CONSTITUCION, CUALQUIERA QUE SEA LA MATERIA, INCLUSIVE LA AGRARIA.**

Ahora bien, si el Diario de Centro América, al juzgar el procedimiento agrario encuentra, que según la definición jurídica y constitucional que ha expuesto la AGA, éste es violatorio de garantías constitucionales, éste ya es asunto del editorialista, y al que le venga al guante que se lo plante.

No deja de ser incongruente la tesis sustentada por Diario de Centro América, al afirmar en el párrafo quinto del editorial que se comenta, que sí "se puede echar mano del recurso de amparo cuando haya lesión de derechos a causa de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria". Y decimos que es incongruente, porque con tal afirmación se pone de manifiesto acuerdo con la AGA, desmoronando todo cuanto antes dijo en su editorial; y se pone en manifiesto desacuerdo con la CGTG, las uniones campesinas y demás exégetas del

principio de que la cuestión agraria es tan privativa, que contra las resoluciones dictadas por los órganos de la Reforma Agraria no caben más que los recursos del Decreto 900.

Estando claro pues, lo que ha dicho la AGA; siendo evidente que Diario de Centro América admite que procede el amparo en materia agraria, contra lo afirmado por los agraristas, únicamente nos queda preguntarnos: ¿en qué quedamos? ¿Está la Ley de Reforma Agraria por debajo de la Constitución o encima de ésta? La respuesta es bien sencilla, y la saben tanto el editorialista de Diario de Centro América como los mismos que quieren destruir la Constitución para usar de la Reforma Agraria como de un instrumento político. Ahora bien, en un plano de jurisdicción, atacar la procedencia del recurso de amparo, en cualquier materia, es dar coces contra el aguijón...

Guatemala, 6 de febrero de 1953.

Ante los Sucesos Sangrientos

En oportunidad reciente —fines de 1952— las autoridades encargadas de llevar adelante la realización de la Reforma Agraria, iniciaron una serie de movimientos de orden policiaco, en el sentido de sancionar en forma drástica a los que, se afirma, son opositores de la Ley de Reforma Agraria. En auxilio de sus agremiados y de los agricultores del país, la Asociación General de Agricultores ha divulgado sus puntos de vista en torno al Decreto 900 del Congreso, desde antes de emitirse, aludiendo a las flagrantes transgresiones constitucionales en él contenidas. El correcto proceder de la Asociación, a más de ser legítimo y al amparo de la Constitución, es la obligada defensa de la Agricultura Nacional seriamente amenazada y puesta al borde del desastre. Las amenazas contenidas en forma de multas y penas en la Ley de Reforma Agraria, no constituían, por otra parte, más que un pálido augurio de la serie de violencias con que más tarde habría de procederse en su aplicación ulterior. Aquel augurio se ha convertido en una dolorosa realidad, pues que de día en día se registran, en la forma más primitiva, agresivos asaltos contra terratenientes, y en esta sucesión de despojos incalificables, ya se enumera más de un choque sangriento entre la población campesina. Estos saldos trágicos y dolorosos no tienen otro origen, fundamentalmente, que esa prédica envenenada hecha por los elementos importados, sobradamente conocidos, del comunismo internacional; prédi-

ca nefasta a la que se suman los testafierros moscovizantes criollos, entre la sencilla gente del agro. ¿Por qué esa prédica no ha encontrado cortapisas, y se ha hecho en forma amplia y progresiva a ciencia y paciencia de nuestros funcionarios y autoridades? ¿No hay leyes que sancionen la divulgación de doctrinas disociadoras cuyo objeto es inculcar la violencia y preparar el caos? Sin embargo, el poder público no ha salido al paso de esas prédicas criminalmente disociadoras de la familia guatemalteca.

Ya en marcha, la Ley de Reforma Agraria ha dejado tras sí innúmeros agravios y atropellos cometidos contra los que son llamados terratenientes *feudales*, y contra pequeños propietarios. Cuando la prensa independiente, en el indeclinable deber de informar, comenzó a hacerlo sobre asaltos y despojos llevados a cabo, el DAN, a cuyo cargo y responsabilidad corre la realización de la Reforma Agraria, esgrimió contra esa prensa una amenaza consistente en sanciones, de seguirse dando publicidad a las quejas y protestas de los agraviados. Es evidente que una amenaza de tal naturaleza estaba hecha al margen de la libertad de expresión, ampliamente amparada por nuestra Carta Fundamental; y evidente es, asimismo, que de convertirse en realidad esa amenaza, se habría borrado esa hermosa garantía del texto constitucional dándole un golpe de muerte. Ahora bien: el silenciar la publicación de asaltos, despojos y hechos sangrientos no habría tenido otro objeto que poner a las autoridades en condición de cruzarse de brazos en un clima de impunidad, y de no hacer, desde luego reprochable algo similar a lo que en recordada oportunidad acaeció en tiempos del Creador de las fiestas de Minerva. Ocurrió en esa época la lamentable catástrofe de Quezaltenango, ocasionada por la violenta erupción del volcán Santa María. Oíanse en esta capital el tremendo bombardeo producido por las descargas eléctricas; y sentíanse las terráqueas conmociones del fenómeno sísmico. Mas como se estaba en los festejos de la niñez, las autoridades subalternas hicieron publicar por bando una prevención entre el alarmado vecindario, indicando que nada ocurría... Nuevos tiempos, y viejas prácticas...!

Pequeños propietarios de los cuatro puntos cardinales del país han elevado su queja, y hasta donde es posible, su protesta ante los funcionarios respectivos, exponiendo su situación de desamparo ante las acometidas de los campesinos capitaneados por líderes franca y descaradamente comunistas, que en unión de las comisiones agrarias, llegan y sin más ley que su capricho, se adueñan de sus tierras y de sus

hogares. Tal clamor es insistente y aumenta en forma alarmante. De todos los rumbos de la República se recibe el S. O. S. en las oficinas agrarias y en la Presidencia de la República; de esa suerte que el gobierno está enterado, uno a uno, de los despojos y de toda suerte de hechos delictuosos cometidos a espaldas de la Ley de Reforma Agraria, por aquellos a quienes está encomendado el cumplimiento de la misma. Mas la actitud de las autoridades que tienen el imperativo constitucional de mantener a la ciudadanía en el goce de sus garantías, no está ni con mucho en consonancia con las violaciones ejecutadas contra la propiedad y las personas, pues que simplemente se ha concretado ante la intranquilidad nacional a destacar algunos inspectores "para estudiar sobre el terreno" lo que hubiere de tales denuncias. Una actitud así, de acusada pasividad y que no cuadra en funcionarios responsables, necesariamente invita a que de día en día, y ante la impunidad, el campesinado en manos de los líderes comunistas extranjeros y criollos, como ya lo hace, enarbole la trágica bandera de la guerra civil, muestra elocuente de que "los bárbaros" ya están forzando las puertas de nuestra casa común, muestra son los hechos vandálicos registrados en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo. ¿Será posible referir el origen de esos hechos escalofriantes a pugnas ancestrales entre las familias de los campesinos de esos sectores, cuando las propias víctimas de uno y otro lado, agraristas y antiagraristas, manifiestan reiteradamente que la causa de los trágicos sucesos es el proceder criminal de los, en su mayoría analfabetos, a cargo de quienes están las diligencias preliminares sobre aplicación del Decreto 900 del Congreso? ¿Podrá aceptarse sin el más enérgico reproche, que haya representantes del Poder Público que justifiquen que el toque de arrebato dado por el comunismo contra la propiedad privada obedece a la negativa de los propietarios de dar tierras en arrendamientos? Frente a una mentalidad así, las leyes, todas las leyes —esas camisas de fuerza que causan tanta desazón a los bandoleros— salen sobrando, y entonces, y en definitiva, habrá que abrir de par en par las puertas de nuestros centros penales en donde permanecen reclusas esas víctimas inocentes que se adueñaron de lo ajeno simplemente porque lo necesitaban, y las que mataron por hacerse justicia con propia mano.

El gobierno, como quien más, está enterado de la verdadera situación por la que atraviesan todos los agricultores del país y no puede ni debe desconocer que en el fondo no existen agraristas ni antiagraristas; que existe sí, un consi-

derable grupo de rusófilos guatemaltecos, descastados, que siembran sobre los surcos la cizaña de la lucha fratricida. El gobierno, como quien más, debe llegar con su autoridad a poner orden ahí donde el asalto y la arbitrariedad se enseñorean. El gobierno, como quien más, debe realizar la Reforma Agraria dentro de las normas constitucionales y legales, permitiendo a los que resulten afectados toda suerte de recursos en defensa de su patrimonio, y castigando a los enemigos de esa Reforma que no son otros que quienes pasan sobre los mandatos de la ley, y lanzan al campesinado en una lucha de unos contra otros en un desenfreno pasional y fatídico.

Ante la cruda desnudez de los cuerpos mutilados, con que la prensa ilustró la crónica de los hechos sangrientos ocurridos en San Pedro Ayampuc, la Asociación General de Agricultores, invita a los altos funcionarios de la Administración a que mediten y reflexionen con ánimo de verdaderos guatemaltecos para que se ponga orden en ese estado de cosas que ya se torna anárquico; y a este respecto será oportuno reproducir las admonitivas expresiones de un gran pensador y jurista: "El Estado posee la autoridad y ordena la sumisión. La impotencia, la debilidad del poder público sin poder es cosa que no se comprende. Han soportado los pueblos todas las tiranías del poder; se han encorvado bajo las armas de Atila como bajo la locura de los Césares Romanos... pero aún más desenfrenado despotismo da la imagen del Estado!; la anarquía, no! porque ésta es la impotencia del poder público; es un estado antisocial, la descomposición, la disolución de la sociedad..."

Guatemala, 17 de febrero de 1953.

La Ley de Arrendamiento Forzoso ya no es Ley de La República

"OCTUBRE", el procaz vocero de la falange roja, como es sabido, difunde toda la envenenada demagogia de sus doctrinas pro-Moscú, en forma impresa entre la escasa población que es adicta al imperialismo de *papá Stalin*, con notoria complacencia y aplauso de los círculos "revolucionarios" que rodean al gobierno y que se autocalifican "revolucionarios". Mas como esa demagogia impresa es imposible que llegue a los poblados y masas campesinas, en donde por obra y gracia de la labor educacional negativa, el analfabetismo tiene sus espesas sombras, nuestros rojos

han encomendado esa ingrata tarea de difusión a los peones más exaltados de sus filas para hacer llegar al campesinado los mensajes en que se contiene toda suerte de promesas paradisíacas venidas de los amos que detrás de la Cortina de Hierro, sueñan con la dominación mundial. A estos predicadores de nacionalidad híbrida, débese, pues, en mayor parte, si no en toda, la responsabilidad de los desafueros cometidos por la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, ya que con toda falacia hacen personales promesas hacia un pronto enriquecimiento con sólo adueñarse del patrimonio legítimo de los llamados *propietarios feudales* en la jerga anarquizante de los comunistas criollos.

La hoja periodística GUTIERREZ-FORTUNY, sociedad de responsabilidad ilimitada, en reciente publicación afirma que en los primeros días de enero, los campesinos del país, desesperados por el atraso en la entrega de la tierra que han ocasionado los TERRATENIENTES FEUDALES con su saboteo al Decreto 900, haciendo más dilatado el trámite ENGORROSO de la Ley de Reforma Agraria, y viendo que se les viene encima el tiempo de preparar las tierras para las siembras, "han ocupado algunas de las fincas denunciadas afectables (¿?) para no morir de hambre y amparándose en los Decretos 712 y 853, sobre arrendamiento forzoso, y en el Arto. 104 del Dto. 900 sobre la misma materia..." El órgano de publicidad de la sociedad moscovita de irresponsabilidad ilimitada FORTUNY-GUTIERREZ, justifica, a su manera y sabor y en el clima demagógico, que le es característico, la actitud de quienes guiados por móviles perversos de líderes de innegable filiación comunista, se han lanzado sobre la propiedad privada, grande y chica, causando los primeros brotes de una ensañada lucha de clases, sobre la que si el Poder Público no hace sentir su autoridad para el consiguiente respeto de las leyes, degenerará a corto plazo en una guerra civil. La sociedad moscovita FORTUNY-GUTIERREZ, de irresponsabilidad ilimitada, estampa con toda osadía y desparpajo que no son los campesinos y obreros agrícolas, hombres sencillos y humildes del campo, los que han creado la inquietud que reina en toda la nación, porque si realmente se han adueñado de lo que pertenece legítimamente a otros, invadiendo tierras y desalojando, machete en mano, de sus viviendas a los colonos y arrendatarios que viven en las fincas asaltadas, ha sido por los *engorrosos* trámites que implica la aplicación de la Ley de Reforma Agraria lo que significa tardanza en la entrega de tierras, y por-

que, en definitiva, en tales condiciones lo punible e ilegítimo, pero aconsejable, es que para beneficiar las tácticas comunistoides, se adueñen ante si y por si, y con el respaldo de las comisiones agrarias, de las propiedades detentadas. Mas no crea que en los hechos realizados por los asaltantes y despojadores, pudiera existir algo de punible, porque una creencia así, sería tanto como suponer que el robo y el hurto son otros tantos hechos delictuosos por figurar como tales enumerados en la legislación penal. ¡Criterio Ortodoxo! que sólo prevalece a través de mentes anquilosadas y retrógradas, pero que mediando un examen con "espíritu revolucionario", esto es, comunistoide, no pasan de ser simples cambios de la propiedad: de legítima, a mal habida; con lo que se cumple uno de los diez mandamientos rusófilos: la destrucción de la propiedad privada y el aniquilamiento de los terratenientes.

La sociedad FORTUNY-GUTIERREZ, de irresponsabilidad ilimitada, asienta en su papel impreso, "OCTUBRE", que los elementos pertenecientes a las Federaciones Campesinas (entidades organizadas y manejadas por esa sociedad) cuando han ido al despojo de tierras y hogares, lo han hecho al amparo de los Decretos 712 y 853 del Congreso de la República, y haciéndole coro a esta afirmación hecha con todo cinismo, más de un alto funcionario ha sostenido la vigencia de esos Decretos para buscar un camino de legitimidad a lo que en realidad constituye una sucesión de hechos delictivos cometidos ya, y que se seguirán cometiendo, si las autoridades persisten en cruzarse de brazos. Ahora bien: el Decreto 712 del Congreso, según se advierte en su parte considerativa, se emitió por la "noria resistencia de algunos propietarios de fincas rústicas a seguir dando en arrendamiento a los labriegos". Naturalmente que esa consideración está fuera de la realidad, y es por demás antojadiza e interesada; pero no es por ahora el propósito de la ASOCIACION GENERAL DE AGRICULTORES, desentrañar las razones y móviles que inclinaron a nuestros legisladores en la emisión de una ley elaborada a través de inconfesados designios; ni tampoco señalar la antijuridicidad de que adolece; sino, y simplemente, hacer pública manifestación a sus agremiados, sobre que tanto el Decreto 712, como el 853, ambos del Congreso, en los que se pretende se amparan los líderes rojos, las comisiones agrarias y las Federaciones Campesinas, para la organización de sus asaltos a mano armada, no están en vigor, y en consecuencia no pueden amparar a nadie. Tal afirmación aparecida en el órgano de la

demagogia y propaganda del comunismo, induce a creer que con iguales falacias se les ha asegurado a las Federaciones Campesinas que el asalto y despojo de las propiedades privadas no sólo está permitido, sino amparado por la ley. Pero cabría preguntarse si realmente podría emitirse y ponerse en vigor una ley en que se autorizara el crimen y el delito, o si no se trata nada más que de una treta digna de los que con estos han sembrado y siguen sembrando el desconcierto, la confusión, y finalmente el terror por todos los ámbitos del país; y habrá que optar por lo último. pues que los Decretos aludidos a más de no tener facultades para el crimen carecen de vigencia.

Entre los considerandos que sirven de preámbulo al Decreto 900 del Congreso -Ley de Reforma Agraria-, figura el que textualmente dice: "CONSIDERANDO: que las leyes dictadas para asegurar el arrendamiento forzoso de las tierras ociosas, no han satisfecho fundamentalmente las necesidades más urgentes de la gran mayoría de la población guatemalteca; POR TANTO:, etc.; etc.

Las leyes a que alude el Considerando transcrito no son otras que los Decretos 712 y 853, Ley de Arrendamiento Forzoso y sus reformas. Siendo, como lo es, de toda evidencia, según se expresa en el Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, que las disposiciones legales sobre arrendamiento forzoso de tierras ociosas, no habían satisfecho "fundamentalmente las necesidades más urgentes de la gran mayoría de la población guatemalteca", resulta peregrino y de total insensatez pretender la vigencia de algo que el propio Organismo Legislativo ha sustituido por inservible, emitiendo en lugar suyo, la Ley de Reforma Agraria. Mas, si esta obligada manera de razonar no llevara al convencimiento sobre que los Decretos de Arrendamiento Forzoso y sus reformas carecen de vigencia, un simple recorrido sobre las leyes que regulan lo concerniente a su abrogación y derogatoria, puede colocarnos en el fácil camino de establecer que los Decretos 712 y 853 del Congreso, aunque tuvieran, de acuerdo con la mentalidad comunista, monstruosas facultades para la realización de crímenes en forma impune, están abolidas. En efecto: el Artículo III de los Preceptos Fundamentales de la Ley Constitutiva del Poder Judicial, estatuye que las leyes sólo se derogan por otras leyes posteriores, ya por declaración expresa de las mismas, ya por incompatibilidad de las disposiciones nuevas con las precedentes o ya porque la nueva ley regula, enteramente, la materia considerada por la ley anterior. Por todo ello y

acercando este Precepto Fundamental a los Decretos 712 y 853 en relación con el Decreto 900, se puede afirmar que los primeros carecen en absoluto de vigencia, pues que por una parte, la Ley de Reforma Agraria expresamente -Artículo 105- deroga todas las leyes, disposiciones o acuerdos que sobre la materia (agraria) se hayan emitido y que se opongan a esa ley o la desvirtúen. Los Decretos cuya vigencia reclama el comunismo para justificar en forma grotesca los asaltos y violencias realizados por los llamados "agraristas" en las propiedades en los hogares y en las personas de los propietarios de tierras, se oponen a los fines perseguidos por el Decreto 900, porque éste tiende esencialmente, al traspaso de las tierras afectables a los trabajadores en forma de usufructo vitalicio, para liquidar, como se afirma la propiedad feudal: en tanto que el arrendatario, bajo esta o la otra forma, no sería suficiente para la extinción del latifundio feudal. Por su parte, el Decreto que contiene la Ley de Reforma Agraria, contempla y regula todo lo relacionado con el arrendamiento, y es ley posterior a los Decretos tantas veces relacionados. Puede y debe concluirse entonces, afirmando que los Decretos 712 y 853, no sólo no autorizan los delitos, sino que carecen en absoluto de vigencia.

La Asociación General de Agricultores quiere, por último, llamar la atención de sus agremiados y de los agricultores en general sobre que el artículo 104 del Decreto 900 del Congreso -Ley de Reforma Agraria-, que según las prédicas falaces del comunismo criollo pretende encubrir toda la serie de atropellos cometidos, hace alusión a los derechos y obligaciones adquiridos de conformidad con los Decretos 712 y 853 del Congreso, señalando que tales derechos y obligaciones "subsistirán en tanto no se aplique la Reforma Agraria en la tierra objeto de esos derechos y obligaciones". La referencia del artículo 104 no puede ser más clara y categórica. No es posible retorcerlo en forma tal que pudiera tomarse como amparo a los despojos cometidos. Si por virtud de los Decretos 712 y 853 se hubieren obtenido, en consonancia con sus preceptos, arrendamiento de tierras ociosas, tales derechos y obligaciones" adquiridos bajo el imperio de esas leyes ya derogadas, se mantendrán durante la vigencia del Decreto 900, "en tanto no se aplique la Reforma Agraria en la tierra objeto de esos derechos y obligaciones". Sin embargo, es conveniente señalar que, aún en el supuesto inadmisibles desde luego de que los Decretos 712 y 853 estuvieran vigentes, para la obtención del

arrendamiento forzoso necesario seria cumplir con todos y cada uno de sus preceptos; porque al no hacerlo así, y tomar "por la fuerza" y sin trámites las tierras ajenas, constituye ante cualquier código penal un despojo.

Guatemala, 21 de Febrero de 1953.

Las Garantías Tutelares de los Administrados

Los círculos profesionales de Derecho, y la ciudadanía toda, aún no han vuelto en sí después del golpe contundente asestado a nuestra vida institucional, cuando el Congreso de la República integrado en su mayor parte por elementos del más connotado analfabetismo en materias parlamentarias y jurídicas, en sesión relámpago de ingrata memoria, destituyó al Presidente del Organismo Judicial y tres vocales más de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Sobre ese escandaloso proceder, los miembros del foro se han compactado y en forma enérgica, no sólo se han concretado a hacer pública protesta sobre lo que constituye un baldón para nuestra vida democrática, y una burla sangrienta de los principios constitucionales, que son norma de nuestra organización republicana; no sólo, repetimos, se han concretado a protestar públicamente, sino que sus empeños aún se encaminan hacia la reconsideración de lo actuado por el Congreso, para reparar, aunque sea en mínima parte el agravio inferido. Sabido es que el origen de la destitución de los miembros del Organismo Judicial no se informó más que en el capricho y la violencia de la mayoría revolucionaria que integra el Congreso, pues ni siquiera se dió oportunidad a éstos para defenderse; mas ante los hechos consumados, los círculos Universitarios y profesinales dirigen sus propósitos hacia una rectificación legal, y sus actividades hacia eso convergen.

¿Puede el Estado, siendo como lo es un órgano regulador del Derecho, orillar los preceptos y normas que tutelan, a sus súbditos? Es evidente que no. Pues que si se acepta, como no puede ser menos, que el Estado se integra mediante la concurrencia de principios jurídicos para la realización de la vida política de los asociados, tiene que concluirse porque se genera dentro del Derecho, y para el Derecho. Es esta no sólo una aspiración sino que una her-

mosa realidad en más de un país que se precia de respetarse dentro de la vida institucional. Esa aspiración hacia las tremendas crisis sufridas en orden a la juridicidad; y cuando el Poder Público, aprovechándose de tales crisis, vulnera sin recato alguno las propias normas que le dan vida, entonces tiene y debe de surgir esa "lucha por el Derecho", de que hablan los tratadistas de Derecho Público.

Es el nuestro un sistema en el que se disfrutan, o debieran disfrutarse, plenas garantías jurisdiccionales (Dto. Gub. 1881 —Ley de lo Contencioso Administrativo—, y plenas garantías constitucionales expresamente consignadas en la Ley Fundamental. A través de unas, no puede, no debe quedar sin controlar de legitimidad el administrado, a fin de que solicite la revisión sobre legitimidad de todos aquellos actos que en alguna forma resulten lesionándoles por quebrantamiento de derechos preestablecidos a su favor. Para el caso, no importa que a los actos realizados por el Poder Público se les llame "actos de gobierno" o "discrecionales". Decimos que ninguno de los actos emanados del Poder Público puede escapar a tal revisión sobre su legitimidad, porque todos, absolutamente todos, deben realizarse dentro de normas legales (materia reglada), unas veces, y siempre con entera sujeción a los preceptos constitucionales. Leyes y Constitución son los cauces de los que no es posible apartarse, y cuando tal ocurre, y los actos se fundamentan en "estados de necesidad" que se improvisan al antojo de quienes gobiernan, se está muy cerca del advenimiento de las odiosas dictaduras de grupo o personales, que tanto desdichan en los Estados que pretenden realizar una vida jurídica. En este orden de cosas, si tal país atraviesa por ese "estado de necesidad", no será precisamente la *necesidad* de sostener éste o aquel gobierno, sino la de poner a salvo el orden jurídico fundamental, en algún momento amenazador. ¿"Necesidad" de realizar en Guatemala la Reforma Agraria? Desde luego, pero desde luego inaceptable que su realización deba llevarse adelante "cueste lo que cueste", sólo porque ello entraña la salvación de la Revolución de Octubre, sino porque es una de las fórmulas eficaces para cumplir los fines sociales encomendados al Estado. Esa realización debe llevarse adelante no precisamente bajo el lema de "cueste lo que cueste", que resulta sinónimo de empecinamiento y capricho, sino bajo el entendido que sus resultados serán beneficiosos para la nación. Lo de que debe realizarse la Reforma Agraria porque figuraba en un programa de gobierno, resulta, así, secundario.

rio. ¿Necesidad social realizada dentro de los principios que informan nuestra estructura político-jurídica? Sí. Pero pretender con leyes “revolucionarias”, subvenir nuestra vida institucional, es algo muy al alcance de los que no son capaces de convertir en generosas realidades el ideario político revolucionario, y esto debe quedar para los pseudo-revolucionarios.

Afirma consagrado tratadista de Derecho Público, y hacemos nuestros sus comentarios, que cuando en una nación adviene el triunfo de una revolución de carácter “constitucional”, esto es, cuyas motivaciones tienden al cambio de la vida institucional, las nuevas normas jurídicas revolucionarias deben reemplazar las del régimen caído; pero si el propósito de la revolución triunfante fue de carácter “funcional”, depuesto, el gobierno repudiado por el pueblo el estado “revolucionario” no tiene por qué perpetuarse, y la vida político-social habrá, con los nuevos gobernantes, de seguir su ritmo momentáneamente interrumpido. La revolución, aun cuando dé origen a un “poder de hecho”, sólo habrá de cesar en tanto y que ese “poder de hecho” se convierta en “poder de derecho”. Tales disgresiones nos las ha sugerido ese hartazgo que se dan los jóvenes que pertenecen a los autollamados círculos revolucionarios cercanos al gobierno, y que se ufanan públicamente de ser sus sostenedores: “gobernamos en forma revolucionaria”, para eso emitimos “leyes revolucionarias”, la Constitución no puede oponerse a las “leyes revolucionarias”, etcétera, etcétera. Y tanto exceso, y tanta demasía, ya es tiempo de que tengan el obligado límite del bienestar social, que es bienestar de la nación.

Guatemala, 4 de marzo de 1953.

Un Mitin Revolucionario y Unas Palabras del Gobernante

Cuando un grupo de manifestantes se encontraba reunido frente al balcón central del Palacio, sede del Ejecutivo, para demostrar al Órgano Supremo de la Reforma Agraria solidaridad y adhesión, el Jefe de tal Organismo, que lo es el Presidente de la República, subrayando con energía sus palabras les dijo: “Estamos en el poder para gobernar a todos los habitantes del país, pero les recordamos a los representantes del feudalismo (ignoramos si alguno de esos representantes se encontraba oyendo el elo-

cuenta discurso del mandatario) que no estoy de Presidente por ellos, sino por ustedes..." "Como ciudadano, como miembro del Ejército de la Revolución y como Jefe del Gobierno, consciente de mis palabras, expreso públicamente que *pase lo que pase y cueste lo que cueste*, llevaremos a término la lucha por la realización de la Reforma Agraria..." "Pero si los enemigos se salen de lo que marcan estas leyes y se provoca la guerra civil, del otro lado estaremos nosotros..." Mientras de lo alto del Palacio caían sobre el pequeño grupo de manifestantes las retadoras palabras del gobernante, la alarma cundía en las distintas zonas del país. La zozobra y la intranquilidad se adueñaban de las humildes viviendas del campesinado, amenazadas de muerte por el rabioso e iracundo proceder de las Federaciones Campesinas, empujadas al desorden y a la delincuencia por las autoridades subalternas del Organismo de la Reforma Agraria, y por los líderes comunistas destacados a todos los ámbitos de la República. Mientras el gobernante, poniendo énfasis en lo que expresaba, decía encontrarse en el poder para gobernar a *todos los habitantes del país*, esa falta de gobierno se hacía sentir ahí, en donde se realizaban repartos arbitrariamente de pequeñas fincas, incluyendo las cosechas y los ganados, como ocurriera en una finca ubicada en Otacingo, departamento de Escuintla, que por tener una extensión de una caballería es inafectable por la Ley de Reforma Agraria, en donde, varios individuos capitaneados por el presidente del Comité Agrario Local, ocuparon las tierras, empleando igual proceder con otras propiedades hasta de treintidós manzanas en jurisdicción de Ovejero, Jalapa. Mientras el Mandatario hablaba de gobernar a todos los habitantes del país, por los peligrosos caminos de la violencia las masas campesinas irrumpían destruyendo cercas dentro de los fundos particulares en grandes y pequeñas propiedades ganaderas, dando así, no sólo un golpe de muerte a la propiedad privada, garantizada en nuestra Carta Fundamental, sino que cercenando machete en mano, los escasos brotes de nuestra incipiente industria ganadera; y todo ello ofreciendo el espectáculo poco edificante de un franco desgobierno.

La Asociación General de Agricultores, en defensa legítima de los intereses de sus agremiados y de todos los agricultores del país, recogió aquellas palabras del gobernante, y hubiera deseado que ellas cristalizaran en una benéfica realidad. Si ello hubiese acaecido así, los guatemaltecos no lamentaran a estas fechas la multitud de atro-

pellos seguidos de encuentros sangrientos a que ha dado lugar la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, puesta en manos de líderes irresponsables, y tendenciosamente tergiversada para causar, como ha causado, una sucesión interminable de quebrantos. La Asociación General de Agricultores, esperó, y sigue esperando que de conformidad con las declaraciones dadas por el Jefe Supremo del Organismo de Reforma Agraria, se ponga Gobierno ahí donde precisamente por desgobierno se están cometiendo todo linaje de tropelías so pretexto de la aplicación del Dto. 900 del Congreso. La necesidad de gobernar, es reclamada por la ciudadanía honrada que sufre en propia carne los resultados de una francachela política, que no encontrando ya suficiente espacio en la capital, se a desbordado hacia el agro en forma codiciosa y agresiva.

“Pase lo que pase y cueste lo que cueste”, palabras que el gobernante dirigiera a quienes le manifestaran adhesión, cuando el Congreso rompía, en sesión memorable, nuestra vida institucional; “pero si los enemigos se salen de lo que marcan estas leyes y se provoca la guerra civil, del otro lado estaremos nosotros...” Tales palabras son de suma trascendencia y de gravedad insospechada. ¿Por qué el Jefe Supremo del Organismo de la Reforma Agraria acepta un reto que nadie le ha lanzado? ¿En dónde, en qué lado están los guatemaltecos que desean ver envuelta en la guerra civil a la nación? Seguramente el gobernante no se refirió a quienes en defensa de sus legítimos derechos hacen uso de los recursos legales para proteger su patrimonio y el de sus hijos, derechos de orden constitucional. No es posible declarar *enemigos* a los que así proceden, y de hacerlo así, habrá necesariamente que atribuirlo a una momentánea festinación. La Ley de Reforma Agraria no tiene más enemigos que aquellos que tratan a su sombra, de cometer toda clase de transgresiones, y esto habrá de ser reconocido ya dentro del campo de la serenidad que conviene a un gobernante, para que la ley caiga sobre los delincuentes, y se tornen menos ásperos los caminos de la vida nacional. En su mensaje al Congreso, sin embargo, el gobernante insiste en acentuar una pugna de carácter clasista, y en subrayar que el gobierno seguirá adelante, sin oír, como hasta ahora, las voces de los gobernados, que cuando no claman rectificaciones contra procedimientos ilegales y atentatorios claman por que se cumplan las leyes; y el Jefe Supremo del Organismo de la Reforma Agraria, en vez de oír, opta por ignorar en su mensaje los múltiples despojos y

atentatorios procedimientos empleados en la aplicación del Decreto 900 del Congreso.

Si con un sentido más cercano de la realidad social, los gobernantes no confundieran el mandato con que están investidos, y meditaran sobre que sus actos impuestos a la obediencia no emanan de una pretendida “voluntad superior”; que no emanan de personas dueñas excepcionalmente de esencia superior, posiblemente las normas legales serían menos irrespetadas, el bienestar colectivo sufriría menos sobresaltos, y los gobernantes estarían más en condiciones de gobernar. Cuando en vez de sólo mandar, identifique el gobierno con las reglas generales del Derecho y los principios universales de la justicia, los gobernantes desplazarán a los mandarines, cuya aspiración no va más allá de hacer sentir que mandan y hacer ejecutar sus actos de desgobierno. Y es que no se concibe dentro del orden jurídico esa voluntad —recta voluntad— discurrendo por los atajos del personal capricho, sino por los amplios y soleados senderos del Derecho.

Guatemala, 6 de Marzo de 1953.

No debe Subestimarse el Sentimiento Nacional

Del mensaje que el Presidente de la república leyera ante el congreso, ya se ha ocupado en más de una oportunidad la prensa independiente del país, señalando unas veces su marcado tono admonitivo e intransigente hacia los que en forma antojadiza considera enemigos de la revolución, por el simple hecho de que intentan salir al paso de las arbitrariedades realizadas contra las personas y contra sus bienes por los encargados de ejecutar el Decreto 900 del Congreso; y otras, calificando tal actitud, llena de acrimonia contra la mayor parte de la ciudadanía, como la menos apropiada para el caso. Sabido es que el grueso de la ciudadanía, que es el que precisamente no forma filas en los círculos “revolucionarios” que están cerca del gobernante, ha sido directamente afectado por los mil y un atropellos cometidos por los órganos subalternos de la Reforma Agraria, é igualmente sabido es que los afectados han tratado por los medios legales de contrarrestar las violencias y detenciones de que han sido objeto. Siendo esto así, no se alcanza el por qué de la actitud del Gobernante hacia el sector más numeroso y de más responsabilidad de sus

gobernados, tildándolos, con desafortunado lenguaje, de enemigos y reaccionarios. No se explica por qué el Jefe del Ejecutivo insiste en colocar frente a frente, en ánimo de lucha, a quienes propugnan por la aplicación de la Ley de Reforma Agraria sin importarles que se viole esa misma ley, y a quienes afectados directa é ilegalmente en su patrimonio —fruto de sudores, fruto de trabajo y objeto, en fin de constantes vigiliass— marchan sin más bandera que la justicia y la ley, y se atrincheran en estos últimos reductos contra las codiciosas acometidas de los malos guatemaltecos que ahora lloran la muerte del Zar Rojo a través de mensajes vergonzosos, pero que luego verán llorar a sus hijos sobre los despojos de la patria que con toda violencia é irresponsabilidad aniquilan.

El mensaje presidencial —tal es su tono—, hace suponer que el ánimo mal dispuesto del mandatario hacia los que “no lo llevaron al poder” se origina en una suerte de resentimientos que no tienen razón de ser, y se traduce en un enojo que se hace notorio de inmediato. Es posible que parte de esa actitud tenga raíces en un criterio eminentemente militar, ante la posibilidad de que aunque sea en forma mínima pueda existir siquiera una resistencia adecuada contra lo que debe realizarse “cueste lo que cueste”. Sin siquiera ponderar como es debido la grave situación económico-político-social porque atraviesa el país, ese total menosprecio frente al pensar y sentir de la mayoría de los gobernados, acusado en el mensaje Presidencial, resulta inconveniente, impolítico y si se quiere hasta agresivo. Si por no orillar éste o aquél punto de amor propio, el Gobernante se empeña e insiste sobre la proclamación de una lucha de clases entre la familia guatemalteca, esto no puede menos que ser rechazado por su naturaleza antipatriótica. En este aspecto el jefe del Ejecutivo antes que pensar en las timaduras personales en su carácter de gobernante, y de pensar en que con oportunas rectificaciones pudiera sufrir mengua su naturaleza de hombre formado bajo las férreas disciplinas militares, debe pensar, sí, que el comando que tiene es de hombre de gobierno, y que como tal no le es permitido seguir adelante con ninguno de sus mandatos a cumplirse bajo el lema de “cueste lo que cueste”. El Gobernante debe así mismo tener muy en cuenta que aún dentro del rígido estatuto del Ejército existen normas que tutelan la resistencia adecuada al cumplimiento de órdenes “superiores”, y así, cuando un Jefe ordena a un subalterno la ejecución de un acto que notoriamente habrá de constituir un

delito, esto es, dar una orden que no tiene antecedentes de legitimidad, cabe la resistencia apuntada.

Ya hemos dicho, pero no está demás repetirlo: el Gobernante no debe subestimar el clima de repudio que existe entre los gobernados sobre la festinada y caprichosa aplicación de la Ley de Reforma Agraria, ya que la ciudadanía no podrá conformarse ni contemplar con pasividad punible, el ver al borde del aniquilamiento su patrimonio. El Gobernante no debe subestimar que existe un sentido adverso dentro del conglomerado en relación, no precisamente de la Ley de Reforma Agraria, sino de su insensata y violenta forma de realizarla. Y si el Gobernante no menosprecia esas circunstancias, y medita con la circunspección que le está obligada sobre que realizar la Ley de Reforma Agraria fuera de sus propias normas y con lujo de atropellos es algo que no debe continuar así, fácil será al Jefe del Ejecutivo enmarcarse en una actitud de rectificación que es la que realmente le conviene y lo aleja de lesiones más profundas hacia la ciudadanía toda. Pensar que quienes hacen uso de los recursos legales para defenderse de los transgresores de la Ley de Reforma Agraria, son enemigos de la Revolución y de sus dirigentes, no es racional ni lógico, pues será necesario advertir que el gobernado que tolera o consiente las arbitrariedades de los funcionarios de la Administración, o que se complica con ellos en aquella tolerancia o aquel consentimiento, no es ni puede ser otra cosa que un agente, en mayor o menor grado, de la mala administración pública. De ahí que el Jefe del Ejecutivo no deba auspiciar malquerencias contra quienes interponen en forma y por las vías legales, las defensas necesarias para la protección de sus derechos, máxime cuando esas defensas están contenidas en nuestros cuerpos de leyes, y en las normas constitucionales que rigen nuestra vida institucional. No se trata, pues, de oposición alguna ni de enemistades antojadizas; trátase simplemente de evitar desvíos e injusticias, que no otra cosa es hasta el momento el saldo doloroso de tanto desmán cometido por las federaciones campesinas, capitaneadas por rojos guatemaltecos y de las más varias nacionalidades sobre el suelo promisorio del agro.

Guatemala, 14 de marzo de 1953

Deben liquidarse los atropellos de los agraristas

En órganos de la prensa diaria de ediciones recientes han aparecido, día a día, titulares de noticias que dan cuenta de lo que ocurre en todo el país con motivo de la aplicación del Decreto 900 del Congreso —Ley de Reforma Agraria—. Esas denuncias, cada vez más numerosas, claramente indican que el crimen y el atropello están a la orden del día, y que las autoridades no intervienen en la forma que deberían para detener esa ola de terror que se enseñorea en todas las regiones del país: “Consumidas por el fuego siete fincas en Masagua”; “Agrarismo y delincuencia”; “Jefe del DAN investiga destrucciones de bosques por incursiones agraristas”; “Entran y destruyen montaña al allanar finca en Chiquimulilla. Dos caballerías de maderas preciosas destruidas en la finca “Las Hojas”; “Grupo de peregrinos a Esquipulas al ir a pie víctimas de asaltos”; “Campesinos atacan al Gobernador Algara Piloña. Dispararon cuando iba a poner orden”; “Lider hondureño agita a 400 campesinos. Invaden tres fincas en Santa Rosa, armados”. Tales son algunas muestras tomadas al azar de lo diariamente publicado por la prensa en torno de la grave, muy grave situación, por la que los malos hijos de Guatemala hacen pasar a la Nación. Como se ve, cuando no se dá cuenta y se hace denuncia de atentados contra las personas, incluso contra las autoridades, se notifica sobre allanamientos, quemas de fincas y toda suerte de depredaciones.

¿Será posible que todo esto ocurra en un país debidamente organizado, y con un gobierno que tiene el imperativo constitucional de mantener a los gobernados en el uso de los derechos y garantías que las leyes y la Constitución les otorgan? ¿Será posible que las autoridades sean simples espectadoras en este festín trágico en el que son principales actores los comunistas criollos y los agentes rusos importados? ¿Será posible no prestar oídos a la voz desesperada de tanta víctima de la anarquía provocada por la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, y cerrar los ojos ante la evidencia de las llamas diabólicas que calcinan las cosechas y convierten en pavesas la riqueza de nuestros bosques? Si los ojos se cierran ante este espectáculo de desastre, y los oídos no escuchan el clamoreo que pide justicia, es evidente que el país, por culpa de quienes lo gobiernan se precipita a una ruina total.

Cuando se hiciera denuncia de los primeros actos de pillaje organizados por las falanges comunistas contra la propiedad privada, esa prensa oficial, hoy en manos de periodistas mercenarios, no tuvo empacho en atribuir aquellos desmanes a los que han calificado de "antiagraristas". Mas, esa falacia de los periodistas extranjeros al servicio del régimen revolucionario, tenía que ser desmentida en forma oficial y que no deja lugar a duda alguna; y así, la circular remitida por el Jefe del DAN a los presidentes de las Comisiones Agrarias es algo elocuente y revelador. En efecto, dice esa circular: "Reitero a usted instructivo con respecto a tierras cultivadas con citronela, té de limón, y otros cultivos de aceites esenciales. Dichas tierras son inafectables Decreto 900 y decretos 12 y 853, aunque se hubieren incendiado. Ajústese estrictamente a la ley e impida que se cometan arbitrariedades..." No precisan grandes esfuerzos imaginativos para desentrañar el fondo de esa advertencia hecha por el Jefe del DAN. Para el menos avisado, la situación no puede ser más clara: como las tierras cultivadas con citronela no son afectables por la Ley de Reforma Agraria, un criminal consejo de los rojos que están detrás de las Federaciones campesinas, ha originado que se prenda fuego a estas plantaciones, pretendiendo con ello que ya en tales circunstancias no deba considerárseles como cultivadas. La maniobra podría ser inteligente si no fuera delictuosa en grado máximo, y como se ve, no es precisamente el elemento llamado "antiagrarista" el que podía estar interesado en actos de destrucción de sus propios cultivos. La circular del Jefe del DAN, pues, ha señalado las manos delictuosas que han originado los incendios de más de una finca hasta ayer próspera, y hoy brutal y cobardemente aniquilada.

Si no fuera suficiente para declinar responsabilidades la circular del Jefe del DAN, la más reciente publicación de la prensa local recoge algunas declaraciones de dicho funcionario a través de las que la aclaración de cualquier duda acaba de completarse. Dijo el Jefe del DAN que en todo el curso de este mes deberán quedar totalmente resueltos los diversos conflictos que se han registrado en varias regiones del país con ocasión de la Ley de Reforma Agraria, y enfatizó sobre que no estaba dispuesto a permitir que se siguieran produciendo problemas que "únicamente irán en desprestigio del Jefe del Departamento Agrario y muy especialmente, en la persona del Presidente de la República".

Más adelante, el Jefe del DAN expuso a elementos de la prensa que con ello aludía a los conflictos registrados en Jutiapa, Retalhuleu, Escuintla y Santa Rosa, y que al indicar que esa situación debería ser liquidada en corto plazo, lo hacía porque ya habían sido nombradas juntas de vigilancia integradas con elementos de responsabilidad a efecto de que se informaran de la realidad de lo que desafortunadamente está pasando; que en relación con los incendios de varias fincas en la región de Masagua, ya se han destacado inspectores para que se esclarezca quiénes son los responsables y se actúe de entera conformidad con la ley. Finalmente el Jefe del DAN indicó a los periodistas que ni el gobierno ni el DAN desean que la aplicación de la Ley Agraria se lleve por caminos de Anarquismo. Es esa la postura obligada e indeclinable en que deben de mantenerse los funcionarios a quienes está encomendada la tranquilidad del país. Es esa la postura que debe de exigírseles, porque velar por el cumplimiento de la ley y por mantener a la ciudadanía en la protección de sus derechos, no es algo que deba suplicarse. Ojalá y que en lo venidero, los funcionarios de los órganos agrarios atiendan más al interés nacional que al de los círculos políticos de sus simpatías.

Guatemala, 16 de marzo de 1953.

Los Agraristas Responsables del Desastre Actual

La Asociación General de Agricultores, compenetrada de la alta misión que se ha impuesto: defensa gremial de sus asociados en todos sentidos, y muy particularmente frente a la agresión de que en la actualidad son objeto —agresión injusta y desleal, si las hay—, porque se emplean en ella todos los medios de fuerza y violencia por parte de quienes, con la complicidad punible de las autoridades y de los círculos Stalinianos criollos, despojan a finqueros de sus heredades, con lujo de barbarie y constante atropello de la Ley de Reforma Agraria, sigue adelante en tan generosa campaña. En los Archivos de nuestra Institución se amontonan quejas y denuncias, y de esa suerte, la Asociación General de Agricultores está en condiciones de señalar, uno a uno, los asaltos cometidos contra pequeños y grandes terratenientes, y se duele de no haber podido registrar, hasta hoy, ninguna intervención eficaz del poder pú-

blico para proteger como es debido la vida y la hacienda de quienes no tienen más delito que el de haber dedicado sus desvelos en forma constante en la producción y aumento de nuestras riquezas agrícolas, poniendo sobre el zurco la semilla promisoras. Aparte de esporádicas promesas, ¡solamente promesas!, de parte de las autoridades, de poner orden en este desenfreno de las bestias comunistas, nuestros archivos, repetimos, no registran un sólo caso de sanción contra los numerosos delincuentes. Más no es esto sólo. A cada romántica promesa hecha por quienes son incapaces de poner orden en este total desorden nacional, las huestes agraristas organizadas por las federaciones campesinas contestan con actitudes de reto, que son otros tantos desacatos, y las cosas quedan peor. Que el Jefe del DAN dice que ya se han nombrado inspectores para que sobre el terreno hagan acopio de datos de los desmanes denunciados, las federaciones campesinas, por su parte, manifiestan públicamente que desconocen la calidad legal de tales emisarios oficiales, nombrados con el objeto de interrumpir el deporte a que se dedican: saqueos y robos. En éste mismo aspecto es muy significativa la actitud de los grupos del campesinado "agrarista", rebelándose contra la autoridad del Gobernador de Santa Rosa, Algara Piloña, a quien hicieron varios disparos cuando se apersonara, en obligado cumplimiento de su deber, en cierto sitio donde los agraristas provocaban una situación verdaderamente grave.

Y bien: el desacato frente al Jefe del DAN ha quedado impune, e igualmente impune el atentado personal contra el Gobernador de Santa Rosa. ¿Para cuándo se piensa echar mano del poder y la autoridad del Gobierno central, frente a hechos tan escandalosos? ¿Será posible que se insista en atribuir tales hechos a novelescas patrañas de la reacción? Ello sería torpe e insensato.

Refiérese que pilotos que han realizado vuelos en el interior del país, en vez de las cultivadas tierras que les servían de puntos de referencia en sus vuelos, ahora contemplan desde la altura enormes extensiones humeantes. Son los campos devorados por las llamas de los incendios realizados por los "agraristas", manejados por las federaciones campesinas, y por los comunistas criollos e importados. ¿No es esto cruel? ¿No es algo que merece ser sancionado en la forma más severa?

Un periódico de la localidad informa de los penúltimos desastres registrados —no decimos últimos porque en mate-

ria de desastres el país recorre un viacrucis dramático y sangriento— ocurridos en la rica zona de San Marcos. Esta información es algo que complementa el cuadro aterrador de lo que pasa en el país, y perfila con tintes sombríos que el principio de autoridad se ha anulado, y que caminamos al matadero comunista; a la liquidación total. Los campesinos “agraristas” soliviantados por las Federaciones Campesinas, y éstas obedeciendo consignas internacionales y pudiéramos decir que contando con el respaldo —la lenidad y la tolerancia son conocidas fórmulas para respaldar— continúan en su ininterrumpida labor de asaltos y allanamientos contra la propiedad privada, sin más ley que su codicia y su capricho elevados a la categoría, ¡quién lo creyera!, de revolucionarias normas jurídicas. No sólo se han limitado a prender fuego en los campos cultivados con citronela y montañas con maderas preciosas, sino que han extendido sus llamas satánicas a las haciendas de ganado y fincas de café. Propiedades hay en que fueron incendiados los potreros y corrales y achicharrado por el fuego buena parte de ganado existente. El resto del ganado, saltando cercas, busca en otras propiedades pastos y agua. El Corresponsal que así informa, se pregunta: ¿Cuál es el fin que se persigue? Ya lo saben todos, la época de la siembra de milpas se aproxima y se trata de hacer aparecer los campos sin cultivo para adueñarse de ellos...” En otras fincas se ha intentado prender fuego a los cafetales. El informante, con el resto de la ciudadanía, cree que nada se remedia con dar parte a las autoridades, siempre dispuestas a cruzarse de brazos; y en el máximo de los convencimientos afirma que ya la vida en el campo se hace imposible.

No se explica por qué esa inquina contra quienes, pagando sus correspondientes impuestos, contribuyen a los despilfarros administrativos. No se explica, ni acabará de explicárselo, por qué se trata de arruinar a los que con el sudor de su frente, tras largos años de trabajo, han logrado cimentar un porvenir y contribuido vitalmente al bienestar nacional.

¿Las autoridades agrarias responsables del período de criminalidad porque atravesamos? Sobre una pregunta de tanta magnitud, preferimos dejar la palabra a uno de los conspicuos dirigentes “revolucionarios”, diputado al Congreso, quien en declaraciones a la prensa, manifestó que el “principal motivo de las dificultades surgidas en diversos lugares del país en torno de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, consiste en la FORMA IRRESPONSABLE

en que algunas autoridades menores del Departamento agrario nacional vienen usando, aprovechándose de una ley, tan importante como el decreto 900, como UN MEDIO DE PROSELITISMO POLITICO..." Llama la atención, agregó el diputado revolucionario, que éste estado de cosas ha sido puesto en conocimiento "del Jefe del DAN en repetidas ocasiones y desde hace mucho tiempo, SIN QUE HASTA LA FECHA SE HAYA RESUELTO ESTE PROBLEMA DE CONFORMIDAD CON LA LEY..." Las terminantes y acusadoras declaraciones del diputado revolucionario, parecen hechas al oído de los periodistas mercenarios a cargo de quienes está la defensa de... sus estomacales intereses...

Guatemala, 21 de marzo de 1953.

Continúan las Arbitrariedades

Mientras los encargados de defender las proyecciones trágicas, producto de la aplicación del decreto 900, Ley de Reforma Agraria, se refocilan en adobar toda suerte de invectivas —al fin gente sin solvencia moral ni personal— los diarios locales sirven *diariamente*, como si fuera "el pan nuestro de cada día" el plato de alguna nueva violencia realizada por las masas campesinas "agrarristas capitaneadas por los órganos agrarios subalternos contra la propiedad privada. Para el caso no valen discriminaciones entre latifundios y pequeñas heredades, y sólo cuenta la posibilidad del botín a repartir. La falange de periodistas (¿?) a cuyo cargo corre echar constante "Baba revolucionaria" contra quienes pretenden marcar un alto a los desafueros que se cometen, está constituida por pseudo guatemaltecos y legionarios del comunismo internacional en un concubinato asqueante. Las columnas de los diarios oficiales sistemáticamente ignoran los constantes desfalcos perpetrados en una y otra dependencia gubernativa con grave mengua de las arcas nacionales, que cuando no es en las Aduanas, es en Fincas Nacionales o en las dependencias camineras. De eso ni hablar. Y como el desfalco y malos manejos de los fondos públicos ya se han constituido en algo institucional, habrá que pensar en sugerir a los que gobiernan que fijen en el presupuesto de gastos de la Nación una fuerte suma con destino a respaldar estos graciosos eventos en los que se empeñan los servidores del Estado, ya que insinuar una oportuna intervención de la justicia para sancio-

nar a los culpables, sería calificado de reaccionario, cuando no de subversivo contra el régimen.

En alguna publicación anterior la AGA se permitió hacer pública denuncia de la grave situación por la que atraviesan las haciendas de ganado, especialmente en el oriente de la República. En las zonas comprendidas entre Jutiapa, Jalapa y Chiquimula, en las que figuran valiosas propiedades cuyos dueños se dedican a la crianza y engorde de ganado. las federaciones campesinas empujadas por los líderes rojos y las autoridades menores de la Reforma Agraria han hecho de las suyas: destrucción de potreros, y asalto a mano armada de viviendas y rancherías. El caso de la finca Los Cerritos, una hacienda formada y mantenida con los más avanzados procedimientos pecuarios, es uno de los tantos que puede ilustrar cómo las pocas unidades agrícolas ganaderas, establecidas a través de largos años de sacrificio, tocan a su término. La codicia, machete en mano, se encarga de destruir cercos y arrasar los potreros enzacatados. Constituye la finca Los Cerritos, ubicada en Asunción Mita, algo de lo que puede la inteligencia puesta al servicio de los empeñosos trabajadores. Toda cultivada para la crianza, engorde y ordeño de ganados, los aspirantes a parcelarios sin resolución previa se han repartido en forma violenta y han procedido a arrancar los zacates sembrados y a hacer leña de los árboles que antes prestaban su sombra protectora al ganado. De nada han valido al propietario de Los Cerritos las protestas legales y oportunas encaminadas a la defensa de sus derechos detentados, pues que tal actitud en el mejor de los casos, ha servido para catalogarlo entre los "antiagraristas" gente que disfruta de la malquerencia oficial y sufre las rabietas revolucionarias en forma constante. ¿Hasta cuándo se piensa perpetuar este descontrol de lo que sucede en los cuatro puntos cardinales de la república? ¿Hasta cuándo las autoridades superiores dedicarán un rato de meditación a la gravedad de lo que ocurre, para poner coto a tanta tropelía? Cuando en fecha reciente trascendió a la ciudadanía que se habían realizado pláticas entre los jefes máximos del organismo agrario en relación a las actividades punibles que ha originado en relación de la Ley de Reforma Agraria, se pensó de inmediato en que de tales pláticas surgiría la acción directa de las autoridades para que la ejecución del Decreto 900 del Congreso se realizara dentro de los cauces legales que en él se fijan. Pero desafortunadamente las tales pláticas no han culminado en nada y aquella momen-

tanea tranquilidad que provocara su anuncio, ha desaparecido y no la amenaza, sino la cruda realidad, la sienten los terratenientes en forma de asaltos y robos.

Para que la falange de periodistas (¿?) a cuyo cargo la defensa de las proyecciones trágicas de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, no atribuya a los antiagraristas la mejor parte del desastre nacional, servimos a continuación algo que ayudará a clarificar, en parte, las turbias y revueltas aguas revolucionarias. Las Uniones Campesinas del departamento de Chiquimula, percatándose de uno de tantos orígenes de las calamidades porque atraviesa la gente del agro, se ha dirigido en elocuente nota al Congreso de la República, indicando que siendo los directamente beneficiados con la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, se han podido dar cuenta de que al amparo de dicha ley se están cometiendo grandes injusticias, "al no dársele trámite a sus denuncias" de tierras que han hecho por el "único motivo de no acuerpar ciertas prácticas antidemocráticas que están en contra de los intereses de los campesinos". A lo largo de la exposición que las Comunidades Campesinas de Chiquimula hacen al Congreso, consideran que es "desalentador" que estando por llegar la época de siembras, no se aclare su situación, y así denuncian que en Chiquimula, la Ley de Reforma Agraria sólo ha servido como instrumento político con fines sectarios y que sólo ha favorecido a todos aquellos "que comulgan con ciertas prácticas que los campesinos no acuerpan ni aceptan por considerarlas contrarias a los postulados fundamentales de la Revolución de Octubre". Más adelante las Comunidades afirman que en muchos de sus compañeros campesinos "se les estén quitando sus pequeñas parcelas de tierras cultivadas..." ¿Son los "Antiagraristas" los que en esta forma se expresan? Evidentemente que no. Son los que debieran ser directamente beneficiados por la Ley de Reforma Agraria los que en fin de cuentas se ven defraudados por nuestros políticos cimarrones, y a quienes no será remoto que en ediciones venideras se les llame "enemigos del señor Presidente" o "antiagraristas" subversivos que en forma "cachureca", preparan cuartelazos para derrocar al gobierno, como denunciara joven profesional, refiriéndose a la Asociación General de Agricultores por haber en su oportunidad adversado la Ley de Reforma Agraria antes de ser promulgada...

Guatemala, 28 de Marzo de 1953.

Uniones Cívicas de Defensa de la Tierra

Aunque los irresponsables mantenedores de la prensa semioficial —enanos de estatura física y moral— los periodistas (¿?) mercenarios a quienes en buena parte se debe el cúmulo de sinsabores por los que atraviesa la ciudadanía, se empeñen en acumular contra la Asociación General de Agricultores, entre gruesos e iracundos epítetos, constantes amenazas, nuestra entidad, sin más norma que la ley y los principios constitucionales que nos rigen, ni más propósito que el de la defensa de sus afiliados, no cesará de hacer públicas las denuncias que entrañan atropellos, usurpaciones y asaltos contra la propiedad agraria, cometidos por las federaciones campesinas bajo la dirección e inspiración de las células comunistas, a espaldas de la Ley de Reforma Agraria. Este ha sido y será el empeño de la Asociación General de Agricultores, y en tal empeño sólo las mentalidades avesadas dentro del esbirrismo, pueden acusar a nuestra institución de venir “presentando a la Nación como en completa anarquía, sin autoridad y sin leyes. Sus escritos tienen el carácter de un llamado a la rebelión para poner orden en el país, orden feudal se entiende”. Es algo verdaderamente inaudito; es algo que, repetimos, no cabe ser concebido más que por mentes que sólo han discurrido por los tortuosos senderos de la delación y el poco escrúpulo. Pretender que la Asociación general de Agricultores a través de sus publicaciones concita a la rebelión, por el sólo hecho de decir que se ponga orden ahí donde el desenfreno de las masas agraristas, con desprecio total de las autoridades y la ley hacen de las suyas y cometen toda clase de tropelías, es precisamente concitar a la rebelión, es, si, ejercitar un derecho ciudadano, derecho que estamos seguros que jamás será reconocido por los periodistas (¿?) encargados de sembrar la zozobra y el desconcierto.

Al propio tiempo que nos enteramos del lenguaje delator e infamante con que se trata a la Asociación General de Agricultores, leemos en un diario local que el parcelamiento ilegal de las tierras continúa y que las autoridades agrarias también continúan sin concurrir a poner coto a tal situación ilegal. en San Martín Jilotepeque, según los más recientes informes, se señala la situación en que se encuentra la gente trabajadora ante la actitud agresiva y hostil de los “agraristas” que se han erigido en “amos y señores

de aquel lugar". Los "agrarristas" en tal región invaden las tierras sin importarles la Ley de Reforma Agraria, y como es natural, sin atender al más mínimo de los requisitos que esa ley fija para la ocupación o posesión de las tierras afectables. A este respecto se informa que ya fueron ocupadas las fincas San Mateo y El Molino, no sin antes mediar serias amenazas contra sus propietarios. Como se ve, no se trata de simples elucubraciones de la Asociación General de Agricultores, sino de hechos concretos, y entonces lo olvidado por parte de las autoridades, es salir al paso de futuros atropellos y la Asociación General de Agricultores así lo ha pedido, así lo pide y así lo seguirá pidiendo al Gobierno central.

La Asociación General de Agricultores, no obstante las destempladas amenazas de los periodistas (¿?) mercenarios al servicio del comunismo internacional, considera que no debe separarse un ápice de su línea de conducta mantenida a través de su gestión en defensa de los intereses del agro nacional, y para que se vea una vez más como tales intereses son constantemente detentados, quiere referirse al Comité de defensa de tierras recientemente organizado en San Pedro Pinula, departamento de Jalapa. Centenares de agricultores y vecinos de Pinula han decidido constituir una "Unión Cívica Pinulteca", según se afirma, "en presencia de las constantes usurpaciones a la propiedad privada, asaltos en cuadrilla y toda clase de provocaciones a los habitantes pacíficos del municipio, por parte de los componentes de la "Unión Campesina de San Pedro Pinula", dirigidos por líderes perversos e inescrupulosos". Cabe señalar que la Unión Cívica Pinulteca registra entre sus componentes a personas afiliadas al PAR y Renovación Nacional que como es sabido están catalogados como círculos políticos "revolucionarios", y de esa cuenta no es posible atribuir la fundación y propósitos de ese "Comité cívico", a "perversas maquinaciones de los reaccionarios enemigos del régimen, etc., etc." En la exposición de motivos declaran los de Unión cívica pinulteca que se proponen gestionar ante el gobierno en el sentido de que éste mantenga a la ciudadanía en el goce de sus derechos y reclamar que éste imponga a las autoridades que deben apartarse de todo sectarismo. Quiere la Entidad buscar los medios de defensa adecuada frente a los desmanes de la Unión campesina. ¿Significará la Organización del Comité de defensa de tie-

rras a que aludimos una maniobra de carácter reaccionario? Desde luego que no, y señalarla como tal no pasaría de ser malévolo.

Guatemala, 10 de abril de 1953.

El Irrespeto a la Ley y a las Autoridades

La Asociación General de Agricultores continúa en la labor que se ha impuesto en legítima defensa de sus afiliados y de los agricultores en general, que en definitiva son quienes constituyen las verdaderas fuentes de riqueza nacional. Sólo que en esta oportunidad, no será tomado de las informaciones que sirve la prensa local, las denuncias de los constantes atropellos cometidos por las Federaciones campesinas y líderes criollos y extranjeros, que continúe en esa defensa, sino sacando de los propios archivos algunas de las quejas que le llegan, quejas que por otra parte ya han sido expuestas a los organismos agrarios centrales.

Para el efecto tenemos a la vista un memorial presentado ante el señor Jefe del Departamento Agrario Nacional por el que los interesados, dueños de las fincas "La Laguna" y "El Pique", expresan que ratifican anteriores exposiciones, y advierten que "en cambio de la intervención enérgica y eficaz que pedimos, para que actuara la junta de vigilancia en el sentido de que se cumplieran nuestras leyes y se evitaran daños y perjuicios a nuestras fincas y al país, la respuesta fué que el veintiocho del mismo mes de marzo, a las diecisiete horas se produjo un incendio en el potrero la "Laguna", no obstante tener rondas de más de diez metros, y se trabajó sábado, domingo y lunes para que no continuara el fuego combatiéndolo por medio de bomba de motor. No sólo paró en eso, por cuanto que el viernes tres de abril se produjo otro fuego en la plantación de citronela, destruyéndose completamente siete hectáreas de ese cultivo".

Sabido es, porque de ello se han hecho públicas denuncias, que son los elementos "agraristas" los que han prendido fuego a varias valiosísimas plantaciones, pretendiendo con ello que tales propiedades por falta de cultivo sean afectables por la Ley de Reforma Agraria, y en tales condiciones les sean repartidas. Conocido es igualmente, cómo esta actitud, punible desde todo punto de vista, se ha quedado al margen de la ley, pues que las autoridades obligadas a ordenar la persecución y enjuiciamiento de los delincuentes, se

han cruzado de brazos sin dar importancia a tales hechos que, ya en conjunto, constituyen un positivo desastre nacional. Sabido es que ante la impunidad, las federaciones campesinas y los líderes comunistas que las guían, se ensoberbecen más y más y que ello origina la falta de respeto a las autoridades y a los mandatos de la ley.

Más adelante en la exposición a que venimos aludiendo, los dueños de la finca "El Pique" afirman que son los mismos invasores Antonio Alcántara y compañeros los responsables criminalmente de esos incendios y que tal responsabilidad ya fué denunciada por escrito el treinta y uno de marzo a las autoridades competentes de la Democracia, sin resultado alguno. Agregan que esos mismos invasores son los que no están conformes con las tierras repartidas espontáneamente y sin oposición alguna de su parte para los respectivos cultivos, y quienes alegando "arrendamientos forzosos", arrendamientos que de conformidad con los *Decretos 712 y 853 del Congreso ya no tienen vigencia*, mediante la fuerza y la violencia, imponen la anarquía y destruyen bosques en lugares ajenos a toda expropiación. Lo anterior quiere decir que además de consumarse los *hechos vandálicos* de que la prensa se ocupa a diario sobretexto de la aplicación del Dto. 900 —Ley de Reforma Agraria— las autoridades, conocedoras de tales hechos, igualmente faltan al imperativo constitucional de mantener a los dueños en el goce tranquilo y en el dominio pleno de sus propiedades sin más limitaciones que las que la misma carta fundamental establece. Quiere decir que el bienestar social, seriamente amenazado por las hordas "agraristas", no importa a esas autoridades, obligadas igualmente por un imperativo constitucional a mantener ese bienestar de los administrados. ¿Cuál será la oportunidad que el poder público espera para verificar todas y cada una de las denuncias de quienes han sido objeto de detentación de sus bienes, amenaza de sus personas y asalto de sus viviendas? ¿Qué oportunidad esperan las autoridades centrales para marcar alto a esta ola de terror que se enseñorea en los cuatro puntos cardinales del agro nacional? Preguntas son estas que deseamos como guatemaltecos auténticos sean contestadas con la realidad de una intervención inmediata por parte del poder público, en gracia del respeto a las leyes, y en gracia también de que sólo así puede aún soslayarse una bancarrota total de nuestra economía.

¿Cuál será la actitud de las máximas autoridades agrarias en presencia de la "indignación", con que han sido re-

cibidos por la Confederación Nacional Campesina las órdenes turnadas por el Departamento Agrario Nacional y Presidentes de las comisiones agrarias departamentales, órdenes tendientes a que los campesinos usurpadores desalojen las tierras que han ocupado; y la expresión retadora de que "el trabajador no desocupará las tierras?". Porque los mensajes-órdenes del departamento Agrario Nacional, son órdenes y como tales deben o deberían ser cumplidas sin miramientos de ninguna especie.

Esto no puede ser más ilustrativo, y si las órdenes giradas por el Departamento Agrario Nacional en este caso, como en otros anteriores, no llegan a cumplimentarse, ello quiere decir que la jerarquía ha sufrido notoria mengua con grave daño para los gobernantes y gobernados: y señalar esa penosísima circunstancia no habrá de ser motivo para que la prensa comunistoide tilde en forma injuriosa a la Asociación General de Agricultores, a través de la gruesa y asqueante literatura de que a diario echa mano.

Guatemala, 18 de Abril de 1953.

La AGA Protesta por los Procedimientos Empleados contra su Director, Licenciado don Juan Córdova Cerna

La Asociación General de Agricultores esperó la versión oficial que se desprendiera del proceso incoado contra los custodios del Licenciado Córdova Cerna, guardias civiles de alta Ricardo Figueroa Barrera y Jacinto Viteño Sotto Santos, para hacer pública manifestación de protesta contra los actos y actitudes del poder público en torno a la pretendida fuga de nuestro estimado Director Licenciado Córdova Cerna; mas ahora que la prensa (El Imparcial y La Hora) ha servido a sus lectores, tomada del proceso respectivo, la versión rendida en declaraciones prestadas, ante el Juzgado 6º de 1ª Instancia, por los guardias aludidos, la indignación sube de punto, pues que se confirman en un todo la serie de maquinaciones artificiosas, conque las autoridades policíacas han tratado de hacer misteriosa la ausencia del licenciado Córdova Cerna de su hogar. En efecto, los custodios del Licenciado Córdova Cerna, no alocucionados lo suficientemente, manifestaron ante el Juez *a quo* que el distinguido profesional les había sido entregado en el primer cuerpo de la Guardia Civil el día 3 del mes en curso

para ser conducido a Salamá, consignado al Juzgado de Primera Instancia de ese Departamento. Agregan los guardias que se les dijo que se les entregaba a pie porque no había vehículos para su conducción. Desde luego se advierte lo grotesco de una situación tal. Y lo grotesco resulta más cuando se recuerda que el licenciado Córdova Cerna había sido aprehendido en su casa de habitación con el concurso de catorce guardias, entre civiles y judiciales y de grotesco se torna en ridícula cuando se piensa que en Boletines oficiales se ha afirmado que el Licenciado Juan Córdova Cerna era el eje intelectual de la rebelión de Salamá.

Más adelante, y siempre dentro de sus declaraciones, los guardias custodios afirman que siendo conducido el Licenciado Córdova Cerna a su destino se les fugó de un carro particular placas 2518, que les había dado un "jalón", para llevarlos del Guarda Viejo a Las Majadas. ¿Qué opinará de ésto el señor coronel Director de la Guardia Civil cuando en exposición hecha a la prensa manifestó que el profesional se había fugado, "cuando era transportado a bordo de una radiopatrulla rumbo a Salamá"? El único camino que le ha quedado al jefe de la Guardia Civil es el de negar los hechos afirmados en las declaraciones de los guardias procesados, porque de otra suerte resultaría poco airosa su situación. No queremos seguir uno a uno los puntos que cubren las declaraciones de los guardias custodios del Licenciado Córdova Cerna, porque para nuestro objeto, con los señalados basta para afirmar que, en todo esto, han mediado malas artes de quienes sabiéndose impunes, no han tenido inconveniente en mantener en una continuada agonía el hogar del Licenciado Córdova Cerna, urdiendo una fuga que no saben cómo explicar, y en un continuado sobresalto a la ciudadanía toda que, en presencia de estos hechos, siente perder el minimum de garantías en razón de su libertad e integridad personal. Por todo ello la Asociación General de Agricultores eleva su más enérgica protesta ante las autoridades superiores, a quienes desde luego pide que se pronuncien en un boletín informativo que de una vez lleve tranquilidad a la familia guatemalteca y pide igualmente que gire instrucciones pertinentes a efecto de evitar quebrantos ahí donde no hay necesidad de ocasionarlos, como en el caso de la señora Alvarado de Córdova Cerna, a quien se somete a una estrecha vigilancia y a otras molestias. Una actitud así sobre ser inmoral resulta inhumana y debe ser reprimida.

Estima la Asociación General de Agricultores que la situación creada por la supuesta fuga del Licenciado Juan Córdova Cerna y su posible aparecimiento en Honduras, son hechos que han conmovido hondamente los sectores sociales del país, a quienes se les infiere una nueva ofensa con pretender que el pueblo admita las burdas explicaciones que cada día enredan más a sus autores, y porque lo estima así pide y exige a los jueces que por uno u otro motivo tengan que intervenir en este asunto, proceder no con vista a intereses políticos, sino con entera sujeción a la ley y poner bajo el peso de ésta a quienes resultaren responsables de cualquier hecho punible, porque así, y sólo así, puede ponerse dique a tanto desmán y falta de respeto a las Instituciones del país.

Guatemala, 22 de abril de 1953.

La Indemnización con Bonos Agrarios

Muchos miembros de la Asociación General de Agricultores nos han pedido opinión sobre uno de los aspectos más importantes de la Ley de Reforma Agraria: el relacionado con la indemnización por parte del Estado al terrateniente cuya propiedad, por razón de la misma ley, resultare afectable, y en consecuencia sujeta en parte a ser expropiada. Decimos que es éste quizá uno de los rubros más interesantes, y quizá el que presenta aspectos de inconstitucionalidad más notorios; lo es hasta el punto, que hace que la expropiación indemnizada a través de Bonos Agrarios, se convierta en una real y verdadera confiscación, porque de inmediato resalta que el pago (indemnización) realizado en forma de promesa de pago, en realidad no es pago, porque para ser tal habría de ser preciso que el indemnizado lo aceptara.

Ahora bien: la expropiación por causa de utilidad y necesidad públicas, se sigue un proceso análogo al de la compra-venta, sin más que en aquella falta la voluntad del vendedor que es suplida por las causas que hacen necesaria y justa la expropiación. En efecto: declarada expropiable una propiedad raíz o parte de ella, el precio a cubrir por el Estado o el Municipio, en su caso, al expropiado (vendedor), se fija ordinariamente de conformidad con las correspondientes declaraciones que figuran en la matrícula fiscal. Fijado así el precio, se emite por el órgano que correspon-

da el Acuerdo de Expropiación, indicando los fundamentos de ella y el precio en moneda de curso legal que hay que pagar al expropiado. El precio del bien expropiado no puede entenderse que sea en documentos de promesa de pago, porque repetimos, el pago previo debe de preceder al traspaso del dominio de lo expropiado, en moneda de curso legal. Al no hacerlo así, es indudable que se viola el Arto. 92 de la Constitución de la República que ordena en forma clara e imperativa que en las expropiaciones por causa de utilidad o necesidad públicas o interés social legalmente comprobado, *debe ser previa la indemnización*; y esto es así, porque la indemnización en su sentido natural y obvio equivale a decir sustitución de un bien por su valor representado en dinero. ¿Qué son los bonos agrarios creados por virtud del Dto. 900, Ley de Reforma Agraria? A nuestro juicio no son más que títulos de promesas de pago, y no papel moneda o moneda que cubran legítimamente el valor del bien expropiado. Esta situación se aclara más cuando se observa que el Estado procederá a *amortizar* el valor de los bonos emitidos, y a *pagar intereses sobre ellos*, pues que si en realidad en tal forma se considera haber correctamente indemnizado, resulta fuera de lugar esa amortización y ese reconocimiento de intereses. Por ello insistimos en que tal forma de indemnizar (*pagar*), no es otra cosa que un pago que se deja, en las condiciones que rigen la emisión de los bonos agrarios, para un futuro, más o menos lejano.

Hemos tratado de expresar en forma objetiva y comprensible nuestra opinión sobre tan delicado asunto, pero para completar con argumentos jurídico-legales nuestro parecer, preferimos, en otro de los aspectos de este delicado asunto, remitirnos al Dto. 203 del Congreso de la República (Ley Monetaria. y entonces nos encontramos con que en su Arto. 1º, este cuerpo legal fija que la unidad monetaria de Guatemala se denomina Quetzal; y en su Arto. 2º norma que “Todos los *precios*, impuestos, tasas, honorarios, alquileres, contratos y *obligaciones de cualquier clase o naturaleza*, que deben ser pagados, cobrados, percibidos o ejecutados en la república se expresarán y **LIQUIDARAN EXCLUSIVAMENTE EN QUETZALES**”. Como se ve este precepto cubre en forma amplia lo relacionado con el punto que tratamos de enjuiciar, pues que se refiere al *precio*, que se debe cubrir por una expropiación acordada, y así tal precio debe expresarse no en bonos agrarios, sino en quetzales, que es la unidad monetaria de Guatemala. Por su parte tal precio debe *liquidarse exclusivamente en quet-*

zales. Más adelante la propia Ley Monetaria en su Arto. 8º preceptúa que los billetes y las monedas emitidas por el Banco de Guatemala, tendrán curso legal y poder liberatorio ilimitado en todo el territorio nacional, y el Arto. 9c del propio cuerpo de leyes estatuye que el Banco de Guatemala cambiará a la vista y sin cargas de cualquier naturaleza los billetes y las monedas nacionales. Sobre el particular cabe preguntarse ¿tienen los bonos agrarios ese poder liberatorio ilimitado de que habla el Dto. 203 del Congreso? ¿Tiene curso legal y forzoso? No creemos que el Gobierno aceptara en ningún momento el pago de cualquier adeudo fiscal con Bonos Agrarios, y tal proceder no sería en modo alguno censurable, así como es censurable por ilegítimo e inconstitucional obligar a los expropiados a entregar sus bienes por simples promesas de pago.

En nota venidera haremos algunas otras consideraciones.

Guatemala, 23 de Abril de 1953.

La AGA Pide al IGSS reconsidere el Aumento de Cuotas

La Asociación General de Agricultores espera que la Junta Directiva del IGSS, atendiendo el clamor general de las clases laborantes, reconsidere la medida tomada en Acuerdo No. 211, en el que se dispone fijar las cuotas de los contribuyentes en la proporción siguiente: patronos, 5% y trabajadores 2½%. A las innumerables protestas que a diario dirigen los trabajadores que se sienten afectados por el aumento de cuotización se han unido las de patronos particulares y las de las entidades representativas de estos últimos. La AGA, en defensa de los agricultores asociados y de los patronos agrícolas en general, manifiesta su desacuerdo con la disposición acordada.

La AGA esperaba con interés las explicaciones que las autoridades del IGSS estaban obligadas a rendir a la opinión pública, y especialmente a los contribuyentes, para explicar las razones que lo obligaron a decretar el aumento de cuotas y la justificación de su cuantía. Sinceramente manifestamos a ustedes que el informe que apareció publicado en la prensa del 21 del mes en curso sobre la cuota para el programa de Protección Materno Infantil no llena el objetivo que persigue y dista mucho de convencernos de la necesidad del aumento impugnado.

Después de analizar serenamente las publicaciones oficiales del IGSS y los memoriales que con motivo del nuevo servicio que prestará a las trabajadoras y esposas de los trabajadores afiliados, estimamos que el meollo de la cuestión está en el desequilibrio que se produjo entre los planeamientos iniciales de los recursos con que contaría el IGSS y la falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte de unos de los tres contribuyentes, o sea el Estado, como tal y como patrono. En virtud de ese incumplimiento adeuda una cantidad que llega a los Q900,000, según recientes informaciones de prensa.

Según el artículo 26 del acuerdo número 97 de esa Institución, los patronos particulares debían pagar el 2½% del total de salarios que devengarán sus trabajadores; éstos, a su vez, deberían cubrir una cuota equivalente al 1% de los sueldos que percibieran y el Estado como tal y como patrono debía entregar el 1½% del total de salarios que pagaran a sus trabajadores el propio Estado y los patronos particulares.

Esa proporción, aunque no es la acostumbrada en otros países, parecía aceptable y se hubiera ido llenando las diferentes prestaciones, si no ocurriera el imponderable de que el Estado no cumplió con pagar todas sus cuotas. A esta principal razón se debió que el acuerdo número 97 del IGSS se reformara por el Acuerdo número 152, aumentando las cuotas de los patronos particulares al tres por ciento, las de los trabajadores al uno y medio por ciento del total de salarios que les paguen sus respectivos patronos y dejando al Estado inmutable su compromiso teórico de pagar uno y medio por ciento. El recargo en las cuotas, decretado por la Junta Directiva del IGSS en septiembre de 1950 fué aceptado de buen grado por los sectores patronales, porque uno de sus fines era el de preparar la protección materno infantil, cuya conveniencia y necesidad nadie niega en Guatemala.

La resistencia a aceptar el nuevo aumento, creemos que obedece a las siguientes causas fundamentales: a) la difícil situación económica por la que atraviesa Guatemala, caracterizada por la acentuada inseguridad de la empresa comercial, industrial y muy especialmente la Empresa agrícola. Esta situación, que se deriva de factores que no es del caso enumerar en esta exposición y entre los que únicamente queremos señalar la tendencia gubernativa de crear constantemente nuevos impuestos y de aumentar los existentes, produce un marcado estancamiento en las actividades mercantiles de todo orden, que se refleja de manera sensible en las posibilidades

económicas de los sectores de la producción; b) al monto de la cuota que se considera desproporcionado en relación a las prestaciones que está suministrando el IGSS y que ofrece suministrar con el nuevo programa; c) a la forma en que se invierten los recursos económicos del IGSS, que con una más adecuada organización y sobre todo con una administración que se preocupara de evitar las inversiones innecesarias y dispendiosas, llegaría a invertir un porcentaje mayor en positivas prestaciones a los trabajadores, que en último término es el motivo y razón de ser del régimen de seguridad social. A este respecto cabe señalar la cuantiosa como inadecuada inversión que representó la compra del Hotel Victoria para la instalación del servicio materno infantil. Por la zona residencial en que está construido, el IGSS ha tenido que pagar un excesivo precio solamente por el predio, ya que el metro cuadrado en este sector ha alcanzado niveles muy altos, lo que se habría evitado adquiriendo un predio a inmediaciones del Hospital Roosevelt, por ejemplo, de una superficie mayor en previsión del obligado ensanche que ameritará a corto plazo por el crecimiento de población. Por otra parte se ha pagado una costosa construcción que si resultaba inadecuada para hotel, más inadecuada es para centro de maternidad. Prueba de ello es la cuantiosa suma que se ha invertido en adaptación del edificio para los fines requeridos. Estamos seguros de que si se hubiera iniciado la construcción del edificio ad-hoc, desde que se planeó la protección materno-infantil estaría ya terminado a un costo mucho menor. Según las informaciones del IGSS el edificio y su acondicionamiento ha costado Q560,000. Por otra parte se hace imperativa una reducción del personal burocrático así como una remuneración más acorde con las posibilidades económicas del Instituto, especialmente en lo que concierne a los funcionarios de alta categoría, para evitar que estos renglones absorban un porcentaje tan alto de las cuotas; y d) la falta de cumplimiento del Estado de las obligaciones pecuniarias que le competen por imperativo legal. Pesa sobre el Estado primordialmente la obligación de velar por el bienestar social de los habitantes de la Nación. En consecuencia, su aporte debería de ser el primero en ingresar a las cajas del Instituto. No es justo ni equitativo recargar las obligaciones de patronos y trabajadores cuando el otro sector obligado al sostenimiento del régimen es remiso en cumplimiento de sus compromisos en esta materia.

La Asociación General de Agricultores pide a los señores Directores del IGSS la reconsideración del Acuerdo

número 211 y que se lleven a cabo nuevos estudios que reduzcan el problema a sus límites justos y exactos.

Guatemala, 28 de abril de 1953.

¿Reformas a la Ley de Reforma Agraria?

El anunciado propósito de nuestros legisladores de realizar sustanciales reformas a varias de las leyes (Código de Trabajo y Reforma Agraria) como es natural, ha causado cierta sensación de pena e inquietud entre quienes, por una u otra causa, habrán de ser afectados por tales reformas. Una actitud así parecería poco razonable, y quizá calificable como de mala prevención sistemática, pero si se hace un somero recuento de las disposiciones salidas de la que debiera ser nuestra representación nacional, se viene a la cuenta de que las normas legales, promulgadas durante el período llamado "revolucionario", al menos las de mayores alcances sociales, adolecen de un sectarismo inconfundible, y ese sectarismo se acentúa más y en forma odiosa, si se quiere, cuando son aplicadas por jueces y funcionarios que, sintiéndose más "revolucionarios" que las "leyes revolucionarias" emitidas, orillan su contenido o van más allá de éste, según convenga al sectarismo político imperante, con notoria mengua de la justicia, y total menoscabo de la legitimidad. De esa suerte, el rigor de las disposiciones legales se torna voluntariedad y capricho en manos de los jueces y de los funcionarios; y desaparece el minimum de protección legal que contienen en favor de los gobernados.

La Asociación General de Agricultores, a riesgo de que su actitud cause más de una rabieta entre la gente que se llama "revolucionaria", e igualmente a riesgo de que por tal circunstancia se le tilde con los más destemplados epítetos en la prensa al servicio de Moscú, habrá de enjuiciar las reformas en proyecto, pues que considera indeclinable el hacerlo porque estima que ello constituye un imperativo ciudadano, y como en el caso de las pretendidas reformas a la Ley de Reforma Agraria, es algo que entra en la defensa de sus agremiados y de los agricultores en general. Ya un diario de la localidad sirve en comentario ponderado algo que se relaciona con esta reforma, y alude específicamente al artículo 33 del anteproyecto de Reforma a la Reforma de la Ley Agraria, señalando certeramente que el

sectarismo de que ya antes hemos hablado, se refleja en forma evidente en un nuevo inciso que se le pretende adicionar. Para ser más claros, copiamos la adición a que hacemos referencia: "Se entiende por comunidades agrarias las colectividades indígenas o de campesinos que posean títulos de propiedad comunal o que hayan poseído la tierra en común con anterioridad al nueve de mayo de 1952". "Si el conflicto de tierras fuere entre comunidades y municipalidades las tierras se adjudicarán a las primeras, dándoselas en usufructo perpetuo, en el sitio que las Comunidades elijan y en la medida que lo necesiten; pero en lo relativo al caso de que el conflicto agrario sea entre comunidades y particulares, las tierras serán entregadas a las Comunidades siempre que tales tierras sean afectables, y si no lo fueren, las comunidades podrán recurrir a los tribunales comunes". Como se ve, los particulares quedan en condición subalterna, pues que el derecho de ocurrir a los tribunales comunes sólo se otorga en favor de las comunidades, situación ésta por demás irregular, y que por su parte, adolece de inconstitucionalidad. En efecto, aunque la reforma que se pretende introducir en el caso de pugna de tierras entre comunidades y particulares, sólo se otorgue la facultad de ocurrir a los Tribunales Comunes a las comunidades, es incuestionable que un precepto constitucional faculta a todos los guatemaltecos, individual o colectivamente, para reclamar sus derechos ante los tribunales de justicia. Así pues, aunque se quiera en forma secundaria atribuir a las comunidades una jerarquía que no debe de existir, sobre los municipios, tal jerarquía es constitucionalmente inadmisibles, y resulta impropia y fuera de lugar. Por todo ello, las disputas que pudieren suscitarse por asuntos de tierras entre comunidades y particulares, máxime en lo que respecta al dominio de tales tierras, debe reservarse al conocimiento exclusivo de los tribunales de justicia, únicos competentes para dirimir esta clase de contiendas, ya que si bien se ve, los organismos agrarios no son más que eso, *organismos* encargados de la realización del decreto 900 del Congreso, Ley de Reforma Agraria, pero como ya lo hemos sostenido en alguna oportunidad, no tienen jurisdicción para dirimir contiendas; les falta esa capacidad de dar a cada uno lo que es suyo, que es atributo únicamente de los jueces. Es a los juzgadores pues, a quienes corresponde y compete decidir sobre cualquier pugna sobre dominio de tierras que se suscitare entre comunidades y particulares.

Hay sin embargo algo de suma trascendencia que es necesario señalar paralelamente a los comentarios hechos en edición reciente por un diario de la localidad, y ese algo es la autonomía municipal que como es sabido es de carácter constitucional y una de las conquistas de que con ufanía debe jactarse el movimiento revolucionario realizado en octubre de 1944. A ello y a las demás reformas contenidas en el anteproyecto de reforma, a la Reforma de la Ley Agraria habremos de referirnos en venideras notas.

Guatemala, 30 de Abril de 1953.

El "Affaire" del Licenciado Córdova Cerna, no está cancelado.

La Asociación General de Agricultores no puede ni debe guardar silencio, ante lo que se ha dado en llamar "Cancelación del caso" de nuestro muy estimado ex Director, licenciado don Juan Córdova Cerna, porque no considera que sea tan fácilmente cancelable un suceso que ha causado positiva indignación en todos los círculos sociales; no cabe el cobarde silencio ante las dramáticas declaraciones hechas por el ahora expatriado guatemalteco, que ha sido víctima de una larga cadena de atropellos, vejámenes y torturas, propios de países bárbaros y totalitarios. No puede ser cancelado —ni menos silenciado— este caso que constituye la burla más sangrienta y la más rotunda negación al respeto de la dignidad humana.

Motivo de honda preocupación fue para la AGA ignorar el paradero del licenciado Córdova Cerna, desde el día en que fuera extraído de su domicilio por numerosos agentes de la policía. Su sorpresa fue grande al conocer las declaraciones del Director de la Guardia Civil sobre que el presunto reo se había fugado al ser conducido a Salamá. La versión de este funcionario, lejos de ser convincente, llevó fundadas dudas a la ciudadanía, por la forma aparatosa y arbitraria en que se efectuó la captura del distinguido profesional y por la falta absoluta de noticias del "prófugo" a sus familiares. Y llegó al clímax la intranquilidad social, cuando se supo que el aprehendido no había sido presentado ante la Sala que ordenó su exhibición personal, temiéndose que alguna poderosa causa inhibía a las autoridades policíacas de cumplir con el mandato judicial.

Al elevarse a plenario el proceso que se sigue a los pretendidos custodios, en el Juzgado 6o. de Primera Instancia, se vino a comprobar la rotunda falsedad de la versión oficial sostenida empeñosamente pero con notoria ineptitud. Ante la evidencia que se desprendió de las declaraciones de los custodios, en manifiesta discrepancia con las del Director de la Guardia Civil, la Junta Directiva de la AGA, en cumplimiento de un elemental deber de defensa de uno de sus miembros, estimó impostergable protestar por los procedimientos atentatorios a la seguridad individual y conculcadores de todo el ordenamiento jurídico de la Nación, máxime que se trata de uno de sus directores más apreciados por sus relevantes cualidades, reconocidas por todos los que han tenido el honor de relacionarse con él.

Nuestra protesta dió margen a que un pasquín oficialista, dirigido y redactado por extranjeros que en mala hora llegaran a nuestra patria, malévola y reiteradamente haya inculcado a la AGA de hechos que le son totalmente ajenos y en los que no tiene ninguna participación ni ingerencia, directa o indirecta. La Asociación General de Agricultores, no de ahora, sino siempre, ha estado escrupulosamente apartada de toda actividad política o de otra índole que no sea la defensa de los agricultores dentro de la ley, ciñéndose estrictamente a lo que preceptúan sus Estatutos. La labor de la AGA está a la vista de todos y se desenvuelve abiertamente, en el ejercicio de un derecho garantizado por la Constitución. Es inevitable que en el desarrollo de esta misión de defensa, se produzcan resentimientos de todos aquellos que, con soberbia ilimitada, pretenden que su manera de pensar no admite discusión y a quienes es duro soportar una crítica. Pero todos ellos pueden tener la seguridad de que mientras esté vigente el Artículo 36 de nuestra Carta Magna, que garantiza la libertad de expresión, la AGA continuará denunciando, ante la opinión pública las arbitrariedades que se cometan en los asuntos que afecten a sus miembros o que se relacionen con la agricultura en general y continuará exigiendo a las autoridades que ajusten sus procedimientos a las leyes de la República. El día en que ello no sea posible hacerlo, será porque se habrá perdido una de las pocas realidades que nos van quedando de los hermosos postulados de la Revolución de Octubre de 1944.

Suena a sarcasmo evocar esta gesta en la que tantas esperanzas puso el pueblo de Guatemala, en los precisos momentos en que se ha escrito una de las páginas más tene-

brozas de nuestra historia, que supera a cuanto de alevoso y criminal se cometió durante la época a la que puso fin aquella Revolución; y que precisamente sea protagonista de ella, en el duro papel de víctima, uno de los hombres que más contribuyeron a su estructuración con su inteligencia y con su indiscutible valer, como lo es el licenciado Córdova Cerna —por extraña coincidencia— ex-Ministro de Gobernación de la Junta Revolucionaria de Gobierno. La Asociación General de Agricultores ha sentido en carne propia la serie de incalificables vejámenes que se han perpetrado en la persona de uno de sus socios directivos y que ha venido a causar una sensación general de estupor, porque se creía imposible que en pleno siglo XX, se cometieran semejantes ultrajes a un 'ser humano, en un régimen que pregona a los cuatro vientos ser la encarnación más pura y auténtica de la Democracia. Procedimientos de crueldad tan refinada, de odio tan acendrado, de ausencia total de un mínimo destello de humanitarismo, producen una repugnancia sin límites hacia sus inspiradores y ejecutores, que hace clamar ante las autoridades judiciales por su propia y eficaz intervención, a fin de imponer a los responsables de estos delitos las sanciones que merecen.

El irrespeto a la opinión pública llega al extremo cuando, ante las categóricas y verídicas acusaciones del licenciado Córdova Cerna, el Ministro de Gobernación se empeña en sostener la verdad oficial de que aquél se fugó, ateniéndose el alto funcionario a los informes que le rindió el director de la Guardia Civil, y desafía al denunciante a que pruebe plenamente sus afirmaciones... Se ha cometido un crimen. Un delito público de los más repugnantes, que debe perseguirse de oficio. La gravedad de los cargos amerita la pesquisa inmediata. En caso contrario, el superior jerárquico se responsabiliza de los actos de sus subordinados, que eso y nada más que eso, son las autoridades policíacas respecto al titular de Gobernación.

¿Será posible que después de tanta patraña puedan aceptarse las declaraciones del Jefe de la Guardia Civil en relación con el secuestro, tortura y extrañamiento del licenciado Córdova Cerna? ¿Será posible desvanecer ante la conciencia nacional el clima de repudio, rechazo e indignación que los hechos perpetrados en la persona del licenciado Córdova Cerna han ocasionado? ¿Será posible que las autoridades superiores, en vez de abrir una investigación severa, como el caso lo demanda, se limiten ante las manifestaciones del licenciado Córdova Cerna a decir que éste es

algo así como un embustero, y que esperan que pruebe los hechos delictuosos de que ha sido víctima?

No queremos inferir la ofensa al licenciado Augusto Charnaud MacDonald de suponerlo capaz de creer en los informes que en este doloroso caso le ha rendido el director de la Guardia. Ello sería desconocer la natural sagacidad del abogado Charnaud; y aludimos específicamente a él porque, además de ser el superior jerárquico del director de la Guardia Civil y del jefe de la Judicial, es un profesional que tiene que velar por el propio decoro de su título y por el del gobierno al que sirve. Así pues, el señor Ministro de Gobernación debe ordenar el esclarecimiento inmediato de los hechos.

La opinión pública conoce ya la penosa relación de los sucesos que personalmente hiciera el licenciado Córdova Cerna desde la vecina república de Honduras, a donde fue vilmente arrojado por la policía. Esa opinión pública, a la que es difícil engañar, ya ha escogido entre las dos versiones, porque para ella vale más la palabra de un Juan Córdova Cerna que la de cien funcionarios policiales. Ante esa opinión pública ya no es posible mantener por más tiempo la mentira y el embuste.

La Asociación General de Agricultores ha considerado un imperativo de solidaridad dejar pública constancia de su repudio más enérgico a las torturas, vejámenes, humillaciones, amenazas y expatriación de que se ha hecho víctima a uno de sus miembros y espera que el Ministro de Gobernación, anteponiendo el cumplimiento de su deber a toda conveniencia personal o política, ordene el esclarecimiento de los hechos.

Guatemala, 2 de mayo de 1953.

PRECEPTOS CONSTITUCIONALES MANIFIESTAMENTE VULNERADOS:

Artículo 23.—El Estado protege de manera preferente la existencia humana. Las autoridades de la república están instituidas para mantener a los habitantes en el goce de sus derechos, que son primordialmente la vida, la liber-

tad, la igualdad y la seguridad de la persona, de la honra y de los bienes.

Artículo 24.—Los funcionarios no son dueños sino depositarios de la autoridad, sujetos y jamás superiores a la ley y siempre responsables por su conducta oficial. En tal concepto, ningún organismo del Estado ni funcionario público tiene más facultades o autoridad, que las que expresamente les confiere la ley.

Artículo 25.—..... A ningún guatemalteco puede expatriársele, prohibírsele la entrada en el territorio de la república o negársele pasaporte u otros documentos de identificación.

Artículo 43.—Nadie puede ser detenido o preso sino por causa de delito, falta o apremio judicial y mediante orden escrita de autoridad competente librada con arreglo a la ley, salvo que se trate de reo prófugo o de delito in fraganti, casos en los cuales no será necesaria la orden previa; pero los detenidos deben ser puestos sin demora a disposición de la autoridad judicial y en los centros de detención provisional.

Artículo 44.—A ninguno puede incomunicarse por más de cuarenta y ocho horas. Si se violare este precepto, la autoridad que dé la orden y el jefe de la prisión o los empleados que la ejecuten o hagan ejecutar, serán destituidos de sus cargos y castigados con las penas que señala la ley.

Artículo 45.—Las cárceles son centros que tienen por objeto asegurar a los reclusos y promover su reforma, no maltratarlos ni sujetarlos a restricciones innecesarias para tal seguridad. En ningún caso puede infligírseles torturas, vejámenes, molestias ni cualquiera otra forma de coacción, ni hacérseles víctimas de exacciones ilegales. Si se violare este precepto, la autoridad que dé la orden y el jefe de la prisión o los empleados que la ejecuten o hagan ejecutar, serán destituidos de sus cargos e inhabilitados definitivamente para el desempeño de cualquier empleo público; sufrirán además el castigo correspondiente y serán responsables del pago de la respectiva indemnización.

Artículo 46.—Todo detenido debe ser interrogado dentro de cuarenta y ocho horas; al tiempo de su indagatoria se le hará saber la causa de su detención, persona que en su caso lo acuse y todo lo necesario para que conozca el hecho punible que se le atribuye. Cesará, desde ese momento, la incomunicación y ya en tal diligencia podrá proveerse de defensor.

DISPOSICIONES DEL DECRETO DEL CONGRESO

No. 93 (LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO):

Artículo 30.—Los Ministros de Estado tienen jurisdicción en toda la República, dentro de su respectivo ramo; desempeñan funciones permanentes, con **AUTORIDAD SOBRE LAS DEPENDENCIAS, OFICINAS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE SUS RAMOS.** Refrendarán los acuerdos y disposiciones de observancia general del Ejecutivo y **VELARAN POR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCION Y DE LAS LEYES;** sus demás atribuciones las determinan la Constitución y la ley.

Sección VI.—MINISTERIO DE GOBERNACION.—

Artículo 19.—Corresponden a su despacho: 1o.—Ejercer funciones de **CONTROL, VIGILANCIA, INSPECCION, SUPERVISION Y JURISDICCION SOBRE LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS:** a) LA GUARDIA CIVIL Y JUDICIAL.

La Acción Contra la Delincuencia no Debe Quedar en Recomendaciones

Se recordará que en reciente publicación, la Asociación General de Agricultores, marginando algunas recomendaciones del Jefe del Departamento Agrario Nacional, hacia los organismos agrarios subalternos, en el sentido de que se ajustaran en sus actuaciones al Dto. 900 del Congreso —Ley de Reforma Agraria— para evitar así la continuada cadena de atropellos y depredaciones cometidas por los agraristas empujados por los líderes y por las federaciones campesinas de

filiación conocidamente moscovita, señaló el disgusto, o más propiamente la cólera con que fueron recibidas esas recomendaciones, y algo más, la postura francamente irrespetuosa y desafiante de esas federaciones, postura que se hizo pública a través de declaraciones por medio de las que se negaban rotundamente al cumplimiento de las órdenes de la superioridad. En fecha más reciente el señor ministro de gobernación posiblemente recordando que uno de los imperativos legales de que está investido es el de una inmediata acción con objeto de reprimir sin contemplaciones las actividades punibles de cualquier orden, no sin cierto temor acusado en circular que dirigiera a los organismos agrarios en el sentido de que debían ajustar sus procedimientos a la ley, ya no con declaraciones públicas, sino con hechos, ha recibido la respuesta: su circular ha sido enviada a la canasta de los papeles inútiles; y así el Ministro del Interior continúa recibiendo denuncias de hechos vandálicos perpetrados por los agraristas y las federaciones campesinas, quienes, ante la impunidad, se han constituido en campeones del pillaje y del terror. En efecto: de la zona occidental de San Marcos se denunciaban innúmeros atropellos contra la propiedad privada cometidos por "agraristas" que a ciencia y paciencia de las autoridades que no sólo los toleran sino que en muchos casos los fomentan, prenden fuegos a los potreros dejando al ganado sin pastos. Para no citar más que dos casos nos ocuparemos de la hacienda Varsovia del municipio de Ayutla, en donde grupos de campesinos prendieron fuego a los potreros enzacatados; y a la finca "San Rafael" del municipio El Rodeo; en donde incursionaron grupos de foragidos, se repartieron los campos de los mozos que se destinaban a la siembra de milpa, y las reservas forestales. Los informantes indican que esta última finca había sido denunciada con anterioridad y que ante la improcedencia de la denuncia, pues que estaba cultivada en sus cuatro quintas partes, había sido declarada por los organismos agrarios inafectable, tras el obligado expediente. Como es natural tal declaratoria de inafectibilidad, dada la mentalidad criminaloide de los "agraristas", sirvió únicamente como un estímulo para pasar con lujo de atropellos sobre las resoluciones ajustadas en un todo a la ley.

Para que el señor Ministro del Interior se vaya dando cuenta, si no se la ha dado, del resultado de sus circulares, órdenes giradas con la advertencia de que no se trata de "coaccionar" al campesino agrarista, queremos indicarle que posiblemente entre el diluvio de quejas que a diario recibe,

sin duda se encuentra la del elemento indígena de Momostenango, quienes se oponen a que sus parcelas sean medidas y han manifestado que antes entregan sus vidas si a ello se les obliga; mas como esa actitud tenía necesariamente que provocar la ira de los agraristas, no tardó en provocarse una serie de encuentros personales como el acaecido en Chichuy, situado entre los cantones Tierra Blanca y Zanjón, del municipio de Momostenango. El saldo, pues, de la actitud de quienes defendían lo suyo contra quienes pretendían arrebatárselo, fué un zafarrancho, del que resultaron varios heridos, y en el que tuvo que intervenir la autoridad destacando contingentes de la Guardia Civil y ambulancias de la Cruz Roja. La cosecha de delitos que la circular del titular de Gobernación ha causado no para ahí; hay algo más que excede a estas formas del vandalismo, y así, las pandillas agraristas no se detienen ante la presencia de ancianos y de niños, tal y como puede constatarse de reciente información proveniente de San Martín Jilotepeque. En este lugar los “agraristas” con el propósito de adueñarse sin trámite legal alguno se presentaron a la finca “Don Tomás”, y cuando la esposa del dueño, en unión de su pequeño hijo, trató de enfrentarse a los asaltantes, fue brutal y cobardemente golpeada, y su menor hijo fue víctima igualmente, de las sangui-narias agresiones de los intrusos “agraristas”. A este respecto se informa que los autores de estos comunistoides proceder es son miembros del Comité Agrario Local y de la Unión Campesina, contra quienes el esposo y padre de los agredidos se ha presentado pidiendo a las autoridades que traten de poner coto a estos hechos que pueden llegar a generalizarse que no acusan sino que el agrarismo no siente el más mínimo respeto ante las vidas, la propiedad, las autoridades, ni las leyes.

De todo lo relacionado se verá que la aplicación del Dto. 900 del Congreso —Ley de Reforma Agraria— va de mal en peor, y que de continuar las autoridades cruzándose de brazos ante la ola de delincuencia y de crimen que azota al territorio nacional, será cosa de que se busque la forma adecuada para defender la vida y propiedades hoy amenazadas.

Guatemala, 9 de mayo de 1953.

La Inconstitucionalidad a la Orden del Día

La Asociación General de Agricultores en reciente nota dada a la publicidad hubo de referirse al anteproyecto de reformas a la Reforma Agraria contenida en el Dto. 900 del Congreso de la República, y en esa oportunidad apuntó la condición subalterna en que se deja, no obstante su autonomía, de orden constitucional, a las Municipalidades con respecto a las "comunidades agrarias". En el anteproyecto aludido, al Artículo 4o. que reforma el Artículo 33 del citado decreto, fija que si hubiere tierras en conflicto entre "municipalidades y comunidades agrarias", serán adjudicadas a estas en el sitio que elijan y con carácter de usufructo perpetuo. Estima la Asociación General de Agricultores que en las condiciones señaladas se violan varios preceptos de nuestra Ley Fundamental, pues que los conflictos de tierras que versen sobre dominio y propiedad de las mismas, es indudable que de acuerdo con elementales normas jurídicas deben ser planteados ante Jueces investidos de jurisdicción y competencia para dirimirlos, y al facultar a los organismos agrarios para dirimir tales conflictos no sólo se da a los organismos agrarios —eminentemente de carácter administrativo— facultad de Jueces, sino que se viola en forma que no deja lugar a duda el Artículo 168 de la Constitución, que fija que los Tribunales de la República son los que tienen a su cargo el ejercicio de las funciones judiciales con EXCLUSIVIDAD ABSOLUTA. Siendo esto así, resulta incuestionable que con la calidad de Jueces que se quiere atribuir a los organismos agrarios, se usurpa en toda su plenitud un atributo que es propio de los Tribunales de Justicia.

Si el conflicto fuere entre particulares y comunidades, continúa la reforma propuesta, se resolverá en favor de las segundas, siempre que tales tierras sean afectables; más en caso de que no lo fueren, las comunidades podrán recurrir a los Tribunales comunes. La verdad es que con tanto ensayo legislativo la juridicidad y el respeto a la Justicia cada día se alejan más de nuestro medio. ¿Por virtud de qué las comunidades campesinas pueden disputar a los particulares las tierras no afectables por el Dto. de Reforma Agraria? ¿Con qué título y al amparo de qué normas legales podría plantearse ante la Justicia común un litigio propiciado por comunidades campesinas con el objeto de apropiarse de lo que es de ajena pertenencia?

De llevarse a cabo la reforma que se pretende, resultaría que ya no es sólo el Estado el que, a través del decreto 900 —Ley de Reforma Agraria—, puede iniciar la gestiones encaminadas a expropiar las tierras que por virtud de esa misma ley resulten afectables, sino que se habla ya de esa nueva entidad que se llama “Comunidad Agraria” que puede hacerlo ante los tribunales del orden común. Todo esto sin contar con la facultad de ocurrir a los tribunales en defensa de legítimos derechos, es de orden constitucional y en consecuencia no es necesario incorporarla en ningún cuerpo de leyes. Tal facultad, reconocida universalmente en las legislaciones de los Estados respetuosos de la propiedad, sólo ha sido negada entre nosotros en resoluciones verdaderamente monstruosas, como las proferidas por la Corte Suprema de Justicia, en las que no ha habido reparo alguno en declarar que contra las resoluciones de los organismos Agrarios no cabe ni siquiera el recurso extraordinario de Amparo; quiere esto decir que, contra lo que preceptúa el Artículo 170 constitucional, la Corte Suprema se niega a juzgar y “aplicar las leyes en todo aquello que las mismas hagan de su conocimiento”, en relación con otro precepto, también constitucional, que norma que el Tribunal de Amparo conocerá en los casos de violación de las garantías constitucionales, sin hacer excepción alguna, y sin importar para el caso, el que tales violaciones fueren realizadas por órganos agrarios.

El propio Artículo 4º del anteproyecto de reforma fija que el Organismo Supremo de la Reforma Agraria podrá otorgar las tierras que fueren municipales o nacionales antes del 9 de mayo de 1952, a los núcleos o colectividades indígenas mayores de 50 familias que soliciten usufructo perpetuo de tales tierras. Con una reforma así, resulta ridículo lo de la Autonomía Municipal, tan llevada y traída por la demagogia revolucionaria, pues que si el Ejecutivo (Organismo Supremo de la Reforma Agraria) puede, cuando lo estime políticamente oportuno, otorgar las tierras que fueren municipales en “usufructo perpetuo a las familias campesinas que así lo solicitaren”, el estatuto Municipal sale sobrando, y la única justicia será la que ampare solo y únicamente los intereses agrarios.

Concretando: la Asociación General de Agricultores ve en la reforma del Arto. 33 contenida en el Arto. 4 del anteproyecto de reforma al Dto. 900 una clara invasión del Organismo Ejecutivo en atributos que corresponden con *exclusividad* al Organismo Judicial; y algo tanto o más

grave: la extinción inicial de la autonomía municipal, incorporada, como no podía ser menos, en el ideario de la revolución de octubre y trasplantada luego a nuestra carta fundamental, para ponerla a salvo de las veleidades de los Gobiernos.

Guatemala, 16 de mayo de 1935.

Siguen las Usurpaciones en Materia Agraria

Está visto que a los funcionarios y a las autoridades poco o nada interesa que el país continúe en el despeñadero de su total desastre agrícola, y quien dice agrícola, bien puede decir económico y financiero. En efecto: si como ha ocurrido las autoridades centrales que han recibido con por menorizados detalles denuncia tras denuncia de los hechos vandálicos perpetrados por las Federaciones campesinas respaldadas por los Comités agrarios locales, contra la propiedad y el hogar de los llamados "terratenientes feudales", y en ninguno de los casos denunciados se ha procedido a una obligada pesquisa y a una también obligada punición de los infractores de las leyes penales y de la misma Ley de Reforma Agraria, tiene que pensarse que tales autoridades y funcionarios, por su notoria lenidad propician con simpatía morbosa, porque tal estado de cosas se prolongue para así contribuir al perfeccionamiento de un clima caótico en el que los múltiples delitos contra las personas y sus propiedades puedan tener cómodo asiento. Sólo cuando las irritadas pandillas integradas por "agraristas" perjudican con sus excesos delincuentes a éste o aquel grupo revolucionario, limitando a sus líderes en el reparto del botín de las propiedades asaltadas, se deja oír la voz medrosa de las autoridades superiores con temerosos llamados al orden y a la cordura, que más parecen prédicas de pastores protestantes que no las necesarias advertencias que las situaciones demandan, y es natural que de tales prédicas nadie haga caso; de ahí que la maquinaria infernal alimentada por odios y apetitos malsanos de los "agraristas" haya discurrido y siga discurriendo sobre la propiedad privada, pequeña o grande, aplastando cosechas y sembrando el agro de desolación y espanto; y en tan siniestra perspectiva, la Asociación General de Agricultores, siempre en tono de enérgica protesta, seguirá dando publicidad a las denuncias de los atropellos de que a diario se hace víctimas a sus afiliados y

a los agricultores en general, sin dar beligerancia a "los legionarios" de la prensa oficial que ya reclaman sobre sus espaldas el látigo bíblico para desalojar el templo de mercaderes indeseables.

El "Zarzal Guillén", ubicada en el municipio de Villa Nueva, de este departamento, es una de las ya innumerables fincas que han sufrido las acometidas de los encargados de la ejecución de la Ley de Reforma Agraria —Decreto 900 del Congreso. Esta propiedad de los hermanos Ernesto y Guillermo Lazo Rodezno, fue según acuerdo de 5 de febrero del año en curso, expropiada en una extensión de dos caballerías y veinte manzanas de conformidad con el expediente seguido para el efecto. Más es el caso que sin esperar a que de conformidad con la ley de la materia, se procediera a la mensura y acotación de la extensión que se consideró afectable, los denunciantes, siempre por el camino del abuso y del capricho, se posesionaron de hecho no sólo de lo que posiblemente habían de repartirles las autoridades, sino que sumaron una caballería más. Será necesario señalar la circuntsancia de que la caballería en tales condiciones usurpada a sus legítimos dueños, dá al lago de Amatitlán en cuyas playas abreba el ganado que integra el establo y la bien organizada lechería de esa raíz. Ante una actitud así, los propietarios de "Zarzal Guillén", hermanos Lazo Rodezno, han hecho urgentes y oportunas gestiones ante el Departamento Agrario Nacional, en donde se les ha ofrecido, *simplemente ofrecido*, mandar practicar las medidas ordenadas por la ley de la materia, sin que hasta la fecha haya sido posible que aquella simple promesa se convierta en realidad. Frente a nuevas gestiones de los interesados en el sentido antes indicado, se les manifiesta que se carece del equipo agrimensural que el caso reclama, y mientras y en tanto, los usurpadores realizan o hacen como que realizan personales siembras en propiedad detentada, y paralizan la maquinaria ya lista para cultivar esa extensión no afectable. ¿A quién responsabilizar de los delictuosos hechos señalados? ¿A los detentadores, a los Comités agrarios locales o al Departamento Agrario Nacional? Los que delinquen y quienes los toleran tienen necesariamente qué cargar con la responsabilidad de tales atropellos. La impunidad de que disfrutaron los "agraristas", los envalentona más cada día y ya se ha dado el caso en que realicen rozas en cafetales para convertir éstos en milperíos, y no faltará revolucionario que proclame la excelencia de un cambio así y sostenga que debe desaparecer el cultivo del café,

porque el grano de oro va a parar a los asquerosos mercados imperialistas. Cosas de la Revoución y de los que se llaman revolucionarios...

La Asociación General de Agricultores en la patriótica campaña que se ha impuesto frente al progreso cada vez más creciente de los atropellos cometidos contra la propiedad particular y contra el agro en general, en venideras notas habrá de señalar en qué consisten las transgresiones legales cometidas de consuno por el campesinado agrarista y los elementos subalternos de los organismos agrarios y no pierde la esperanza de que alguna vez y en algún caso sus prudentes y oportunas advertencias no caigan en el vacío.

Guatemala, 23 de mayo de 1953.

Paladino Reconocimiento de que ha Habido Tierras Usurpadas

Mientras la prensa local registra casos como el de un hijo que entabla demanda laboral contra su padre, viejo campesino que ha encallecido sus manos sobre el surco, requiriéndolo de salarios retenidos por un tiempo de treinta años o más. Mientras la misma prensa reproduce las insinuaciones de una posible Ley de Reforma Urbana, para rematar dignamente la Ley de Reforma Agraria, y así, desplazar a los "señores feudales", negándoles cabida en el campo y en la ciudad. Mientras se dá el caso, según informaciones servidas por la prensa hablada, sobre que el Presidente de una de las comisiones del Congreso, y expresidente del mismo, en unión de varios diputados y haciéndose acompañar ¡oh sarcasmo! por el actual Presidente del Organismo Judicial, se apersonaron en una casa de habitación que de antemano sabían iba a ser desocupada de orden de juez competente, para manifestar el primero de los indicados, que eso no ocurriría, pues que se trataba de una sentencia proferida por un juez venal (claro que el Presidente del Organismo Judicial ha de haber oído esta grave acusación), agregando a una de las inquilinas que a la hora señalada para el día siguiente en que debía ejecutarse el fallo, estarían ahí presentes para evitarlo a "como diera lugar". Naturalmente que tales sucesos sólo pueden ocurrir en un lugar en donde se perforan las columnas de un templo hecho de "bajareque", para dinamitarlo luego.

Mientras todo esto ocurre, boletines de prensa anuncian que por órdenes e instrucciones turnadas por los Organismos Centrales Agrarios, varias de las parcelas *usurpadas* por los "Agraristas" con el respaldo de las autoridades agrarias subalternas, serán devueltas, a sus legítimos dueños. Esta noticia ha causado a la Asociación General de Agricultores un justificado beneplácito por dos razones: porque ello, aunque sea en mínima parte, es reconocer el imperio de la ley, y porque, y esto deben de leerlo los enanos de corrompida estirpe moral en manos de quienes está la prensa oficial, se llega a la conclusión clara y terminante de que cuando nuestra institución procediera a hacer denuncias sobre usurpaciones y atropellos cometidos en la zona oriental de la república, lo ha hecho sobre datos irrefutables, y dentro del más sincero propósito patriótico de que tales procederes que enmarcan en los capítulos del Código Penal fueran frenados por los funcionarios y autoridades superiores.

Cuando la Asociación General de Agricultores afirmó que en varias fincas de la zona oriental de la República los potreros habían sido pasto de las llamas diabólicas del fuego agrarista, y que los ganados deambulaban por los caminos en busca de pastos y de abrevaderos, fué coléricamente estigmatizada como reaccionaria y opositora del régimen a través de las leyes revolucionarias que éste emitía. Estima la Asociación General de Agricultores que frente al paladino reconocimiento hecho por las autoridades respectivas de que serán devueltas las tierras usurpadas sin indicar, desde luego, que los delincuentes serán sancionados, la Justificación de su actitud es plena, tanto más si se advierte que nuestra entidad con la honradez que le abona, siempre estuvo pronta para pedir al poder público en forma enérgica y oportuna que se hiciera sentir su intervención para detener la ola de crimen y de terror ocasionada por las huestes "agraristas".

No llega tarde quien llega, y más vale tarde que nunca reza el refran y si la rectificación anunciada es el indicio de venideras y urgentes rectificaciones, y por igual el principio de que ya se piensa salir al paso del capricho revolucionario convertido en ley, la Asociación General de Agricultores se sentirá más que satisfecha de su misión cumplida, pues que en la campaña emprendida en defensa del agro nacional contra los intereses bastardos de los círculos políticos comunistoides, sólo ha tenido una mira: el bienestar nacional, bienestar seriamente alterado por los crímenes y atropellos cometidos con ocasión de la aplicación

del Decreto 900 del Congreso —Ley de Reforma Agraria—. Es así como nuestra campaña puede calificarse, sin eufemismos, de eminentemente nacionalista, ya que las ambiciones de nuestra entidad no van más allá de la defensa legítima de los hombres del campo a cuya iniciativa y energía se debe en la mejor parte la riqueza del país. En esa defensa hemos señalado a más de los notorios vicios de inconstitucionalidad de que adolece el Decreto 900 del Congreso, que ya es una ley que obliga a todos los habitantes, que éste sea, cuando menos, aplicado según sus preceptos, pero que no se le convierta en arma política para ahondar más una lucha fratricida, y cumplir así con las consignas de exterminio del imperialismo moscovita a cuyo carro figuran uncidos los accionistas de la conocida firma “Gutiérrez Fortuny y Co. Sociedad de irresponsabilidad ilimitada”.

Guatemala, 30 de mayo de 1953.

Nuevos Procedimientos de Usurpación

Según informes veraces que a la Asociación General de Agricultores han sido reportados en fechas recientes, en más de una propiedad particular los “agraristas”, que como es sabido constituyen el comunismo criollo entre el campesinado, están empleando un nuevo procedimiento ilegal para que el daño que se ocasione a los “terratenientes feudales” con la aplicación del decreto 900 del Congreso, sea de más entidad. Helo aquí: hecha la denuncia de las tierras afectables por la Ley de Reforma Agraria, y terminado el trámite de los expedientes respectivos, se dictan los acuerdos por los que se ordenan las expropiaciones consiguientes en la extensión y sitio de las tierras que resultan afectables. Como es natural, y en consonancia con la ley de la materia, debería procederse luego a la acotación y mensura de lo expropiado, pero es el caso que los organismos agrarios carecen del necesario equipo agrimensural para realizar tales operaciones, y mientras ello no ocurre, los “agraristas” contando siempre con el respaldo irrestricto de los líderes comunistas y de las federaciones campesinas, sobre la finca que ya ha sido expropiada en lo afectable, hacen nuevas denuncias, y so pretexto de “arrendamientos forzosos”, se posesionan de nuevas extensiones ya listas para ser cultivadas, extensiones que por otra parte están al margen de toda afec-

tabilidad. En otras palabras, y de seguir adelante con tal procedimiento anómalo e ilegal, los “terratenientes feudales” serán expropiados en sucesivos “sustos”, hasta dejarlos sin un palmo de tierra, y sin siquiera el consuelo de encontrar refugio en la capital, endonde ya corren aires de reforma urbana. Ahora bien, ¿hay alguna provisión en la Ley de Reforma Agraria que autorice esta nueva forma de despojos? ¿Con qué fundamento legal los “agraristas” se adueñan de tierras de ajena pertenencia, las que cabe obligadamente considerar como no afectables, toda vez que ya han sufrido los rigores del edcreto 900 del Congreso? La ley de la materia niega la posibilidad de actos de la naturaleza de los apuntados; y los órganos agrarios que no ponen coto a esos actos atentatorios, se responsabilizan sin lugar a dudas por los daños irrogados en la propiedades particulares.

¿De qué sirven posturas como las adoptadas últimamente por el Ministro de Economía para conjurar la grave crisis de carne, si es notorio que las pocas haciendas de ganado están siendo destruidas y sus ganados repartidos entre las masas campesinas, cuando no han sido pastos de las llamas en los múltiples potreros incendiados? No es posible hablar de prometedoras cosechas cuando los campesinos son desposeídos a diario por los “agraristas” de tierras preparadas para la siembra, a costa de personales esfuerzos y quién sabe de cuántos sacrificios económicos, como ha estado ocurriendo últimamente en Barberena, del departamento de Santa Rosa. En estas feraces tierras del oriente de la república, denominadas La Cotorrera, El Potrero, Monterroso y Loma del Pino, han sido repartidas entre militares las tierras, sin que éstos las hubieran denunciado, y sin respetar los derechos de los arrendatarios, todos agricultores que las vienen trabajando desde hace más de veinte años y las habían denunciado de conformidad con la ley, en septiembre del año retropróximo. Y esto que ocurre en Barberena está ocurriendo en todo el país, y entonces sólo por suma insensatez pueden hacerse predicciones favorables en torno de cosechas venideras.

Como en la infantil adivinanza: “leyes van y leyes vienen y en el aire se detienen...” Así la recomendación o instrucciones de los funcionarios del Departamento Agrario Nacional hacia sus órganos subalternos, van y vienen y en la nada se detienen; y ante esta evidencia, la ciudadanía se pregunta: ¿Pero es que en realidad en los distintos sectores de la administración se ha perdido ese “imperio”

(poder), atributo sin el que no es **dable** concebir organización política alguna encargada del manejo de la cosa pública? ¿Cuál es entonces el papel de esas autoridades sin autoridad? La verdad es que resulta un papel más que deslucido, nulo. Y quien habla de las circulares y órdenes de las autoridades agrarias constantemente desobedecidas, puede igualmente hablar de las autoridades judiciales, cuyas sentencias proferidas dentro de los cánones legales son enervadas por cualquier líder de izquierda con el disfraz demagógico de diputado, y quien públicamente se opone a su cumplimiento. Y pensar que una actitud así es a todas luces punible, y que no hay juez que levante un "por cuanto", y consigne ante los tribunales al transgresor... En casos así, también la ciudadanía tendrá obligadamente qué preguntarse ¿cuál es el papel de los jueces y magistrados que permanecen al margen de la dignidad de sus puestos, tolerando tales atropellos? Papel digno del más completo repudio, desde luego. Ante un estado de anarquía tal, resulta grotesco proclamar que la Revolución de Octubre dió por tierra con el régimen de oprobio de la tiranía de los catorce años. Resultan bufas en labios de los que se dicen revolucionarios las palabras de Justicia y Ley, escarnecidas a diario por funcionarios administrativos y judiciales de alta o baja jerarquía. Y pensar que hay quién tuviera fe en el ideario de la revolución, y que todavía, dueño de esa fe patriótica, crea en posibles actos de conversión y espera, ingenuamente, que tales actos se anuncien sobre los turbios nubarrones de nuestra vida institucional...! Gente bien intencionada, sin duda, la de tal parecer; pero como las buenas intenciones desafortunadamente no llevan a seguro puerto, esas gentes se quedarán esperando, mientras el desastre consume, y los que se dicen revolucionarios arremeten contra los últimos principios de justicia, y juegan a la francachela sobre los ropajes de la Patria.

Guatemala, 6 de junio de 1953.

El Funesto Acridio Revolucionario

El acridio político, más devastador que cuantas plagas se hayan conocido, desde las legendarias de Egipto, hasta las últimamente aparecidas en estos históricos días revolucionarios por los que discurrimos, después de asolar campos en los que en breve no habrá de encontrarse más que la huella trágica de su voracidad, mueve sus manchas sobre el res-

to de la economía nacional para posarse sobre los ya raquí-
ticos campos de nuestras riquezas. Estos son, al menos, los
anuncios hechos en el seno del Congreso de la República
por los políticos *revolucionarios*, tratando de reformar el
Código de Trabajo para dejar más amplio margen a las
huelgas, y dar así el golpe de gracia a nuestras incipientes
industrias. Esto es lo que ya se ha insinuado en el Con-
greso Nacional, cuando la representación *comunista revo-*
lucionaria ha presagiado no sólo la posibilidad, sino la nece-
sidad de elaborar una ley de urbanismo análoga a la Ley de
Reforma Agraria, y que como ésta permita la fácil expro-
piación de los “casa-tenientes feudales”; y algo más: otra
disposición en igual sentido que permita a los inquilinos vi-
vir en propiedades ajenas sin pago de renta alguna, y sin
que por esta circunstancia puedan ser desalojados de esas
propiedades. De esto último, y antes de que cualquier dis-
posición legal hubiese sido emitida, se han dado las muestras
más elocuentes y bochornosas por varios diputados, quienes
ya han repetido la hazaña de oponerse al cumplimiento de
sentencias legítimamente proferidas en las que se han or-
denado desahucios.

Y si no fuera suficiente todo ello para dar al traste con
nuestra vida económica e institucional, los bajos fondos son
removidos por los mismos políticos en pleno Congreso, y la
tufarada de la podre da una como sensación de náusea. En
efecto: Con ocasión del último movimiento encaminado a
reformar el Decreto 900 del Congreso, Ley de Reforma Agra-
ria, los partidos de la revolución han puesto de manifiesto
que en torno a esa pretendida reforma hay un fondo polí-
tico innegable y se han hecho mutuas incriminaciones ver-
daderamente penosas. Uno de los diputados expuso, sobre
poco más o menos, que la Ley de Reforma Agraria no ha
rendido ningún provecho apreciable, y que del año que lle-
va de haber sido emitida, es público que su mala aplicación
por parte de las autoridades agrarias y de los líderes de las
confederaciones campesinas, está sembrando el luto y el
odio entre la familia guatemalteca. Tales expresiones tie-
nen el natural respaldo de los hechos constantemente denun-
ciados por la Asociación General de Agricultores.

Entre las reformas que se encuentran ya en marcha en
el seno del Congreso figura una enmienda al Decreto 900
—Ley de Reforma Agraria—, enviada por el señor Minis-
tro de Economía. Tal enmienda consiste en que el Decreto
900 en su artículo 6o. debe quedar así: “El monto de la
indemnización será fijado con base en la declaración de la

matrícula fiscal de bienes rústicos o de la cantidad que aparezca en el Registro de la Propiedad Inmueble, la suma que sea más baja de las dos, tal como se encuentren al 9 de mayo de 1952, y se pagará proporcionalmente a la extensión de tierra expropiada. En caso de que el inmueble carezca de la declaración fiscal, la indemnización será calculada de acuerdo con el promedio del valor declarado en la matrícula fiscal o inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble, el que sea más bajo de los terrenos colindantes o cercanos". Como se vé, la enmienda propuesta por el titular de Economía resulta confusa, y sobre ser confusa con menoscabo notorio para los expropiados que han resultado y habrán de resultar afectados por la Ley de Reforma Agraria. El decreto 900 del Congreso es suficientemente claro sobre el particular, y así, si el afectado tiene por razón de una propiedad una declaración fiscal de X cantidad de quetzales hasta el nueve de mayo de mil novecientos cincuenta y dos, tal cantidad habrá de servir para indemnizarlo proporcionalmente a la tierra expropiada. Pretender que pudieran fraguarse maniobras en relación con elevar el monto declarado en la matrícula con el evidente propósito de recibir mayor cantidad de "bonos agrarios" en pago, resulta de una infantil puerilidad, ya que, si bien se vé, los tales bonos agrarios no son otra cosa que una simple *promesa de pago* nada codiciable por cierto, y si por su parte, el Decreto 900 fija de modo expreso una fecha a partir de la cual debe ser tomada como base de indemnización la declaración de la matrícula fiscal, es porque ya el legislador tuvo en cuenta salir al paso de cualquier fraude que pudiera realizarse con elevar la matrícula una vez emitida la Ley de Reforma Agraria. La aparente razón que el Ministro de Economía parece tener para la proposición de una enmienda confusa y que perjudica lesionando los derechos adquiridos, es la de que se ha dicho que algunos propietarios de fincas tenían el propósito de revaluar sus propiedades con el objeto de obtener mayores beneficios de indemnización en caso de ser expropiados. Pero si, como repetimos, ya el Decreto 900 en forma clara, expresa y terminante, fija que la declaración fiscal que habrá de servir como base de indemnización es la que figure al 9 de mayo de 1952, resulta inexplicable tanto la actitud posible de tales propietarios pretendiendo elevar sus declaraciones, como la medida propuesta, que para el caso resulta baldía y de notoria puerilidad.

Mientras el vaivén de reformas se agita en el seno de la representación nacional, en tierras de oriente ha habido

serios choques entre **parcelarios** que defienden sus heredas, y “**agraristas**” que por las vías de hecho tratan de usurpárselas, y contra esta actitud “**agrarista**” no cabe esperar enmienda ni reforma alguna, pues que, a juzgar por los hechos, cuentan con el franco beneplácito de funcionarios y autoridades de la Reforma Agraria.

Guatemala, 12 de junio de 1953.

A más Hechos Sangrientos, más Llenidad en las Autoridades

Hace apenas algunos días que la noticia fue servida por la prensa diaria local: en el Valle de Dolores y Agua Zarca, jurisdicción de San Jacinto, del departamento oriental de la República, Chiquimula, se registraron hechos verdaderamente lamentables entre “agraristas”, terratenientes y autoridades locales del propio lugar. ¿Cuál es el origen de esos desgraciados sucesos, de cuyo saldo sangriento —varios macheteados y algunos bárbaramente lapidados—, epílogo doloroso, conoció el hospital de la cabecera? La inaplicación de la Ley de Reforma Agraria. Al decir INAPLICACION debe entenderse que deseamos significar que el origen de este último reciente desastre, radica en que en vez de acatar y dar cumplimiento a los preceptos contenidos en el Decreto 900 del Congreso, los “agraristas”, con el respaldo cada vez más reciente de las federaciones campesinas que tienen pleno dominio sobre los órganos agrarios subalternos, cometen toda suerte de tropelías contra la propiedad privada y contra sus propios dueños. Siempre al margen de los preceptos de esa ley que regula la materia, invaden pequeñas y grandes propiedades, posesionándose, ante sí, y por sí, y en forma por demás delictiva y caprichosa, de lo que es de ajena pertenencia. Las informaciones publicadas sobre el penoso y trágico zafarrancho acaecido en San Jacinto, no han sido desmentidas en forma alguna, ni en forma alguna se tiene conocimiento sobre que las autoridades centrales hayan dictado las medidas represivas que el serio caso demanda, ni menos las de carácter preventivo que la prudencia y el buen sentido aconsejan en defensa de la tranquilidad pública; obligadas medidas cuando se trata de un gobierno de orden que no soslaya el imperativo de sus deberes.

¿El origen del zafarrancho de San Jacinto? La Asociación General de Agricultores ya ha contestado esta interrogación en más de una oportunidad, y en todos los tonos y formas que ha estimado debe ser contestada. Estos brutos acusadores de una guerra civil en marcha, ya lo hemos dicho, se origina en la forma torpe y políticamente interesada en la aplicación del Decreto 900 del Congreso. Al respecto, y en el mismo seno de la que debiera ser nuestra representación nacional se han hecho las más graves y mutuas inculpaciones los diputados pertenecientes a los grupos "revolucionarios". Algo más: uno de los más prominentes líderes de la Confederación Nacional Campesina ha hecho pública acusación contra uno de los ministros de Estado, también dirigente máximo de una entidad política "revolucionaria", de estar extendiendo a favor de los militantes de su partido considerable número de licencias para portar armas, habiendo sido otorgadas tales licencias entre los líderes y masas campesinas del departamento de Jalapa, que como es sabido está vecino al de Chiquimula, teatro de los acontecimientos de San Jacinto, y uno de los que con más furia ha sufrido el azote "agravista". No quedan ahí las acusaciones hechas en el seno de la Confederación Campesina. El dirigente, y ya famoso líder, Leonardo Castlilo Flores, reveló en forma clara y enfática la intervención de dos de los diputados en el ofrecimiento de licencias de portación de armas, ofreciéndolas personalmente entre líderes y masas campesinas de Jalapa.

Ya es tiempo que las autoridades agrarias, en vista de que sus órdenes y circulares encaminadas a poner freno en este desconcierto en el que cada quien hace lo que le viene en gana, son echadas a la canasta, tomen una actitud como la de cierto juez perteneciente a los Tribunales de Trabajo: la de renunciar. Frente a la desobediencia de quienes deben de obedecer, y frente a la absoluta falta de fuerza y poder para hacer respetar y cumplir sus órdenes, lo indicado, lo obligado por un elemental adarme de dignidad, es la renuncia. Si hay en realidad un honrado propósito de poner coto a esa actitud cada vez más atentatoria contra la propiedad privada y contra los mismos propietarios, y los encargados de llevar adelante son de todo punto incapaces, debe de exigírseles su renuncia, ya que su incapacidad llega a extremos de no presentarla ellos ante su franco y notorio fracaso. Recordamos que frente a la unánime repulsa hecha a los actos cometidos por los organismos subalternos de la Reforma Agraria; frente a la barbarie que toma.

ba cuerpo en forma de "agrarristas"; frente a la ola de terror y de crimen el jefe del Departamento Agrario Nacional, hizo más de una promesa en el sentido de poner coto al abuso, la detentación y el asalto, pero esa consoladora promesa quedó en lo que tenía que quedar: en que momentáneamente se suspendió la actividad criminal de los "agrarristas", para iniciarse luego con más ímpetu ante la falta de represión de las autoridades y funcionarios competentes.

A la vista como quien dice, del propio jefe del Departamento Agrario: en las goteras de la capital, los asaltos y atropellos de los "agrarristas" se suceden, ante la pasividad punible de las autoridades, uno de cuyos ejemplos lo constituyen recientes sucesos desarrollados en jurisdicción de Chinautla, de este departamento, en donde la propiedad de don Mercedes Hernández Revolorio fue invadida por las hordas "agrarristas" rompiendo cercas y después de haber echado fuera crecido número de cabezas de ganado vacuno y caballar, prendieron fuego a los potreros, con acompañamiento de tala de bosques y otras graciosas atrocidades agrario-comunistas-revolucionarias.

Guatemala, 20 de junio de 1953.

A un Año del 900

Habiendo advenido en estos días el primer aniversario de la promulgación del Decreto 900, parece oportuno hacer una revisión de los resultados concretos que se vienen palpando con tal motivo, en este primer ciclo anual de vigencia de la Ley de Reforma Agraria, ya que en occidente, tanto o más que en el resto de la República, es causa de honda preocupación e inquietud, el curso que hayan de seguir las alteraciones que en el régimen de tenencia de la tierra se están imponiendo, no sólo por lá interpretación ad libitum que dan a esa ley las autoridades agrarias, sino —lo que es peor— por las devastadoras tácticas de atropellos y violencias que, a pretexto de la Reforma Agraria, pero pisoteando los preceptos legales, se vienen cometiendo impunemente, a instigación de las camarillas comunistas que se han adueñado de la dirección de las masas rurales inconscientes.

Desde luego, se ha confirmado plenamente que toda aquella fanfarria con que se prometía el mejoramiento económico-social del campesinado, al progreso de la producción agrícola, el desarrollo de la economía capitalista campesina

y el fortalecimiento de la economía capitalista de la agricultura en general, de que hace mención el Artículo 3.º de la Ley Agraria, han sido simples sueños de la propaganda interesada, espejismos engañosos sin consistencia alguna.

Las finalidades efectivas que en la práctica se han puesto en evidencia, resultan muy otras, son de orden netamente político: enrolar a los campesinos alucinados por esa propaganda en las filas de los partidos oficiales, principalmente en las del comunismo preponderante, y debilitar a los sectores que por no depender económica ni políticamente del oficialismo, se supone no rinden acatamiento incondicional a las normas poco edificantes que vienen marcando una trayectoria desorbitada en el manejo de la cosa pública.

De esta manera, la transformación de nuestro régimen agrario, iniciada con la emisión del Decreto 900, ha venido perturbando desastrosamente las actividades de nuestra producción agropecuaria desde dos ángulos diferentes.

De una parte, a través de la aplicación misma de esa inconsulta Reforma Agraria, ajustándose en algunos casos a la letra de sus preceptos, pero en otros —los más— interpretándolos arbitraria y despóticamente. Como corolario de tan pernicioso desenvolvimiento, han sufrido grave menoscabo las garantías que nuestra Constitución establece para proteger la libertad, la vida, los bienes y la seguridad de los habitantes. Quedó nulificado el valioso recurso de amparo contenido en una ley constitutiva, como cristalización del justo anhelo de la ciudadanía de contar con un medio eficaz para frenar y corregir los abusos del poder público. Y se quebrantó la preciada autonomía del Organismo Judicial, cuya independencia y respeto son de capital importancia para realizar la deseable vida institucional en un Estado de derecho, y para que al amparo de ese elemento tutelar, la convivencia social se desarrolle en forma ordenada, armónica y fructífera.

De otra parte, enfrentamos los condenables actos de violencia perpetrados por las hordas que obedecen a los líderes marxistas, quienes invocando la Reforma Agraria, pero haciendo caso omiso de las prescripciones legales dictadas para el efecto, tienden a la desorganización y ruina de las empresas agrícolas sin distinción de que sea grande o pequeña su magnitud. Se ha observado generalmente pasividad por parte de las autoridades llamadas a reprimir y sancionar esos procedimientos atentatorios, y cuando algu-

na vez se han decidido al fin a requerir el cumplimiento y respeto de los preceptos legales, tales amonestaciones han sido menospreciadas y continuaron los atropellos, desacatando abiertamente el principio de autoridad. Esos desmanes que provocaron numerosos choques sangrientos entre los propios campesinos, con dolorosos saldos de víctimas, de encarcelados y con el despojo de incontables bienes rurales, han dejado una aflictiva secuela de odios, de desconcierto, de irreparables pérdidas y de abatimiento de la producción agropecuaria. Una de tantas funestas consecuencias de tal desbarajuste se está palpando en la escasez y encarecimiento del ganado y de los artículos de primera necesidad.

Mientras tanto, después de haber parcelado muchos millares de manzanas de tierra arrebatadas a sus legítimos propietarios, gran parte de ellas inafectables por la expropiación conforme al texto de la propia Ley de Reforma Agraria, no se ha constituido formalmente nuevos pequeños propietarios con lotes de terrenos asignados en propiedad definitiva y transmisible. No se ha tenido en cuenta que a fin de que el pequeño empresario rural trabaje y cuide su tierra con verdadero empeño y cariño, es indispensable que la adquiera en propiedad plena, y para dignificar su labor no se debe proceder en la forma de proporcionársela en simple y precario usufructo, a cambio de someterse ciegamente a los dictados de los líderes demagógicos o de los caciques políticos. Preservando su independencia económica y su libertad de ideología, ha de obtener su tierra por compra, si bien a precio módico y con facilidades de pago y cumplir el compromiso que contraiga para esa adquisición, mediante su propio esfuerzo avalorado por la sobriedad, la previsión y el espíritu de ahorro. Ese pequeño terrateniente será entonces un elemento útil a su patria, un ciudadano digno, devoto de la libertad y poco susceptible de ser inducido a engaño por los falsos redentores o los logreros políticos. Si se le imbuje el auténtico civismo, será un factor de progreso y defensor del orden social.

Pero con la manifiesta insinceridad de la mal concebida Reforma Agraria que acá se ha puesto en marcha, no es eso lo que se ha buscado, sino la absorción del campesinado por los partidos oficiales, con la mira de utilizarlo como ciego instrumento de finalidades políticas que para nada tienen en cuenta las supremas y genuinas conveniencias nacionales.

Arrastrados por esta funesta trayectoria hemos llegado fatalmente a una aflictiva crisis económica cuyos efectos son, desgraciadamente, harto palpables y no están sujetos a la apreciación de partidarios o de opositores, sino que por su propia materialidad pueden ser comprobados por todo aquel que no sea ciego o sordo o no sea víctima de una extrema ofuscación partidista. Experimentan quebranto grave al comercio, la industria y la agricultura. Se sufre mucho por la contracción del crédito. Ha bajado sensiblemente el poder adquisitivo de nuestra moneda, porque ha sobrevenido un enorme encarecimiento de todos los artículos necesarios. Y en estos precisos momentos se infla más que nunca el presupuesto nacional de gastos, con su correlativa exigencia de aumento de ingresos que significa abrumarnos con nuevos o mayores impuestos. Ha surgido y se agrava rápidamente el problema de la desocupación.

Todo ello exige procurar con urgencia remedio a semejante situación que si no ha tomado aún visos de desastre general, se debe a que la economía está siendo apuntalada todavía por los recursos que proporciona la industria cafetalera, gracias a la temporal buena cotización de sus productos. Pero una baja, por desgracia bastante previsible de sus precios, nos colocaría en una situación por todos conceptos pavorosa.

Urge rectificar. Hoy por hoy, el principio fundamental consistente en emancipar la economía de la demagogia que, prometiendo liberación conduce más bien a la esclavitud, y aunque ofrezca bonanzas sólo puede generar miseria general. La riqueza se finca en el trabajo en conjunción armónica en el ahorro, en la técnica, en el orden. La distribución equitativa en la justicia recta y autónoma. La cohesión nacional en el patriotismo auténtico. Y quien pretenda desviarse de estos principios básicos e inmutables, ocasiona irreparables daños a su patria, a sus compatriotas y en fin de cuentas a sí mismo.

—Publicado en el número Aniversario de Correo de Occidente de 2 de julio de 1953.

Obstáculos a la Defensa Profesional en Materia Agraria

La actitud agresiva de las autoridades agrarias contra todos aquellos que en alguna forma tratan de poner a salvo sus heredades, ha sido constante a través del año de experiencia revolucionaria encomendadas a las federaciones cam-

pesinas y a los líderes rojos que jefean el sindicalismo criollo. Cuando el campesinado de la República, en mínimas treguas, se dá a la cábala de esperar el cumplimiento de rectificaciones prometidas por los organismos máximos agrarios, de pronto, nuevos sobresaltos los hacen víctimas de temerosas inquietudes, eslabonando a la cadena de depredaciones, asaltos, atropellos, y nuevos actos delictivos; y siguen esperando angustiados lo que Dios decida ante las últimas amenazas hechas por el Departamento Agrario Nacional, pues que de ello se viene a la cuenta de que a la postre ya no contarán o podrán contar con el auxilio profesional para defenderse y defender lo suyo. En efecto el Departamento Agrario Nacional ha anunciado que aplicará sanciones económicas que oscilan entre cien y dos mil quetzales a todos aquellos profesionales al servicio de los terratenientes "feudales" que con falsedades o simulaciones (¿?) traten de evadir la correcta aplicación de Ley de Reforma Agraria. ¿Pero es que realmente podrá aceptarse como valedera la afirmación de que siquiera en el uno por ciento de los casos que se han presentado dentro de la aplicación del Decreto 900 del Congreso, éste cuerpo de leyes ha sido aplicado en forma correcta?

¿Podrán los organismos agrarios negar a estas alturas que lo que menos se ha hecho con la Ley de Reforma Agraria es aplicarla, y que por el contrario, al amparo de su aplicación se han cometido toda clase de desafueros, injusticias e iniquidades? ¿Por qué el Departamento Agrario Nacional en vez de amenazar a los profesionales que simplemente cumplen con su deber, no encarcela, o por mejor decir, no sujeta al abligado procedimiento criminal a tanto agitador constituido en azote de la gente del agro? Las denuncias hechas en este último sentido por la Asociación General de Agricultores no han podido ser más claras, y sin embargo estos *profesionales* del delito, al servicio de consignas extrañas, se trasladan de uno a otro punto del territorio nacional alardeando impunidad.

Ancianos, mujeres, niños, toda gente indefensa, nada detiene la voracidad de las masas "agraristas". El caso de una mujer propietaria de un lote de escasas veinticinco cuerdas de tierra en la aldea La Laguna, municipio de Cabañas, departamento de Zacapa, da la mentalidad de esta gente maleante.

Relata la protagonista que es mujer sola, y madre de un menor de siete años de edad, y que por quebrantos de salud de su hijo, decidió cambiar de clima, abandonando su

tierra natal, para venirse a ésta, entre otros propósitos, y como la pequeña parcela no le diera el rendimiento necesario para atender a su menor, dice se vino en busca de trabajo, dejando su parcela de La Laguna debidamente cultivada con caña de azúcar, plátanos, yucas, tomates, etcétera, etcétera, de esa suerte, tenía cultivadas veinticuatro de las veinticinco cuerdas que posee, y parece que las cosechas habrían sido de lo más favorable. Pues bien: cuando menos se esperaba, un grupo de miembros del PRG hizo solicitud al Comité Agrario de la localidad en el sentido de que se abriera un "callejón" a través del pequeño terreno, y el desastre no se hizo esperar: el "callejón", sin más trámites, fue abierto, y fue entonces la devastación casi completa de las siembras, en forma injusta e ilegítima, y todo originado, según explica la damnificada, por componendas políticas de los líderes PRG. La dolida y desamparada mujer piensa que muchos de los casos como el suyo podrían evitarse con sólo que el DAN hiciera recaer los nombramientos de los integrantes de los comités locales agrarios en personas honradas, y no solo en líderes de los partidos políticos. Esto es lo que ingenuamente piensa la atribulada mujer, porque ignora que ya ni siquiera el DAN podrá hacer tales designaciones, pues de conformidad con las últimas reformas pasadas en el Congreso al Decreto 900, ahora serán los líderes de los distintos grupos "revolucionarios" los que nombren a quienes deben de integrar los comités agrarios locales. ¿Que con tal actitud se acusa una posible desconfianza hacia los máximos dirigentes de los Organismos Agrarios en las personas del presidente de la República y jefe del Departamento Agrario Nacional? Nada importa, si con ello se satisfacen con más violencia y menos responsabilidad, las consignas internacionales.

Cuesta en verdad creer que existan guatemaltecos en quienes el respeto a la ley es negativo, y cuesta más tener que aceptar que haya guatemaltecos en número considerable, en quienes el sentido de piedad ha desaparecido sin dejar la más leve huella...

Guatemala, 14 de Julio de 1953.

La Asociación General de Agricultores Centinela de los Intereses Agrícolas

Es una verdad inconclusa que en Guatemala existe una estrecha interdependencia entre la agricultura y la eco-

nomía general del país. Esta alcanza situación bonancible UNICAMENTE cuando rodean a la agricultura condiciones propicias para asegurarle razonable grado de provecho y prosperidad, puesto que ella es la fuente primaria creadora de riqueza o sea del poder adquisitivo que alimenta a las demás actividades económicas y hace afluir al Fisco las rentas que necesita para financiar los cervicios estatales y el progreso del país.

El propio sistema monetario depende esencialmente de la producción agropecuaria que con el valor de sus exportaciones mantiene en equilibrio favorable la balanza de pagos y contribuye así a la estabilidad del valor de nuestra medida de cambio, el quetzal, siendo evidente que si decayeran los precios o el volumen de nuestras cosechas exportables, llegaríamos a vernos en déficit de divisas extranjeras y peligraría la actual paridad de nuestra moneda. Así también, si las cosechas son deficientes o no rinden una justa ganancia, fatalmente sobreviene la depresión económica local con el consiguiente malestar general en las diversas actividades y negocios.

Siendo de tan trascendental importancia para la vitalidad económica del país el proceso de nuestra producción agrícola, es deber imperativo del Estado rodearla de las mejores condiciones posibles para su desarrollo y progreso. Pero aun cuando así se reconoce con profusión de promesas en las campañas electorales, y así lo establece la propia Constitución, se ha descuidado lamentablemente el cumplimiento sincero de este precepto y de esas promesas. Generalmente, los gobiernos no prestan de motu proprio la debida atención para propiciar con medidas verdaderamente eficaces y oportunas la prosperidad de la agricultura. Antes bien, son pródigos para suscitarle obstáculos y condiciones adversas de toda clase, en tanto que, por otro lado están prontos a exigirle, a través de una continua imposición de nuevas cargas fiscales, los recursos destinados a cubrir presupuestos excesivamente inflados por el despilfarro, o los que realmente requiere el país para realizar los anhelos generales de mejoramiento y progreso.

En tal virtud, de mucho tiempo atrás, se sentía de más en más imperiosa, la necesidad de que una vigilante atención y el esfuerzo propulsor del desenvolvimiento y de la defensa de los intereses agrícolas, se organizaran y surgieran del seno mismo de ese laborioso gremio dedicado a la meritoria labor de hacer producir la tierra. Para ello era indispensable que los elementos aislados y dispersos se con-

pactaran en una entidad gremial, pues sólo asociando esfuerzos y capacidades se forja la potencialidad necesaria para realizar obra útil en beneficio general, y se fortalece el espíritu de cooperación constructiva para hacer frente a los problemas pertinentes y encontrar la mejor forma de resolverlos.

Durante mucho tiempo ese desideratum no encontró ambiente propicio para plasmar en una realidad tangible. En parte porque los frecuentes y prolongados eclipses de las libertades ciudadanas habían deprimido mucho el espíritu cívico y prevalecían entre los agricultores la apatía, el individualismo y la tendencia al aislamiento. En parte principal también, por el recelo y suspicacia con que en las esferas gubernativas se consideraba todo intento de organizar asociaciones independientes desligadas del oficialismo y de la politiquería.

Pero al fin al fenecer el régimen tiránico de Estrada Cabrera, derrumbado por un hermoso y arrollador movimiento general de liberación, alboreó en Guatemala una nueva era de civismo, de libertad y de afán reconstructivo, imperando el clima propicio para que cristalizara con éxito la iniciativa feliz de un selecto grupo que hizo un llamamiento a la compactación de los hombres del campo, y así quedó fundada el 8 de julio de 1920, la primera Asociación General de Agricultores de Guatemala con personería jurídica reconocida por el Estado.

Como quedó claramente establecido en sus estatutos, dicha entidad se declaró absolutamente apolítica, y ajena a toda mira egoísta, proclamando como sus fines esenciales el fomento y progreso de la agricultura como base del engrandecimiento nacional y la defensa en general de los intereses agrícolas, incluyendo el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores que colaboran en el magno proceso de la producción.

Su primera Junta Directiva quedó integrada así: Presidente, don Julio Samayoa Klée; Vicepresidente don Guillermo Rodríguez; vocales por su orden los señores: José Ernesto Zelaya, Ignacio G. Saravia, Salvador Falla, Daniel Rodríguez, Jorge Morales Urruela, José Goubaud, Juan F. Arrivillaga, Carlos J. Peret, Ramón Murga y José Rodríguez Benito.

Uno de los primeros problemas que le tocó abordar a esa Directiva fué el de la caótica situación que existía en lo concerniente al valor de nuestra medida de cambio, el peso billete de curso forzoso e irredimible, que, en tal con-

dición, estaba sujeto a fuertes y bruscas fluctuaciones, provocadas generalmente con miras de especulación, habiendo llegado a depreciarse nuestro signo monetario hasta el grado de cotizarse el dólar por sesenta y más pesos guatemaltecos. Infructuosos habían sido hasta entonces todos los reclamos y esfuerzos particulares por obtener que se pusiera orden en ese desbarajuste monetario, a través del cual no había modo de contar con una base fija de cálculo para los costos de producción y la financiación de los negocios. Pero era el gobierno mismo de los veintidós años el que contribuía al desorden, autorizando prolíficas emisiones de billetes sin respaldo metálico.

Bajo el nuevo régimen implantado en 1920, la Asociación de Agricultores cooperó eficazmente, en unión de la Cámara de Comercio, a que se estableciera la Oficina de Garantía Monetaria, con el fin esencial de estabilizar provisionalmente el valor de nuestra moneda y a constituir, con el impuesto creado al efecto sobre el café exportable, un fondo especial que permitiría más tarde llevar a cabo un plan completo de reorganización de nuestro sistema monetario, basado en el patrón oro y retornando a la convertibilidad.

Estos patrióticos postulados se plasmaron en el Decreto No. 1160 dictado por la Asamblea Legislativa el 29 de septiembre de 1921. Afortunadamente para la economía nacional los empeños de estos guatemaltecos que habían sentado las bases de una política que dotara al país de una moneda sólida y sana, no se perdieron al anularse posteriormente todos los decretos de aquel cuerpo legislador y así, el 14 de septiembre de 1923, se dictó por el nuevo régimen el Decreto Gubernativo No. 839 que restablece su vigencia, sustituyendo el nombre de "Oficina de Garantía Monetaria" por el de "Caja Reguladora", la que al cumplir los objetivos de su creación logró algunos años más tarde la implantación del sistema monetario actual cuya unidad es el quetzal en paridad con el dólar americano. Al efecto, se fundó el Banco Central, único emisor, cuyo capital se constituyó en gran parte con aportes de los agricultores, tanto mediante el pago del impuesto adicional establecido sobre el café de exportación, como por importantes inversiones de capital agrícola en acciones del Banco Central.

También entonces, la Asociación de Agricultores de Guatemala estudió a fondo la cuestión de utilizar las mieles de purga de los ingenios de azúcar en la fabricación de alcohol industrial, con la mira de usarlo principalmente co-

mo combustible económico de producción nacional en toda clase de motores de combustión interna. En ese sentido, hasta se inició la formación de una compañía industrial para emprender esa fabricación. Se truncó la realización de este plan, ya bastante adelantado, porque con el cambio brusco de régimen gubernativo sobrevenido por entonces, dejaron de ser emitidas las leyes pertinentes indispensables para ese efecto.

Mucho se trabajó igualmente, para obtener la aprobación de un proyecto de ley, fruto de detenidos estudios y deliberaciones en el seno de la Asociación y con el Ministerio de Agricultura, para reglamentar las relaciones entre patronos y trabajadores sobre bases de equidad y tomando debidamente en cuenta la realidad de las condiciones existentes en Guatemala en relación con los requerimientos del progreso de la agricultura. Asimismo se trató con mucho empeño de reprimir la vagancia y el alcoholismo.

En enero de 1927 ocurrió un cambio importante en la estructuración de la Asociación de Agricultores. Se habían ido formando diversas asociaciones regionales en las principales zonas agrícolas y defiriendo a sus deseos de tener una mayor ingerencia en las labores de interés general, se reformaron los estatutos y se organizó con el concurso de dichas asociaciones regionales la que se denominó entonces "Confederación de Asociaciones Agrícolas de la República", quedando siempre en actividad, como una asociación regional del centro, la "Asociación de Agricultores de Guatemala". Organó oficial de ambas entidades fué la "Revista Agrícola" de esmerada presentación y de selecto material de lectura, gracias a un numeroso cuerpo de colaboradores. Su primer número apareció el 15 de abril de 1928. Se había iniciado por entonces el régimen gubernativo del general Chacón y en vista de la saludable orientación de sus primeros actos de gobierno, concibieron los agricultores fundadas esperanzas de una mejor atención y apoyo para el ensanche y mejoramiento de la producción agrícola. Por eso en su editorial de presentación la mencionada "Revista Agrícola" quincenal, se expresaba así:

"Los tiempos han cambiado; a los gobiernos recelosos y autoritarios que cohibían toda iniciativa de mejora, particular o colectiva, ha sucedido otro en el que se perciben claramente sanas intenciones de estimular y apoyar todo esfuerzo honrado que tenga por propósito el mejoramiento, social y económico del país. Por eso sería una falta imperdonable contra el patriotismo y aún contra los pro-

pios intereses, la de no aprovechar estas circunstancias; la de cruzarnos de brazos y esperar que el gobierno aislado evolucione y nos haga evolucionar. No, debemos afrontar todos, en nuestras diversas esferas, nuestra cooperación bien intencionada. Es necesario externar nuestros sentimientos de satisfacción para la labor que los merezca, a la vez que recordar constantemente a los directores de la cosa pública los compromisos que tienen contraídos ante el Pueblo; la necesidad de garantías, de justicia eficiente y de manejo honrado en los negocios nacionales, como únicas bases sólidas para resolver crisis y evitar escollos a la prosperidad de la Nación. La publicación que hoy inicia su vida, tiene por tendencia la de ser reflejo de esta cooperación, en la que las asociaciones agrícolas se han enrolado de buena fe. El espíritu de asociación todavía está en génesis entre nosotros; sentimos la necesidad de compactarnos para el mejor logro de los ideales perseguidos, pero aún nos falta decisión y experiencia para encarrilar con pleno éxito nuestros trabajos hacia ese fin. Qué mejor medio para la adquisición más rápida de esa experiencia que el de dar a la publicidad nuestros actos y someterlos a la crítica depuradora que siempre enseña”.

Eran muchos los problemas que precisaba estudiar a fondo y resolver acertadamente para mejorar las condiciones de la agricultura en Guatemala: apreciación bien entendida de sus requerimientos de diversos órdenes; organización eficiente del trabajo y del crédito agrícola; conocimiento exacto de las necesidades de nuestros suelos; de las causas de enfermedades o del bajo rendimiento de nuestros cultivos y adquisición de experiencia en los métodos de combatirlas; mejor organización del mercado de los productos agropecuarios, teniendo como norma constante la libertad de comercio, de industria y de trabajo; rémoras que entorpecen el desarrollo y prosperidad de las diversas ramas de la ganadería, etc., etc. Estas y otras muchas cuestiones que afectaban a la agricultura enfrentaron por entonces la Confederación de Asociaciones Agrícolas y la Asociación de Agricultores de Guatemala, encontrando bien intencionada atención para sus gestiones en las dependencias oficiales, especialmente en el Ministerio de Agricultura desempeñado a la sazón por un competente agricultor miembro de la Confederación, don José María Solórzano, y después por don Manuel María Herrera de la Asociación de Agricultores de Guatemala.

Uno de los principales problemas al que dedicaron las

entidades agrícolas empeñosa y perseverante atención fué el de la organización del crédito agrícola. Como queda dicho antes, bajo el régimen del general Orellana, se había establecido el Banco Central, único emisor, con capital proveniente en su mayor parte de la economía agrícola, con el fondo acumulado en la Caja Reguladora producto de varios años de impuesto sobre el café de exportación y con los aportes invertidos en suscripción de acciones del Banco Central. El impuesto al café era fuerte y los tiempos no eran buenos para la industria cafetalera, recargada de débitos y gabelas y con las cotizaciones inciertas en los mercados extranjeros. Para justificar la nueva imposición se prometió el oro y el moño a los agricultores; con aquellos dineros se valorizaría y daría estabilidad a la moneda, y más tarde se fundaría un banco cuyo principal objeto sería el fomento de la producción. Ese gobierno no cumplió con sus promesas; pero tuvo buen cuidado de no levantarle a la industria cafetalera los impuestos extraordinarios con que la había gravado. No reclamaron los agricultores por la anomalía legal y financiera que se cometía, por las esperanzas que se fincaron en la fundación del Banco Central. Pero cuando éste entró en funciones fué profunda la decepción porque con ese banco todos se beneficiaron menos los agricultores. Ganaron los accionistas con un banco de excepcionales condiciones y privilegios; ganó el gobierno porque percibía buena parte de las utilidades del banco, ganaron los otros bancos que quedaron aliviados de su mala situación; ganó el comercio integrado en su mayor parte por extranjeros, todos ganaron menos los agricultores, porque desoyendo la opinión pública que clamaba por la protección de la agricultura, no parece sino que la ley monetaria y bancaria se hubiera empeñado en suscitarle estorbos y obstáculos continuos, hasta el punto de establecer la prohibición al Banco Central y demás bancos de depósito de hacer operaciones aseguradas con hipoteca, lo que equivalió a cerrar las puertas de las instituciones bancarias a los agricultores, quienes, como es bien sabido, fuera de los créditos refaccionarios, tienen que garantizar sus préstamos precisamente con sus propiedades, de lo que no es posible prescindir.

En tal situación, alentadas las instituciones agrícolas por la buena disposición mostrada en favor de la agricultura por el gobierno del general Chacón, trabajaron afanosamente porque se llegara a la creación de un verdadero Banco Agrícola Hipotecario, que respondiera como conve-

nía a las necesidades apremiantes de eficaz ayuda financiera a la agricultura, a base de crédito a largo plazo y bajo tipo de interés.

Al fin, después de múltiples gestiones y tras una perseverante labor dedicada a formar conciencia en pro de una institución bancaria de esa índole se llegó a ver convertida en realidad este sostenido requerimiento, con el decidido apoyo del entonces ministro de Hacienda, don Samuel Franco. De tal suerte, en septiembre de 1930 quedó constituido el Crédito Hipotecario Nacional con carácter estatal. De acuerdo con su Ley Orgánica, entraron a formar parte de su Junta Directiva en representación de la Confederación de Asociaciones Agrícolas, dos directores propietarios y dos suplentes; el director propietario Licenciado Guillermo Lavagnino, a la sazón Presidente de la Asociación de Agricultores de Guatemala, fué designado Vicepresidente de la Directiva del Crédito Hipotecario Nacional.

En marzo de 1931 la Confederación de Asociaciones Agrícolas hubo todavía de gestionar ante el general Ubico, llegado por entonces al poder, que no se llevara a la práctica una iniciativa sostenida por la prensa oficial, para que el Crédito Hipotecario fuera incorporado al Banco Central, fusión que, felizmente, fué desechada.

Bajo la Administración del general Ubico fué decayendo el espíritu de buena voluntad que para ayudar a la agricultura había demostrado el régimen anterior. Una vez más, la agricultura volvió a ser objeto de explotación desconsiderada de parte del oficialismo. Se le exigía el grueso de los recursos que el Estado necesitaba para vivir y para resolver los problemas vitales del país y sin embargo, se le escatimaba la ayuda indispensable para que estuviera en aptitud de proveer esos recursos sin agotar sus reservas orgánicas. De tal manera, los esfuerzos de las entidades agrícolas fueron quedando infructuosos en todo lo que dependiera de la buena voluntad de cooperación gubernativa, hasta llegar al inconcebible y funesto extremo de que el 25 de febrero de 1933 una disposición autocrática de dicho gobernante canceló la personería jurídica de la Confederación de Asociaciones Agrícolas de la República, imponiendo así el receso de sus actividades y cerrando el camino a la defensa pública de los intereses agrícolas, con enorme perjuicio para la buena marcha de la agricultura.

Al derrumbarse en junio de 1944 el régimen de los 14 años, advino para Guatemala, llena de promesas y espe-

ranzas, una nueva etapa de civismo y de vida libre de temor, que demostró lo que puede la unión general de voluntades y de energías, cuando se compactan resueltamente para abrir paso a la realización de un ideal y conquistar una vida mejor con la amplia vigencia de las libertades y derechos humanos.

Uno de los primeros efectos de esa vigorosa y alentadora recuperación de la libre iniciativa en las fuerzas vivas del país, fué el resurgimiento del espíritu de asociación de los elementos dedicados a la producción agrícola, base de la vida económica de Guatemala.

Con ese plausible estado de ánimo, respondiendo con entusiasmo al llamamiento que sin tardanza circuló al efecto, se reunió el 11 de julio de 1944 un gran número de agricultores y de inmediato se acordó que reasumiera sus funciones la Asociación General de Agricultores, como entidad representativa del gremio dedicado a cultivar la tierra y, en tal calidad, promotora del progreso de la agricultura y centinela siempre alerta para la defensa de los intereses agrícolas.

Se eligió una Junta Directiva provisional, presidida por el Licenciado Guillermo Lavagnino, último presidente de la Asociación recesada en 1933, y para regularizar la situación de la resurgida entidad, se sometió a la consideración del nuevo Gobierno de la República el proyecto de estatutos reformados, por los que debía regirse la Institución. Dichos estatutos fueron aprobados el 29 de noviembre de 1944 por la Junta Revolucionaria de Gobierno, quedando plenamente reconocida la personería jurídica de la nueva Asociación General de Agricultores. Reapareció entonces el "Boletín" órgano oficial de la Asociación, publicándose el N° 1 de la segunda época el 24 de noviembre de 1944.

La Junta Revolucionaria de Gobierno que asumió la dirección de los destinos nacionales a partir del 20 de octubre de 1944, y con la que colaboró como Ministro de Agricultura el connotado agricultor don Pedro G. Cofiño, patentizó buena disposición para impulsar eficazmente el desarrollo de la agricultura guatemalteca. Data de entonces la solicitud de la Asociación de Agricultores, la creación de la Estación Experimental de Chocóla, primera fase de lo que en mayor amplitud constituyó después el Instituto Agropecuario Nacional, destinado a realizar importantes labores de investigación y experimentación. Divulgando esas labores y los resultados obtenidos ha venido contribuyendo a difundir conocimientos técnicos de utilidad compro-

bada para lograr satisfactorio éxito en los diversos ramos de producción agropecuaria, como mejores rendimientos y apreciable economía en los costos. Al efecto, se le asignaron para esos trabajos adecuadas secciones de las fincas "Chocolá", "Monterrey" y "Palo Gordo". Se obtuvo también el reconocimiento de que las empresas agrícolas no accionadas, no estaban afectas al impuesto sobre utilidades que recae sobre las demás empresas lucrativas. Varios otros asuntos de interés para los agricultores, fueron también satisfactoriamente contemplados por entonces.

En el comienzo del período gubernativo del Dr. Arévalo se prestó buena atención a las gestiones de la AGA que generalmente contaron con el apoyo de otro competente funcionario y agricultor; el Ministro de Agricultura don Roberto Guirola. Entre los resultados satisfactorios alcanzados en esa época cabe mencionar que la Asociación General de Agricultores, reconocida como sucesora de la extinguida Confederación de Asociaciones Agrícolas de la República, volvió a ejercer representación en la Directiva del Crédito Hipotecario Nacional. Sus delegados también formaron parte principal de la Junta Asesora de la Oficina Central del Café. Se obtuvo autorización para exportar 2,000 novillos gordos. Esto contribuyó a que se organizara sólidamente en el seno de la Asociación la Cooperativa de Ganaderos que continúa en próspera actividad.

Se comenzó a gestar por entonces la legislación reguladora de las relaciones de trabajo entre obreros y empleadores, tendiendo a que rigieran en Guatemala los principios y prescripciones del "nuevo derecho". La Asociación de Agricultores se interesó, desde luego en la cuestión, tomando parte muy activa en ese proceso de gestación. Batalló tenazmente para que en la formulación del Código de Trabajo se tuviera muy en cuenta la realidad guatemalteca con sus peculiares condiciones y necesidades, puesto que el artículo 58 de la Constitución ordena que: "Las leyes que regulen las relaciones entre el capital y el trabajo, atenderán a las circunstancias económicas y sociales del país, a las condiciones y costumbres particulares de cada región y a las características y posibilidades de las diversas clases de actividades. Respecto de los trabajadores agrícolas, el Estado tomará en cuenta las condiciones y necesidades de aquellos, las zonas en que laboran y las demás circunstancias peculiares de esta clase de trabajo". En ese plano sabiamente contemplado, la Asociación propugnó siempre que las relaciones obrero-patronales debían evolucionar sin

violencia, armonizando los requerimientos de la producción agrícola y el aprovechamiento máximo de la capacidad de trabajo, con las normas de equidad y de mutua conveniencia para asegurar efectivamente el mejoramiento económico social de los laborantes campesinos. Así, estudiando a fondo la cuestión, con elevación de miras exentas de sectarismos, con amplio espíritu de previsión, conciencia patriótica y recto sentido de responsabilidad, el Código de Trabajo habría de ser, no instrumento de lucha y semillero de morbosos conflictos, sino equitativo ordenamiento legal, auspiciador de relaciones de mutuo beneficio entre el capital y el trabajo, elementos que recíprocamente se necesitan y se complementan, debiendo reinar entre ellos buen entendimiento para que sea fecunda la vital misión de PRODUCIR que les toca realizar en pro del bien común y de la economía patria.

Mucho insistió la Asociación principalmente en que se dictaran regulaciones separadas y especiales para el trabajo agrícola; que se tuviera en cuenta que el recurso irrestricto de huelga en los campos es incompatible con un régimen estimulante de la producción agrícola y que otro tanto había que considerar respecto a la sindicalización campesina.

No se alcanzó todo lo que hubiera sido deseable para que el Código de Trabajo plasmara ajustándose a la realidad guatemalteca y conforme a los requerimientos de economía nacional. Pero se obtuvo que fueran descartadas o atenuadas muchas inconveniencias que contenía el primitivo proyecto. Y en tal forma el laboreo agrícola pudo adaptarse sin grandes perturbaciones a los preceptos del Código de Trabajo que entró en vigor el 1º de mayo de 1947.

No habían transcurrido aún cuatro meses de vigencia de dicho Código y ya un titulado Comité de Unidad Sindical presentaba al Congreso un proyecto de reformas a la Ley laboral, reavivando la efervescencia que ya se había apaciguado y promoviendo nuevas controversias alrededor de la legislación del trabajo, ya que eran absurdas y tendientes a dificultar más el buen entendimiento y armonía entre el capital y el trabajo, todas las modificaciones, adiciones y supresiones exigidas por los líderes marxistas. Sin embargo, ese proyecto de reformas fué bien acogido en el Congreso, se le dispensaron las lecturas de rigor y pasó a una comisión especial para su estudio.

Cumpliendo un deber imperativo la Asociación de Agricultores se opuso rotundamente a que se llevaran ade-

lante esas reformas y conjuntamente con la Cámara de Comercio e Industria de Guatemala, llevaron a efecto una perseverante y bien fundada campaña, demostrando cuan inconveniente eran los cambios propuestos no sólo para la agricultura, sino también para el comercio, la industria, la economía general y para los propios trabajadores.

Con todo, pesaron más las finalidades políticas, y muchos de esos despropósitos fueron complacientemente sancionados, entre ellos la supresión del capítulo que establecía regulaciones especiales para el trabajo agrícola y para el sindicalismo campesino. Pero al menos, se logró que no prosperaran algunas de las proposiciones que mayor gravedad entrañaban, como la nefasta cláusula de exclusión y la de dejar sin freno alguno el recurso extremo de las huelgas, que hubiera sido de efectos desastrosos para la economía agrícola.

Sería larguísimo hacer referencia a las multiformes actividades de la Asociación General de Agricultores tendientes al progreso de la agricultura tratando de que se le rodee de condiciones propicias o simplemente justas para impulsar satisfactoriamente su desarrollo.

Al iniciar su período gubernativo el presidente Arbenz hizo un llamamiento pidiendo la cooperación de las fuerzas vivas en pro del desarrollo económico y progreso general del país, considerados como puntos básicos de su programa de gobierno. Anticipándose patrióticamente a esa excitativa, una delegación de la Asociación General de Agricultores presentó personalmente al Jefe del Gobierno, una franca exposición en la que estaban condensados los puntos de vista, aspiraciones y necesidades que a juicio del gremio de agricultores, y en consecuencia con la actual realidad guatemalteca, constituían los elementos esenciales que precisaba tomar en cuenta para llevar a cabo, con base en el auge de la producción agrícola, un programa de gobierno constructivo cuya norma primordial debía ser "Gobernar para todos" y no tan sólo para un partido o para una clase.

El presidente Arbenz pareció hacer buen aprecio de la sincera voluntad demostrada por los agricultores para colaborar en pro del desarrollo económico del país; manifestó mucho interés por el mejoramiento agrícola, y ofreció ayudar decididamente a la iniciativa privada, considerándola como el factor principal para el logro de los objetivos que se proponía realizar su gobierno.

Desafortunadamente, estos ofrecimientos y buenos propósitos no se vieron confirmados en la práctica, ya que

durante el primer año de esta administración, se emitieron diversas leyes y disposiciones de consecuencias tan adversas para la buena marcha de la industria agropecuaria, que se desvanecieron pronto las esperanzas que se había concebido de obtener buena atención para los problemas agrícolas, y decayó sensiblemente la confianza pública prevaleciendo la inseguridad.

A mediados de 1952 se supoⁱⁿ tempestivamente que el Ejecutivo había presentado al Congreso de la República un proyecto de reforma agraria que se había estado incubando con el mayor sigilo. Al trascender al público sus lineamientos, se produjo gran estupor y profunda decepción en los sectores agrícolas que poniendo fe en los propósitos repetidas veces enunciados por el coronel Arbenz en pro del mejoramiento agrícola, habían llegado a confiar en que la proyectada transformación del agro no creara obstáculos insuperables a ese mejoramiento, armonizando beneficios positivos para el campesinado con los de la economía agrícola en general, que el señuelo de una ley agraria de tipo marxista no continuaría sirviendo de filón explotable en provecho principalmente del liderismo demagógico o del logrerismo político. Que no prevalecieran en ella las finalidades de política partidista sobre las económico-sociales. Que no sirviera de instrumento a los designios aviesos de quienes dando la espalda a los altos intereses patrios provocan la ruina del país, predicando la lucha de clases, la abolición de la propiedad privada y la destrucción del capital.

Desgraciadamente, como se pudo apreciar al revisarla con detenimiento, la ley propuesta no se adaptaba a los requerimientos de un vigoroso desarrollo económico, desatendía las verdaderas conveniencias nacionales y contravenía terminantes preceptos constitucionales.

En tal virtud, cumpliendo un deber imperativo, la Asociación General de Agricultores dedicó toda su energía y capacidad a tratar de que se corrigieran los vicios y defectos contenidos en el proyecto, a fin de que la transformación del régimen agrario se realizara en condiciones verdaderamente provechosas para la nación, evitando el peligro de causar un desastroso desquiciamiento de la economía nacional. Parece innecesario rememorar los ingentes esfuerzos desarrollados en ese sentido, pues de todos son bien conocidos. No se consiguió rectificaciones de importancia, pero se pusieron en evidencia todos los errores e inconvenientes que encierra esa ley y las funestas consecuencias

que de su aplicación tenían que derivarse. Se ha formado amplia y clara conciencia de todo ello en la ciudadanía. El curso que sigue actualmente el proceso del desbarajuste agrario confirma plenamente las advertencias y previsiones de la AGA y justifica la tenaz campaña sostenida tratando que la evolución de nuestra estructura agraria se desarrolle ordenadamente, sin violencias, patrióticamente, y con estricto apego a la juridicidad.

Ha vuelto a ser la agricultura de Guatemala la peor atendida de todas las actividades económicas de parte de los elementos oficiales. Aquella a la que todo se le exige y nada se le concede. Y de esta suerte, no es de extrañar la crítica situación en que hoy nos vemos, con aguda anemia de capital, de crédito, de confianza, de seguridad. Y con un inquietante problema de desocupación que cada día es más grave.

No obstante, la Asociación General de Agricultores, sin desmayar en el cumplimiento de su misión o invocando una vez más el espíritu de estrecha cooperación del gremio, sigue y seguirá resueltamente el camino que tiene trazado en defensa de los genuinos intereses agrícolas, de la economía general del país y de las verdaderas conveniencias nacionales.

Guatemala, Julio de 1953.

